



Junta General  
del Principado de Asturias

---

# **XII LEGISLATURA**

## **SESIÓN DEL PLENO NÚMERO 66**

### **(23 de junio de 2026)**

#### **ASUNTO NÚMERO 13**

*Dictamen de la Comisión de Investigación al objeto de analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña, y el voto particular del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU-Más País-IAS al mismo (12/0176/0001/14584)<sup>1</sup>*

*Dictamen de la Comisión.....2*

*Voto particular del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU-Más País-IAS .....64*

---

<sup>1</sup> Debate del dictamen y del voto particular y votación del dictamen y, en su caso, del voto particular.



## Junta General del Principado de Asturias

---

*Dictamen de la Comisión de Investigación al objeto de analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña (12/0176/0001/14584)*

**(Publicado en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, serie B, número 676, de 28 de mayo de 2026).**

### *Al Pleno de la Junta General*

La Comisión de Investigación al objeto de analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña, integrada por los diputados doña Covadonga Tomé Nestal, por el Grupo Parlamentario Mixto, como presidenta; doña Delia Campomanes Isidoro, por el Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU Más País IAS, como vicepresidenta; don Luis Miguel Venta Cueli, por el Grupo Parlamentario Popular, como secretario; y, como vocales, don Jacinto Braña Santos y don René Suárez Fernández, por el Grupo Parlamentario Socialista; don Rafael Alonso Alonso, por el Grupo Parlamentario Popular; doña Carolina López Fernández y don Gonzalo Centeno Martín, por el Grupo Parlamentario Vox; don Javier González Vegas, por el Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU Más País IAS; y don Adrián Pumares Suárez, por el Grupo Parlamentario Mixto, eleva, de conformidad con el artículo 71 del Reglamento de la Junta General, al Pleno de la Cámara el siguiente

### DICTAMEN

#### I. ANTECEDENTES

##### **I.1. Creación y composición de la Comisión**

1. Por escrito registrado el 14 de abril de 2025 (RE 18643), diecisiete diputados del Grupo Parlamentario Popular y uno del Grupo Parlamentario Mixto-Foro solicitaron la «creación de una Comisión Parlamentaria de Investigación en el seno de la Junta General al objeto de analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades por la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña».
2. Por acuerdo de 22 de abril de 2025, la Mesa de la Cámara admitió a trámite la solicitud de creación de la Comisión de Investigación al objeto de analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña, abriendo plazo para que los grupos parlamentarios manifiesten, en su caso, su oposición a la creación de la Comisión (BOJG/XII/B/410).
3. Por escrito registrado el 25 de abril de 2025 (RE 18900), la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto renuncia al plazo establecido para manifestar su oposición a la creación de la Comisión.
4. Con fecha 29 de abril de 2025, la Mesa de la Cámara toma conocimiento de dicho escrito y lo asigna al expediente de la Comisión de Investigación.
5. La Mesa de la Cámara, en sesión de 6 de mayo de 2025, constatando que ningún Grupo Parlamentario ha manifestado por escrito su oposición a la Comisión de Investigación al objeto de analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña, acuerda remitir el asunto a la Junta de Portavoces a los efectos



de incluir en el orden del día del próximo Pleno la dación de cuentas de la creación de la Comisión.

6. Con fecha de 7 de mayo de 2025, la Mesa de la Cámara, con el parecer favorable de la Junta de Portavoces del mismo día, acordó que el plazo para la designación de los representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión de Investigación fuese hasta el viernes 9 de mayo y que la citada Comisión se constituyese el jueves 15 de mayo (*BOJG/XII/B/426*).

7. El 13 de mayo, la Mesa de la Cámara tuvo por efectuadas las designaciones de los representantes de los grupos parlamentarios en la Comisión.

8. En el Pleno de 14 de mayo de 2025, se dio cuenta de la creación de la Comisión.

9. El 15 de mayo, la Comisión celebra su sesión constitutiva, en la que se procede a la elección de su Mesa, que resulta integrada por doña Covadonga Tomé Nestal, del Grupo Parlamentario Mixto, como presidenta, y por doña Delia Campomanes Isidoro, del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU-Más País-IAS, y don Luis Miguel Venta Cueli, del Grupo Parlamentario Popular, como vicepresidenta y secretario, respectivamente (*DS/XII/C/209*; *BOJG/XII/B/436*).

## **I.2. Número de reuniones de la Comisión**

Incluida la de constitución y elección de su Mesa, la Comisión celebró 52 reuniones: 15, 23 y 27 de mayo; 18, 20 y 26 de junio; 28 a 31 de julio; 1 a 4, 11 y 12 de septiembre; 6, 8 a 10, 20, 22 y 23 de octubre; 3, 5, 17 y 19 a 21 de noviembre de 2025; 12 a 16, 19 a 23 y 26 a 30 de enero; 6 y 23 de febrero; 13 de abril; 13, 18, 20, 22 y 25 de mayo de 2026.

## **I.3. Actuaciones desarrolladas por la Comisión**

1. La Comisión ha deducido 148 expedientes de solicitudes de información, con arreglo al siguiente desglose:

### **1. A la Administración del Principado de Asturias**

#### **1.1. *Cuestiones relacionadas con el Grupo Cerrredo:***

1.1.1. Expediente de transmisión o cambio de titularidad de derechos mineros del denominado Grupo Cerrredo a COMBAYL, SLU, incluyendo toda la documentación disponible en la Dirección General de Minería y Energía relacionada, directa o indirectamente, con las actividades de COMBAYL, SLU (12/0190/0144/16021).

1.1.2. Plan de labores y Plan de Seguridad presentados por COMBAYL, SLU para desarrollar su actividad después de adquirir los derechos mineros en el denominado Grupo Cerrredo (12/0190/0145/16022).

1.1.3. Proyecto de restauración ambiental que engloba el Grupo Cerrredo elaborado en virtud del Convenio entre el Instituto para la Transición Justa, OA y la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, documentación relativa a la contratación de su ejecución, informes de seguimiento y estado actual de los trabajos de restauración ambiental (12/0190/0146/16023).

1.1.4. Expediente por el que la empresa Blue Solving, SL solicita permiso o autorización de proyecto de investigación complementario con fecha de 5 de junio de 2024, incluyendo solicitud del permiso y documentación, informe técnico previo a la resolución y resolución por la que se le concede el permiso con fecha de 8 de julio de 2024 (12/0190/0147/16024).

1.1.5. Plan de labores y Plan de Seguridad presentados por Blue Solving, SL para desarrollar su actividad después de adquirir los derechos mineros en el Grupo Cerrredo (12/0190/0148/16025).



1.1.6. Informes sobre la situación de los elementos de ventilación, exterior e interior, del Grupo Cerredo, elaborados desde el 12 de julio de 2021 (12/0190/0149/16026).

1.1.7. Memoria presentada por Blue Solving, SL de fecha 5 de junio de 2024 incluida en el proyecto de investigación complementario del Grupo Cerredo aprobado por Resolución de 8 de julio de 2024 (12/0190/0150/16027).

1.1.8. Expedientes de concesión de permisos de explotación, investigación y complementarios concedidos desde julio de 2021 (12/0190/0151/16028).

1.1.9. Expedientes completos de permisos de explotación, desimpactación, investigación y complementarios concedidos en el Grupo Cerredo, indicando fecha de solicitud, empresa solicitante y su representante, fecha de concesión, clase de permiso, actividad y lugar autorizado y medidas y condiciones de seguridad exigidas (12/0190/0152/16029).

1.1.10. Memoria comprensiva denominada «Trabajo de desimpactación-Minas Cerredo» (12/0190/0153/16030).

1.1.11. Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales afectados por la unidad de producción Grupo Cerredo y su adecuación para usos finales del suelo previstos (12/0190/0154/16031).

1.1.12. Memoria de trabajos de desimpactación presentada con fecha de 8 de junio de 2022 (ENT20220486722) (12/0190/0155/16032).

1.1.13. «Memoria de recuperación de material de interior de mina en el Grupo Cerredo», registrada con fecha de 22 de junio de 2023 (12/0190/0156/16033).

1.1.14. Resolución de 18 de noviembre de 2019 por la que se autoriza la ejecución del proyecto de abandono definitivo de labores de la unidad productiva subterránea del Grupo Cerredo (12/0190/0157/16034).

1.1.15. Expediente por el que se autorizó, en Resolución de la Dirección General de Energía y Reactivación de fecha de 18 de noviembre de 2019, la ejecución del plan de abandono de labores subterráneas de la explotación minera del Grupo Cerredo (12/0190/0158/16035).

1.1.16. Expediente de transmisión de los permisos mineros de Compañía Minera Asturleonera, SA sobre el Grupo Cerredo a COMBAYL, SLU (12/0190/0159/16036).

1.1.17. Expediente de concesión de permisos de investigación de recursos mineros del Grupo Cerredo a COMBAYL, SLU (12/0190/0160/16037).

1.1.18. Expediente de transmisión o cambio de titularidad de los derechos y permisos mineros en el Grupo Cerredo de COMBAYL, SLU a Blue Solving, SL, incluyendo toda la documentación relacionada, directa o indirectamente, con las actividades de Blue Solving, SL (12/0190/0161/16038).

1.1.19. Expedientes completos de concesión de autorizaciones, permisos y licencias de cualquier naturaleza, incluidos permisos de investigación complementario, otorgados a la mina de Cerredo desde su explotación por COMBAYL, SLU (12/0190/0162/16039).

1.1.20. Permisos vigentes otorgados a la empresa propietaria para la mina de Cerredo (12/0190/0163/16040).

1.1.21. Informes, jurídicos y técnicos, de la Dirección General de Minas y de la Secretaría General Técnica de la Consejería, emitidos con carácter previo al otorgamiento del permiso de investigación complementario concedido a la empresa Blue Solving por Resolución de 8 de julio de 2024, referidos a la justificación legal de dicho permiso; y expediente completo correspondiente al otorgamiento del mismo (12/0190/0164/16041).



## Junta General del Principado de Asturias

---

1.1.22. Expedientes de concesión de permisos de explotación, investigación y complementarios concedidos desde 2021 en la mina de Cerredo (12/0190/0165/16042).

1.1.23. Expediente AUTO/2024/11307, sobre «Proyecto de investigación complementario Grupo Cerredo piso 1.º y autorización prueba industrial», seguido ante la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico (12/0190/0166/16043).

1.1.24. Expedientes vinculados a la autorización de cualquier tipo de actividad o al desarrollo de cualquier actuación en los yacimientos mineros de Cerredo desde 2021 (12/0190/0167/16044).

### 1.2. *Cuestiones relacionadas con el accidente minero de 2025:*

1.2.1. Actuaciones de la sala del 112 del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA), con indicación de la hora de recepción de la llamada de aviso, medios movilizados y relación nominal y dirección postal de todas las personas movilizadas relativas al siniestro acaecido en la mina de Cerredo el 31 de marzo de 2025 (12/0190/0168/16045).

1.2.2. Relación nominal y dirección de los trabajadores heridos en el accidente del día 31 de marzo que fueron atendidos y evacuados a diferentes centros sanitarios que consta por el dispositivo de Emergencias o recibieron atención médica urgente (12/0190/0169/16046).

1.2.3. Informes realizados por la Brigada de Salvamento Minero, desde la fecha del accidente, 31 de marzo de 2025, desglosados por fechas, incluyendo la identidad y domicilio de los miembros actuantes, su categoría profesional y quién actuaba como jefe de la misma en cada fecha (12/0190/0170/16047).

1.2.4. Informes realizados por la Brigada de Salvamento Minero derivados de actuaciones en el denominado Grupo Cerredo, incluyendo la identidad y domicilio de los miembros actuantes, desde el 12 de julio de 2021 hasta la fecha del accidente, 31 de marzo de 2025, indicando la causa que motivó su actuación y si se hacía o no a requerimiento de la Dirección General de Minería y Energía y, en caso afirmativo, la causa el requerimiento (12/0190/0171/16048).

1.2.5. Atestado elaborado por la Policía Judicial de la Guardia Civil sobre el accidente laboral en la mina de Cerredo (12/0190/0172/16049).

### 1.3. *Permisos mineros y otras cuestiones relacionadas con la Dirección General de Minas:*

1.3.1. Relación y expediente completo de los permisos de explotación, investigación y complementarios concedidos en Asturias desde julio 2021, indicando fecha de solicitud, carácter urgente y su justificación, empresa solicitante y su representante, fecha de concesión y vigencia, tiempo de tramitación, clase o tipo de permiso, actividad autorizada, municipio, lugar, superficie y cuadrículas afectas, condiciones, de cualquier naturaleza, exigidas, y si cuenta o no con planes de laboreo, fechas de inicio y fin de la actividad autorizada (12/0190/0178/16055).

1.3.2. Informes técnico-jurídicos que justifiquen la supresión del Servicio de Seguridad Minera, llevada a cabo en el año 2019 (12/0190/0179/16056).

1.3.3. Expedientes de autorización de cualquier tipo de actividad minera a la empresa COMBAYL, SLU (12/0190/0180/16057).

1.3.4. Expedientes de autorización de cualquier tipo de actividad minera a la empresa Blue Solving, SL (12/0190/0181/16058).

1.3.5. Informes jurídicos en poder de la Administración pública, tanto elaborados por funcionarios de cualquier Administración pública como encargados a personas o entidades externas, en relación con los permisos de investigación complementarios de cualquier actividad minera, así como con cualquier otro permiso o autorización regulado por la legislación minera (12/0190/0182/16059).



## Junta General del Principado de Asturias

---

1.3.6. Expedientes administrativos en los que se dictaron las resoluciones de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, número PA/517/2023/772, de fecha de 27 de noviembre de 2023, y PA/517/2024/160, de fecha 25 de enero de 2024 (12/0190/0183/16060).

### 1.4. *Comisión de Seguridad Minera y actas de inspección:*

1.4.1. Expediente INSP/2024/4055, con inclusión de los documentos: «Memoria de recuperación de material de interior de mina Grupo Cerrredo» y «Memoria de trabajos de desimpactación» presentada con fecha de 8 de junio de 2022 (12/0190/0184/16061).

1.4.2. Expedientes y actuaciones de inspección, de cualquier naturaleza, incluidas las actas de inspección y actuaciones derivadas, realizadas por la Dirección General de Minería y Energía en la explotación o grupo minero de Cerrredo desde el 12 de julio de 2021 (12/0190/0185/16062).

1.4.3. Actas de inspección desarrolladas por cualquier departamento de la Administración del Principado de Asturias en los yacimientos mineros de Cerrredo desde el año 2021 (12/0190/0186/16063).

1.4.4. Acta de inspección realizada por la Dirección General de Minería y Energía en la explotación o grupo minero denominado Grupo Cerrredo de 11 de abril de 2023 (12/0190/0187/16064).

1.4.5. Acta de inspección realizada por la Dirección General de Minería y Energía al Grupo Cerrredo de 20 de septiembre de 2024 (12/0190/0188/16065).

1.4.6. Borradores y actas de las reuniones de la Comisión Regional de Seguridad Minera desde el año 2021, con indicación de sus componentes (12/0190/0189/16066).

1.4.7. Documentación solicitada en la inspección realizada el día 22 de septiembre de 2022 en relación con el procedimiento de inspección de explotaciones en materia de seguridad minera (INSP/2022/7172) (12/0190/0190/16067).

1.4.8. Documento o memoria solicitada en el procedimiento INSP/2022/7172, concretamente en el acta de inspección de la visita realizada con fecha 25 de agosto de 2022 (12/0190/0191/16068).

1.4.9. Acta INSP/2022/7172 autorizando a Blue Solving, SL al reinicio de la actividad en el Grupo Cerrredo, con todos los documentos y expedientes que sirvan de antecedente a la misma (12/0190/0192/16069).

1.4.10. Relación de actuaciones inspectoras relacionadas con Blue Solving, SL; COMBAYL, SLU y Carbones La Vega, SLU desde 2021 (12/0190/0193/16070).

1.4.11. Protocolo que sigue el Servicio de Minería para realizar inspecciones (12/0190/0194/16071).

1.4.12. Relación de inspecciones realizadas por el Servicio de Minería en los años 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, especificando empresa inspeccionada y resultado de la misma (12/0190/0195/16072).

1.4.13. Decretos de nombramiento de los miembros de la Comisión de Seguridad Minera (12/0190/0196/16073).

1.4.14. Desde el 12 de julio 2021, inspecciones realizadas a las minas en las que haya actividad, desglosado cada año, señalando en cada caso: la mina inspeccionada, el motivo de la inspección, la fecha de la inspección, responsable de la inspección y el resultado de la inspección (si hubo algún requerimiento, medida preventiva o infracción imputada) (12/0190/0197/16074).

1.4.15. Actas de las reuniones de la Comisión de Seguridad Minera del Principado de Asturias desde el 12 de julio de 2021 (12/0190/0198/16075).



Junta General  
del Principado de Asturias

---

1.4.16. Actas de la Comisión especial de investigación del accidente Blue Solving desde su creación (12/0190/0199/16076).

1.5. *Cuestiones relacionadas con el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) y otras denuncias y/o escritos recibidos por la Administración:*

1.5.1. Relación del número de comunicaciones realizadas por el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) al correo [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) y, en particular, de todas las relativas a cuestiones mineras que se han efectuado a otro correo electrónico distinto desde junio de 2021, desglosado por años (12/0190/0200/16077).

1.5.2. Denuncia formulada por *email*, dirigida al SAC con fecha 16 de octubre de 2023, en que se ponían de manifiesto presuntas actividades irregulares, así como copia de todo lo actuado desde su recepción (12/0190/0201/16078).

1.5.3. Escrito de la empresa Proyectos Mineros e Ingeniería, SA (Promining) remitido a la Dirección General de Energía y Minería del Principado de Asturias en marzo de 2025, denunciando actividades irregulares en la mina de Cerredo, y de las actuaciones llevadas a cabo a raíz de dicha denuncia (12/0190/0202/16079).

1.5.4. Expediente del Instituto de Transición Justa, OA relativo a la comunicación y documentación anexa remitida por el Instituto a la Dirección General de Energía y Minería a raíz de la recepción de un escrito de la empresa Proyectos Mineros e Ingeniería, SA (Promining), en marzo de 2025 (12/0190/0203/16080).

1.5.5. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 15 de julio de 2021 sobre «pregunta sobre datos del Catastro minero» (12/0190/0204/16081).

1.5.6. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 17 de julio sobre «consulta sobre Catastro Minero (Substancias explotadas)» (12/0190/0205/16082).

1.5.7. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 19 de julio de 2021 sobre «Consulta sobre datos catastrales mineros de Asturias» (12/0190/0206/16083).

1.5.8. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 22 de julio de 2021 sobre «Pregunta sobre datos del Catastro Minero» (12/0190/0207/16084).

1.5.9. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del 14 de septiembre de 2021 sobre «COMINROC: PROBLEMÁTICA NUEVOS PROYECTOS DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES Y DERECHOS MINEROS VIGENTES Y RECONOCIDOS» (12/0190/0208/16085).

1.5.10. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 5 de septiembre de 2022 sobre «STUD: 1-1010378206 FW: Incógnitas accidente Mina de Cerredo» (12/0190/0209/16086).

1.5.11. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 29 de septiembre de 2022 sobre «Consulta establecimiento beneficio minero» (12/0190/0210/16087).

1.5.12. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 18 de octubre de 2022 sobre «consulta establecimiento beneficio minero» (12/0190/0211/16088).



Junta General  
del Principado de Asturias

---

1.5.13. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 22 de diciembre de 2022 sobre «consulta ITC Minas certificado» (12/0190/0212/16089).

1.5.14. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 4 de enero de 2023 sobre «consulta ITC Minas certificado» (12/0190/0213/16090).

1.5.15. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 11 de enero de 2023 sobre «contacto profesional Ing de Minas Luis Bolívar» (12/0190/0214/16091).

1.5.16. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 21 de marzo de 2023 sobre «Actividad Mina de Cerredo» (12/0190/0215/16092).

1.5.17. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 10 de mayo de 2023 sobre «minería» (12/0190/0216/16093).

1.5.18. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 17 de octubre de 2023 sobre «Nueva explotación minera de Cerredo (Degaña)» (12/0190/0217/16094).

1.5.19. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 13 de diciembre de 2023 sobre «Catastro Minero-Principado de Asturias» (12/0190/0218/16095).

1.5.20. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 19 de diciembre de 2023 sobre «Incidencia-AOTO0143T01. Aprobación disposiciones internas seguridad minera» (12/0190/0219/16096).

1.5.21. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 14 de febrero de 2024 sobre «Consulta sobre concesiones de canteras» (12/0190/0220/16097).

1.5.22. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 21 de febrero de 2023 sobre «Expediente administrativo número 05/b-04/31» (12/0190/0221/16098).

1.5.23. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 29 de febrero de 2024 sobre «Investigación Minera» (12/0190/0222/16099).

1.5.24. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 22 de julio de 2024 sobre «Permiso de investigación minera AUTO/2020/18182» (12/0190/0223/16100).

1.5.25. *Email* enviado desde el correo electrónico de SAC al correo electrónico [mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org) del día 2 de abril de 2025 sobre «Nueva explotación minera de Cerredo (Degaña)» (12/0190/0224/16101).

1.5.26. Nombre completo y dirección postal del remitente de la denuncia al Servicio de Atención Ciudadana (SAC) con fecha 16 de octubre de 2023, cuyos únicos datos conocidos son parciales: Óscar Menéndez y dirección de correo electrónico «oscarcerredo@hotmail.com» (12/0190/0225/16102).

1.5.27. Expedientes incoados a partir de las denuncias interpuestas por la mercantil Promining contra Blue Solving; Carbones La Vega, SLU; TYC Narcea y COMBAYL, SLU (12/0190/0226/16103).





## Junta General del Principado de Asturias

---

1.5.28. Expedientes incoados a partir de las denuncias interpuestas por la mercantil Carbones del Río Nalón, SL contra Natural Mining Resources (NMR) y Special Anthracites, SLU (12/0190/0227/16104).

1.5.29. Fecha en que se recibe oficio del Instituto para la Transición Justa con las denuncias formuladas por Promining contra Blue Solving; Carbones La Vega, SLU; TYC Narcea y COMBAYL, SLU, aportando copia de los documentos remitidos (12/0190/0228/16105).

1.5.30. Expediente del Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros relacionado con la solicitud número 1-1064245838 remitido por el Servicio de Atención Ciudadana del Principado de Asturias (12/0190/0229/16106).

1.5.31. Denuncias recibidas en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) entre 2022 y 2025 que sean referentes a la mina de Cerredo (12/0190/0230/16107).

1.5.32. Listado de todas las denuncias o reclamaciones recibidas en el Servicio de Atención Ciudadana (SAC) relativas a cuestiones mineras entre el 1 de enero de 2022 y el 11 de abril de 2025, indicándose: el número de registro, la fecha de la recepción en el SAC, a qué órgano se remitió para que la tratara, la fecha y por qué medio (12/0190/0231/16108).

1.5.33. Todas las denuncias recibidas por cualquier órgano del Principado de Asturias sobre la actividad minera en Cerredo desde 2021 y de los expedientes tramitados en virtud de esas denuncias (12/0190/0232/16109).

### 1.6. *Expedientes sancionadores:*

1.6.1. Expediente del procedimiento SANC/2024/1974, iniciado con fecha de 30 de abril de 2024 por la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico a COMBAYL, SLU (12/0190/0233/16110).

1.6.2. Número de expedientes incoados por accidentes mineros desde el año 2021, con indicación de referencia y resultado (archivo, propuesta de sanción, etc.) (12/0190/0234/16111).

1.6.3. Expediente sancionador por ocupación ilegal de montes seguido por la Consejería de Medio Rural contra la mercantil COMBAYL, SLU, incluyendo eventuales recursos presentados por la citada mercantil (12/0190/0235/16112).

1.6.4. Expedientes sancionadores contra COMBAYL, SLU y Blue Solving (12/0190/0236/16113)

1.6.5. Relación de sanciones impuestas desde 2021 en materia de minería, especificando importe, empresa y motivo de la misma (12/0190/0237/16114).

1.6.6. Expedientes sancionadores incoados entre 2022 y 2025 a la mina de Cerredo (12/0190/0238/16115).

### 1.7. *Cuestiones relacionadas con la Guardería del Medio Natural:*

1.7.1. Relación de todos los expedientes, de cualquier naturaleza, tramitados por la Guardería de Medio Natural y/o Agentes Medioambientales en el municipio de Degaña, desde julio de 2021, indicando fecha de la actuación, tipo o clase de actividad, si era por iniciativa propia, en este caso programada o no, o por denuncia, resultado de la actuación, con indicación del lugar y tipo de irregularidades detectadas, trámite que se dio al informe elaborado y si del mismo se derivaron actuaciones sancionadoras o no (12/0190/0239/16116).

1.7.2. Expedientes tramitados por la Guardería de Medio Natural y/o Agentes Medioambientales en el monte de utilidad pública n.º 144 desde julio de 2021 (12/0190/0240/16117).

1.7.3. Expediente VE202204131312, tramitado por la Guardería de Medio Natural, de fecha de 13 de abril de 2022 (12/0190/0241/16118).



## Junta General del Principado de Asturias

---

1.7.4. Expediente 241/98/Mon/OCUP/00190, tramitado por la Guardería de Medio Natural, con actuaciones de fechas de 23 de abril de 2022 y 24 de junio de 2022 (12/0190/0242/16119).

1.7.5. Expediente INSP/2023/3014, tramitado por la Guardería de Medio Natural, de fecha de 13 de julio de 2023 (12/0190/0243/16120).

1.7.6. Expediente INSP/2024/3073, tramitado por la Guardería de Medio Natural, de fecha de 3 de septiembre de 2024 (12/0190/0244/16121).

1.7.7. Expediente INSP/2024/4613, tramitado por la Guardería de Medio Natural, de fecha 21 de septiembre de 2024 (12/0190/0245/16122).

1.7.8. Actas de inspección de la Guardería de Medio Natural llevadas a cabo en el MUP n.º 144, en Cerredo, Degaña, con fechas 23 de abril de 2022, 26 de abril de 2022, 13 de julio de 2023, 1 de marzo de 2024, 21 de junio de 2024 y 3 de septiembre de 2024, así como de los informes complementarios elaborados y demás actuaciones desarrolladas (12/0190/0246/16123).

1.7.9. Expedientes de la Dirección General de Gestión Forestal, Sección de Montes, con referencias: OCUP/2012/190, AUTO/2022/8880, DECO/2023/24103, DECO/2024/27853 y AUTO/2025/638 (12/0190/0247/16124).

1.7.10. Datos sobre las actuaciones de la Guardería de Medio Natural del Principado de Asturias en los montes colindantes al Grupo Cerredo y, más concretamente, las que se produjeron en relación con indicios de extracción hallados desde abril de 2022, con copia de todo lo actuado (actas, fotografías, informes, etc.) (12/0190/0248/16125).

1.7.11. Comunicaciones mantenidas entre los Servicios de Gestión de Montes y el Servicio de Minas acerca de la información recabada por la Guardería de Medio Natural (12/0190/0249/16126).

1.7.12. Informes de la Guardería de Medio Natural referentes a posibles irregularidades en la mina de Cerredo (12/0190/0250/16127).

### *1.8. Cuestiones relacionadas con reuniones y correos del personal de la Dirección General de Minas:*

1.8.1. Relación de personas que se han registrado o acreditado en el Control de Acceso de las Consejerías de Industria, Empleo y Promoción Económica, de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico y de Transición Ecológica, Industria y Comercio para visitar o reunirse con la directora general de Energía y Minería, desde julio del año 2021 y hasta el 13 febrero de 2025 (12/0190/0251/16128).

1.8.2. Relación de personas que se han registrado o acreditado en el Control de Acceso de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Comercio para visitar o reunirse con la consejera, doña Belarmina Díaz Aguado, desde el 13 de febrero de 2025 y hasta el 8 de abril de 2025 (12/0190/0252/16129).

1.8.3. Relación de reuniones celebradas entre don José Antonio Fernández Casillas y doña Belarmina Díaz Aguado desde julio de 2021, indicando día, tiempo de la reunión y orden del día (12/0190/0253/16130).

1.8.4. Relación detallada de las reuniones mantenidas en la consejería competente en la materia por los consejeros, viceconsejeros, directores generales y jefes de servicio con representantes de COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL, con detalle del motivo de las mismas (12/0190/0254/16131).

1.8.5. Correos electrónicos dirigidos por representantes de COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL a consejeros, viceconsejeros, directores generales y jefes de servicio (12/0190/0255/16132).



## Junta General del Principado de Asturias

---

1.8.6. Correos recibidos en la dirección «[mineria@asturias.org](mailto:mineria@asturias.org)» desde que el jefe de servicio lo dejó de consultar por una supuesta migración y hasta abril de 2025 (12/0190/0256/16133).

1.8.7. Instrucciones que tengan los apoderados de cuentas de correo del Principado de Asturias sobre el manejo de las mismas (12/0190/0257/16134).

### *1.9. Relaciones de personal público y de contratos de trabajo en relación con la minería:*

1.9.1. Relación nominal de puestos de trabajo y plantilla de la dirección competente en materia de minería desde julio de 2021, desglosado por años e indicando puesto, fecha de acceso o, en su caso, de nombramiento, fecha de cese o cambio de destino y puesto que ocupa en la actualidad (12/0190/0258/16135).

1.9.2. Relación nominal de los directores generales, jefes de servicio y jefes de sección con competencia en materia de montes desde julio de 2021 (12/0190/0259/16136).

1.9.3. Relación nominal de los agentes de medio natural con competencia o destinados para la vigilancia e inspección en el concejo de Degaña (12/0190/0260/16137).

1.9.4. Contratos de trabajo celebrados por las empresas COMBAYL, SLU, con CIF B-24559403; Vintools, SLU, con CIF B-09805102; y Blue Solving, SL, CIF B-09892688, desde el 12 de julio de 2021, que constan en el Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y en el Servicio de Empleo Estatal (SEPE) (12/0190/0261/16138).

### *1.10. Cuestiones relacionadas con ayudas públicas:*

1.10.1. Expediente de concesión de ayudas a Blue Solving, SL y COMBAYL, SLU, cuya aprobación definitiva se produjo por Resolución del 19 de junio de 2024, en la convocatoria de 2023 de ayudas dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promuevan el desarrollo alternativo de las zonas de transición justa, con números de proyecto 2023-G059 y 2023-G062 (12/0190/0262/16139).

1.10.2. Convenio entre el Ministerio de Transición Justa y el Principado de Asturias por el que el Principado de Asturias, a través del IDEPA, ahora Sekuens, se convierte en entidad colaboradora a fin, entre otros, de informar sobre el grado de cumplimiento de las bases reguladoras de las convocatorias de ayudas de la orden TED/1240/2022, de 14 de diciembre, publicada en el BOE con fecha 16 de diciembre de 2022, más concretamente la convocatoria del año 2023, y de los informes elaborados sobre las solicitudes de las empresas COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL (12/0190/0263/16140).

1.10.3. Documentos generados por el IDEPA y la Agencia Sekuens como entidad colaboradora del Instituto de Transición Justa en el marco de la convocatoria de 2023 de ayudas a proyectos empresariales generadores de empleo que promueven el desarrollo alternativo de las zonas en transición (12/0190/0264/16141).

1.10.4. Expedientes de ayuda tramitados o en los que haya tenido alguna participación el Principado de Asturias solicitados por las empresas COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL (12/0190/0265/16142).

### *1.11. Direcciones postales:*

1.11.1. Domicilio postal de los exconsejeros don Enrique Fernández Rodríguez, doña María Nieves Roqueñí Gutiérrez y doña María Belarmina Díaz Aguado (12/0190/0266/16143).

1.11.2. Domicilio postal del expresidente de la Autoridad Portuaria de Gijón don Laureano Lourido Artime (12/0190/0267/16144).



## Junta General del Principado de Asturias

---

1.11.3. Domicilio postal de doña Ana María Rodríguez García, de COMBAYL, SLU; de don Adrián Rodríguez Rodríguez, de Blue Solving, SL, y de don Jesús Manuel Rodríguez Morán, de Carbones La Vega, SL (12/0190/0268/16145).

1.11.4. Domicilio postal de los directores facultativos del Grupo Cerredo don Roberto Valdés González y don José Antonio Fernández Casillas (12/0190/0269/16146).

1.11.5. Domicilio postal del exsecretario de la Comisión de Seguridad Minera del Principado de Asturias don Gonzalo Martín Morales de Castilla (12/0190/0270/16147).

### 1.12. Otras cuestiones:

1.12.1. Relación y copia de los contratos de compraventa de carbón procedente de la mina de Cerredo desde que esta comenzó a ser explotada por COMBAYL, SLU (12/0190/0271/16148).

1.12.2. Expedientes de liquidación de la tasa de minas en los que el sujeto pasivo o el sustituto del contribuyente hayan sido las empresas COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL (12/0190/0272/16149).

1.12.3. Expedientes de liquidación de cualquier tipo de tasa o impuesto de gestión autonómica vinculada a la actividad minera en Cerredo desde 2021 en los que el sujeto pasivo o el sustituto del contribuyente hayan sido las empresas COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL (12/0190/0273/16150).

1.12.4. Solicitud de información de la Comisión de Investigación del accidente en la mina de Cerredo sobre identificación nominal de personas (12/0190/0279/16205).

1.12.5. Solicitud de información de la Comisión de Investigación del accidente en la mina de Cerredo sobre identificación nominal, con nombre y apellidos, y medio de contacto de los trabajadores heridos y atendidos en el accidente acaecido en Cerredo el 31 de marzo de 2025 (12/0190/0280/16206).

1.12.6. Solicitud de información de la comisión de investigación del accidente en la mina de Cerredo de relación nominal y contacto de los dos trabajadores que resultaron ilesos en el accidente de la mina de Cerredo el día 31 de marzo de 2025 (12/0190/0282/16299).

1.12.7. Solicitud de información de la Comisión de Investigación del accidente en la mina de Cerredo sobre expediente de investigación instruido por la Dirección General de Energía y Minería a raíz del accidente ocurrido en la explotación o grupo minero Cerredo el 31 de marzo de 2025 (12/0190/0347/21977).

## 2. Al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

2.1. Expediente de concesión de ayudas a Blue Solving, SL para el «Proyecto para instalación de una planta de valorización de subproductos y escombros de la construcción» (Ref.- 2023-G059), por un importe de 927.668,72 € (12/0195/0001/16151).

2.2. Expediente de COMBAYL, SLU, del mismo grupo empresarial, para el «Proyecto de instalación de una planta de fabricación de briquetas de aditivos para uso industrial» (Ref.- 2023-G062), para la concesión de una ayuda por un importe de 619.732,75 € (12/0195/0002/16152).

2.3. Datos sobre las actuaciones de remisión de la denuncia de Promining contra Blue Solving, SL; Carbones La Vega, SLU; TYC Narcea y COMBAYL, SLU a la Dirección General de Industria y Minería del Principado de Asturias, aportando copia del documento y adjuntos objeto de remisión (12/0195/0003/16153).



## Junta General del Principado de Asturias

---

2.4. Datos sobre publicaciones, convocatorias, sujetos concurrentes y adjudicatarios de subvenciones o ayudas públicas con base geográfica en el Principado de Asturias relacionados con COMBAYL, SLU; Blue Solving, SL y Carbones La Vega, SLU (12/0195/0004/16154).

2.5. Expedientes de ayuda tramitados por cualquier departamento de la Administración General del Estado o de sus organismos autónomos que por cualquier concepto hayan sido solicitados por las empresas COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL (12/0195/0005/16155).

### 3. Al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

3.1. Relación nominal de trabajadores que figuren inscritos en el Sistema de Seguridad Social en la cuenta de cotización de las empresas: COMBAYL, SLU, CIF B-24559403; Vintools, SLU, CIF B-09805102; Blue Solving, SL, CIF B-09892688, indicando régimen de Seguridad Social en que están encuadrados y fecha de alta y, en su caso, baja (12/0195/0006/16156).

### 4. A HUNOSA

4.1. Informe sobre el carbón lavado o tratado en el Lavadero Batán desde el 12 de julio de 2021 que consta en HUNOSA en relación con COMBAYL, SLU, Blue Solving, SL y Carbones La Vega, SLU, indicando empresa y fecha en que solicita el servicio y total mensual de toneladas tratadas; procedencia del carbón y su naturaleza (hulla o antracita); empresa de transporte que introduce el carbón en la citada instalación; destino de los estériles-residuos y empresa de transporte y toneladas retiradas mensualmente; relación mensual del carbón expedido desde la instalación, después de su tratamiento, indicando empresa de transporte que retira el carbón, toneladas que transporta y destino del mismo; listado mensual de la facturación a cada empresa por el coste del servicio; relación anual de las empresas que sean deudoras por impago del citado servicio de tratamiento, con indicación de la deuda que mantengan con la empresa HUNOSA a 31 de diciembre de cada año y si se les ha requerido o no el pago, indicando, en caso afirmativo, la fecha del requerimiento (12/0195/0007/16157).

### 5. A la Autoridad Portuaria de Gijón

5.1. Informe sobre las entradas y salidas de carbón del recinto portuario de El Musel desde el 12 de julio de 2021 en relación con COMBAYL, SLU, Blue Solving, SL y Carbones La Vega, SLU, desglosado por años y meses, indicando: empresa propietaria del carbón que hace el depósito en la terminal; empresa de transporte que hace la entrega y número de toneladas depositadas; empresa de transporte que retira el mineral, número de toneladas que salen de la terminal, destino del mismo, empresa persona física vendedora y empresa o persona física compradora; relación mensual de facturación o liquidación de derechos por los servicios portuarios, desglosada por personas físicas o jurídicas, con indicación de la cuantía mensual facturada y liquidada, si han satisfecho o no la deuda y si se les ha requerido o no el pago, indicando, en caso afirmativo, la fecha del mismo (12/0195/0008/16158).

### 6. Al Ayuntamiento de Degaña

6.1. Expedientes administrativos, de cualquier naturaleza, tramitados por el Ayuntamiento de Degaña en relación con las actividades desarrolladas por las empresas COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL en su término municipal desde julio de 2021 (12/0195/0009/16159).

6.2. Licencias municipales solicitadas por las empresas COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL vinculadas a la actividad minera en Cerrado desde 2021, así como los expedientes completos derivados de esa solicitud (12/0195/0010/16160).

6.3. Expedientes de liquidación del impuesto municipal sobre construcciones, instalaciones y obras en los que el sujeto pasivo o el sustituto del contribuyente haya sido las empresas COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL (12/0195/0011/16161).



## Junta General del Principado de Asturias

---

6.4. Expedientes de liquidación de la tasa por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local en los que el sujeto pasivo o el sustituto del contribuyente hayan sido las empresas COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL (12/0195/0012/16162).

6.5. Expedientes de liquidación de la tasa por licencia de actividad y apertura de establecimientos en los que el sujeto pasivo o el sustituto del contribuyente hayan sido las empresas COMBAYL, SLU y Blue Solving, SL (12/0195/0013/16163).

2. La Comisión ha sustanciado 88 comparecencias:

1. Don Borja Sánchez García, en calidad de consejero de Ciencia, Industria y Empleo (12/0253/0087/19262): *DS/XII/C/314*.

2. Don Juan Carlos Campo Rodríguez, en calidad de viceconsejero de Industria (12/0253/0086/19261): *DS/XII/C/314*.

3. Don Javier Fernández Rodríguez, en calidad de director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial (12/0253/0085/19260): *DS/XII/C/313*.

4. Doña Nuria Rodríguez López, en calidad de directora general de Participación Ciudadana, Transparencia, Diversidad Sexual y LGTBI (12/0253/0084/19259): *DS/XII/C/313*.

5. Don Javier Cueli Llera, en calidad de director general de Energía y Minería (12/0253/0083/19258): *DS/XII/C/313*.

6. Doña María Belarmina Díaz Aguado, en calidad de exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Comercio, de ex directora general con competencia en materia de minería, de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0082/19257): *DS/XII/C/312*.

7. Doña Nieves Roqueñí Gutiérrez, en calidad de exconsejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Gobierno del Principado de Asturias y de miembro de la Comisión de Seguridad Minera (12/0253/0081/19256): *DS/XII/C/312*.

8. Don Enrique Fernández Rodríguez, en calidad de exconsejero de Industria, Empleo y Promoción Económica y de miembro de la Comisión de Seguridad Minera (12/0253/0080/19255): *DS/XII/C/311*.

9. Don Isaac Pola Alonso, en calidad de exviceconsejero de Industria y Transición Justa (12/0253/0079/19254): *DS/XII/C/311*.

10. Don Mauro Rodríguez Piedra, en calidad de ex director general de Industria y Minería (12/0253/0078/19253): *DS/XII/C/311*.

11. Doña Diana Bernardo Rodríguez, en calidad de ex secretaria general técnica de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico (12/0253/0077/19252): *DS/XII/C/310*.

12. Don David Villar García, en calidad de director general de Custodia del Territorio y Prevención de Incendios (12/0253/0018/16587): *DS/XII/C/239*.

13. Doña María Elena Colunga Argüelles, en calidad de jefa del Servicio de Industria (12/0253/0029/16598): *DS/XII/C/243*.

14. Doña Verónica Fabián Álvarez, en calidad de jefa del Servicio de Control Ambiental y de funcionaria de la dirección general con competencia en minería que realizó inspecciones, actas o informes de la mina de Cerredo (12/0253/0028/16597): *DS/XII/C/243*.

15. Don Santiago Berjano Serrano, en calidad de funcionario de la dirección general con competencia en minería que realizó inspecciones, actas o informes de la mina de Cerredo, de



Junta General  
del Principado de Asturias

---

miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0030/17545): *DS/XII/C/257*.

16. Don Alberto Quirino Vázquez Martínez, en calidad de jefe de sección de Seguridad Minera, de inspector dependiente de la dirección general con competencia en materia de minería, de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0033/17548): *DS/XII/C/258*.

17. Don José Manuel Embil Fanjul, en calidad de jefe de la Sección de Ordenación Minera (12/0253/0027/16596): *DS/XII/C/242*.

18. Don Alejandro Álvarez Álvarez, en calidad de funcionario de la dirección general con competencia en minería que realizó inspecciones, actas o informes de la mina de Cerredo y de ingeniero inspector de la Sección de Seguridad Minera (12/0253/0024/16593): *DS/XII/C/241*.

19. Don José Enrique Fidalgo Menéndez, en calidad de funcionario de la dirección general con competencia en minería que realizó inspecciones, actas o informes de la mina de Cerredo y de inspector dependiente de la dirección general con competencia en minería (12/0253/0025/16594): *DS/XII/C/242*.

20. Don Javier Vigil Fabián, en calidad de director general de Gestión Forestal (12/0253/0019/16588): *DS/XII/C/240*.

21. Don José Manuel Carral Fernández, en calidad de agente de Medio Natural (12/0253/0013/16582): *DS/XII/C/238*.

22. Don Saúl Olivera Cabo, en calidad de personal de la Dirección General de Minería (12/0253/0020/16589): *DS/XII/C/255*.

23. Doña Emma Pérez López, en calidad de personal de la Dirección General de Minería (12/0253/0021/16590): *DS/XII/C/255*.

24. Doña María del Pilar Valledor Pereda, en calidad de personal de la Dirección General de Minería (12/0253/0031/17546): *DS/XII/C/257*.

25. Doña Consuelo Rodríguez Velázquez, en calidad de personal de la Dirección General de Minería (12/0253/0032/17547): *DS/XII/C/257*.

26. Don David González Fernández, en calidad de director de Sekuens (12/0253/0076/19251): *DS/XII/C/310*.

27. Doña Laura Canto Peri, en calidad de agente de Medio Natural (12/0253/0001/16317): *DS/XII/C/234*.

28. Don José Antonio Álvarez Gómez, en calidad de agente Medio Natural (12/0253/0002/16318): *DS/XII/C/234*.

29. Don Saúl Rodríguez, en calidad de agente de Medio Natural (12/0253/0003/16319): *DS/XII/C/234*.

30. Don César Alonso Guzmán, en calidad de agente de Medio Natural (12/0253/0004/16320): *DS/XII/C/235*.

31. Don Víctor Rodríguez García, en calidad de agente de Medio Natural (12/0253/0005/16321): *DS/XII/C/235*.

32. Don Emiliano Solares Gancedo, en calidad de agente de Medio Natural (12/0253/0006/16322): *DS/XII/C/235*.



Junta General  
del Principado de Asturias

---

33. Don Juan Carlos López Castro, en calidad de agente de Medio Natural (12/0253/0007/16323): *DS/XII/C/236*.
34. Don Íñigo Fernández Martínez, en calidad de coordinador de agentes de Medio Natural (12/0253/0008/16324): *DS/XII/C/236*.
35. Don Jaime Leopoldo Marcos Beltrán, en calidad de jefe del Servicio de Agentes Medioambientales (12/0253/0009/16325): *DS/XII/C/237*.
36. Don Rubén Rodríguez Fernández, en calidad de jefe de sección de la Guardería del Medio Natural y jefe de sección de Prevención de Incendios (12/0253/0010/16326): *DS/XII/C/237*.
37. Don Ángel de Miguel Llanes, en calidad de jefe del Servicio de Gestión Forestal (12/0253/0011/16327): *DS/XII/C/237*.
38. Don Jaime Martín Herrero, en calidad de jefe de sección de Montes y/o Gestión Forestal (12/0253/0012/16328): *DS/XII/C/237*.
39. Don Dictinio Belloso Uceda, en calidad de jefe del Servicio de Montes e Infraestructuras Rurales (12/0253/0014/16583): *DS/XII/C/238*.
40. Don David Valiño Riestra, en calidad de jefe de la Sección de Investigación y Desarrollo Minero (12/0253/0026/16595): *DS/XII/C/242*.
41. Doña Beatriz Herrero Sánchez, en calidad de ingeniera inspectora de la Sección de Seguridad Minera (12/0253/0023/16592): *DS/XII/C/241*.
42. Don Yago Francisco Villa Fernández, en calidad de ingeniero inspector de la Sección de Seguridad Minera (12/0253/0022/16591): *DS/XII/C/241*.
43. Don Alberto Fidalgo López, en calidad de responsable técnico de montes (12/0253/0015/16584): *DS/XII/C/256*.
44. Don Cristóbal Valdés Ámbres, en calidad de técnico de la zona suroccidental (12/0253/0016/16585): *DS/XII/C/239*.
45. Don Fernando Prendes Fernández-Heres, en calidad de ex director general de Infraestructuras Rurales y Montes (12/0253/0017/16586): *DS/XII/C/239*.
46. Don José Catalino Fernández Suárez, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0034/17549): *DS/XII/C/266*.
47. Don Andrés Suárez Vallina, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0035/17550): *DS/XII/C/264*.
48. Don Luis Alberto García Iglesias, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera (12/0253/0036/17551): *DS/XII/C/264*.
49. Don Roberto Mallada Morán, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0037/17552): *DS/XII/C/265*.
50. Don Luis Javier Vázquez López, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0038/17553): *DS/XII/C/266*.





Junta General  
del Principado de Asturias

---

51. Don Jesús Fernández Fernández, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0039/17554): *DS/XII/C/266*.
52. Don Miguel Alonso Pérez, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0040/17555): *DS/XII/C/284*.
53. Don Gustavo García González, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera (12/0253/0041/17556): *DS/XII/C/274*.
54. Doña Nuria Menéndez Martínez, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0042/17557): *DS/XII/C/274*.
55. Don Luis Carlos Ugarte Tundidor, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0043/17558): *DS/XII/C/275*.
56. Don Pablo Rodríguez Fernández, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera (12/0253/0044/17559): *DS/XII/C/282*.
57. Don Gonzalo Martín Morales de Castilla, en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y ex secretario general técnico de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica (12/0253/0045/17560): *DS/XII/C/282*.
58. Don Juan José Fernández Díaz, en calidad de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0046/17561): *DS/XII/C/283*.
59. Don Aníbal Seminario García, en calidad de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving (12/0253/0052/18439): *DS/XII/C/284*.
60. Don Jesús Manuel Rodríguez Morán, en calidad de apoderado de COMBAYL, SLU (12/0253/0088/19263): *DS/XII/C/314*.
61. Don José Antonio Fernández Casillas, en calidad de director facultativo de la unidad productiva del Grupo Cerrredo y de miembro de la Comisión de Seguridad Minera (12/0253/0089/19264): *DS/XII/C/319*.
62. Don Roberto Valdés González, en calidad de director facultativo de COMBAYL, SLU (12/0253/0090/19265): *DS/XII/C/316*.
63. Don Miguel Faustino Martínez Miguélez, en calidad de administrador único de Promining, SA. (12/0253/0091/19266): *DS/XII/C/316*.
64. Don Adrián Rodríguez Rodríguez, en calidad de administrador único de la empresa Blue Solving, SL (12/0253/0092/19267): *DS/XII/C/316*.
65. Doña Ana María Rodríguez García, en calidad de administradora única de la empresa COMBAYL, SLU (12/0253/0093/19268): *DS/XII/C/317*.
66. Don Vitorino Alonso, en calidad de empresario minero (12/0253/0094/19269): *DS/XII/C/317*.
67. Don Óscar Ancares Valín, en calidad de alcalde de Degaña (12/0253/0064/18952): *DS/XII/C/306*.
68. Doña Sofía Barrero Cadenas, en calidad de concejala de Degaña (12/0253/0065/18953): *DS/XII/C/306*.
69. Doña Gemma Álvarez Cereigido, en calidad de alcaldesa de Ibias (12/0253/0066/18954): *DS/XII/C/306*.



## Junta General del Principado de Asturias

---

70. Don José Luis Fontaniella Fernández, en calidad de alcalde de Cangas del Narcea (12/0253/0067/18955): *DS/XII/C/307*.

71. Don Manuel Rodríguez Fernández, en calidad de presidente de Casintra (12/0253/0072/19247): *DS/XII/C/309*.

72. Don José Augusto Suárez García, en calidad de decano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía del Principado de Asturias (12/0253/0070/19245): *DS/XII/C/308*.

73. Don José Antonio Muñiz González, en calidad de vicedecano del Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Minas y Energía del Principado de Asturias (12/0253/0071/19246): *DS/XII/C/308*.

74. Don Miguel Ángel Fernández Rodríguez, en calidad de exconcejal del Ayuntamiento de Degaña (12/0253/0068/18956): *DS/XII/C/307*.

75. Don José Sevillano Valle, en calidad de ex director general de guarda mayor de la zona suroccidental (12/0253/0053/18440): *DS/XII/C/284*.

76. Don Pablo Luis Álvarez Cabrero, en calidad de ex director general de Calidad Ambiental y Cambio Climático (12/0253/0054/18441): *DS/XII/C/285*.

77. Don José Luis Fernández Ramos, en calidad de presidente de la Parroquia Rural de Cerredo (12/0253/0069/19244): *DS/XII/C/315*.

78. Don Cristian Menéndez Cienfuegos, en calidad de brigadista (12/0253/0055/18442): *DS/XII/C/303*.

79. Don David Hevia Simón, en calidad de brigadista (12/0253/0056/18443): *DS/XII/C/303*.

80. Don Iván García Alonso, en calidad de brigadista (12/0253/0057/18444): *DS/XII/C/303*.

81. Don Mario Luis Gómez Faes, en calidad de brigadista (12/0253/0058/18445): *DS/XII/C/304*.

82. Don Paulino Huerta García, en calidad de brigadista (12/0253/0059/18446): *DS/XII/C/304*.

83. Don Oliver Suárez Pérez, en calidad de vigilante (12/0253/0060/18447): *DS/XII/C/304*.

84. Don Raúl González García, en calidad de vigilante (12/0253/0061/18448): *DS/XII/C/305*.

85. Don Antonio Ortega Escalada, en calidad de jefe de brigada (12/0253/0062/18449): *DS/XII/C/305*.

86. Don Iván Rodríguez Martínez, en calidad de jefe de Brigada (12/0253/0063/18450): *DS/XII/C/305*.

87. Doña Estefanía Díaz González, en calidad de persona autorizada por la empresa COMBAYL, SLU (12/0253/0095/21329): *DS/XII/C/327*.

88. Don Miguel Sánchez Suárez, en calidad de director facultativo de COMBAYL, SLU (12/0253/0096/21330): *DS/XII/C/327*.

### **I.4. Memoria de gastos de la Comisión**

Las comparecencias ante la Comisión han devengado, en los términos del Acuerdo de la Mesa de la Cámara de 4 de marzo de 2014, por el que se establece el régimen de gastos derivados de la celebración de comparecencias en las comisiones de la Junta General (*BOJG/IX/C/39*), gastos, en el caso de dos comparecientes, por importe total de 149,18 €, que abarcan gastos de estacionamiento y desplazamiento, imputados a la aplicación presupuestaria 226006, «Reuniones y Conferencias», del Presupuesto de la Junta General.



## II. LO SUCEDIDO Y SU VALORACIÓN POR LA COMISIÓN

### II.1. Introducción

El presente Dictamen de la Comisión de Investigación analiza las posibles responsabilidades por la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña, donde perdieron la vida cinco trabajadores. El marco temporal de la investigación se establece desde el 12 de julio de 2021, fecha que se corresponde con el Auto del Juzgado de lo Mercantil n.º 2 de Oviedo relativo a la situación concursal de la COMPAÑÍA MINERA ASTUR LEONESA, SA EN LIQUIDACIÓN (CMAL-EL).

La mina de Zarréu/Cerredo se encuentra en el concejo asturiano de Degaña, en una zona de montaña que ha estado históricamente ligada a la extracción de carbón. En el momento del accidente, el concesionario de la mina era la empresa llamada Blue Solving. Esta empresa, de reciente creación, tiene por administrador único a don Adrián Rodríguez Rodríguez, y había adquirido sus derechos de la anterior empresa explotadora, Combustibles Asturiana y Leonesa (COMBAYL), cuya administradora única era doña Ana María Rodríguez García. Esta última empresa, a su vez, adquirió los derechos mineros en 2021 en el proceso concursal de la Compañía Minera Astur Leonesa, SA (CMAL). Ambos administradores societarios están unidos por vínculo familiar, hijo y esposa, respectivamente, con don Jesús Rodríguez Morán, quien, presuntamente, adoptaba todas las decisiones societarias relativas a ambas mercantiles.

Con carácter previo al accidente de 31 de marzo de 2025, han existido otros accidentes en la historia reciente de la mina. Ejemplos de ello se encuentran en 2011, donde un minero falleció por asfixia, debido a la falta de ventilación en el fondo de saco en el que estaba trabajando.

Asimismo, en las declaraciones ante la Comisión de Investigación también se han referenciado otros accidentes previos, como el acontecido en 2002, con un minero fallecido (relatado por don César Alonso Guzmán, agente de Medio Natural, en su declaración de fecha 29 de julio de 2025). Por último, el accidente más reciente (sin contar el aquí analizado) se produjo en 2022, con otro resultado mortal. A este se ha hecho referencia de forma recurrente en distintas comparecencias ante la Comisión de Investigación (por ejemplo, se menciona en las sesiones de 30 de julio de 2025, de 1 de septiembre de 2025 o 2 de septiembre de 2025).

Es preciso destacar que el informe del accidente laboral de 2022, emitido por la Sección de Seguridad Minera y firmado por los funcionarios don Alejandro Álvarez y don Alberto Quirino Vázquez, rebate con dureza las afirmaciones de la Mutua Fraternidad Muprespa —incluidas en la documentación aportada por COMBAYL—que atribuían el siniestro a «una actitud imprudente y temeraria» del trabajador gravemente herido. Semejante consideración, unida a la calificación del hecho como un «accidente de circulación» por parte de Quirón Prevención, brindó a la empresa un relato que diluía su responsabilidad en materia de seguridad laboral.

En cuanto al accidente del 31 de marzo de 2025, el mismo ocurrió aproximadamente a las 9:00 horas. El siniestro consistió en una explosión de grisú (una mezcla explosiva de aire y metano) localizada en la galería sobre la denominada capa «Z» del piso 3.º, «Mangueiro». Como consecuencia de la detonación, cinco trabajadores fallecieron y otros cuatro resultaron heridos de gravedad. En el momento del accidente, los derechos concesionales de la mina eran propiedad de la empresa Blue Solving, SL y se encontraba legalmente en fase de cierre y clausura. Las inspecciones técnicas posteriores revelaron que se estaban realizando labores de extracción de carbón (deshulle), que, como se explicará en el dictamen, eran de carácter clandestino.

Esta actividad clandestina no fue un hecho aislado ni imprevisible. La Administración ya había recibido en 2022 una advertencia trágica en forma de otro accidente mortal en la misma



explotación y bajo el mismo grupo empresarial, sin que ello derivara en un reforzamiento efectivo de los mecanismos de control y prevención.

Las investigaciones determinaron que estas labores extractivas se llevaban a cabo en encerrado, lo que significa que se trabajaba sin un circuito de ventilación reglamentario y sin una segunda salida que garantizara la seguridad y evacuación. El día del siniestro, las turbinas de ventilación neumáticas estaban inactivas debido a que las llaves de alimentación de aire comprimido se encontraban cerradas. Esta falta de circulación de aire provocó una acumulación de gas metano en las cavidades generadas por la extracción, alcanzando concentraciones superiores al 4,5 %, lo que creó una atmósfera altamente explosiva. El Servicio de Emergencias del Principado 112 recibió el aviso a las 9:00 horas y la Brigada Central de Salvamento Minero (BCSM) se desplazó al lugar en helicóptero para rescatar a las víctimas. Durante el rescate, se detectaron niveles deficientes de oxígeno (18,6 %) y concentraciones peligrosas de monóxido de carbono y grisú en el interior.

Es preciso reiterar que las averiguaciones de esta Comisión de Investigación se encaminan a determinar responsabilidades sobre la gestión que ha desembocado en el accidente. Es decir, a determinar qué (y, en la medida de lo posible, por qué) falló en el Gobierno y la Administración del Principado de Asturias para que un entramado empresarial pudiera desarrollar conductas cuestionables respecto a la seguridad de los trabajadores y la legalidad vigente.

Por tanto, en este dictamen se tratará de dar respuesta a las responsabilidades políticas y administrativas que eventualmente puedan existir en relación con el accidente, así como realizar una propuesta de recomendaciones para que hechos como este no vuelvan a acontecer. Para ello, se deben analizar, en primer lugar, los requisitos necesarios para la transmisión de derechos mineros, observando si en este caso han sido cumplidos o no. Por otro lado, también se estudiarán los permisos con los que se operaba la mina y para qué habilitan esos permisos. Asimismo, se prestará atención al funcionamiento del procedimiento de inspección y su actuación en el presente asunto. El último tema a analizar, que suscitó debate en las sesiones de la Comisión de Investigación, es el relativo a las subvenciones con las que contaba la mina y la compatibilidad de estas con la explotación efectuada.

## II.2. Fuentes

La documentación utilizada para la realización de este dictamen ha sido:

1. La documentación administrativa facilitada a la Comisión de Investigación a través de solicitudes de información.
2. Las comparecencias, reflejadas en los distintos *Diarios de Sesiones*, celebradas en el seno de la Comisión de Investigación.
3. Otra información —oficial o testimonios— de fuentes abiertas.
4. La distinta normativa, jurisprudencia y doctrina legal que se cite a lo largo del texto.

Asimismo, conviene apuntar que la gran mayoría de la documentación administrativa aportada a la Comisión no cumple con la definición de expediente administrativo señalada en el artículo 70.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, entendiéndose por tal el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedente y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla. En la mayoría de los casos se encuentra una amalgama de carpetas y subcarpetas con archivos documentales separados, sin que se observe un orden o numeración claro y coherente. Esto supone una mala praxis administrativa, así como el posible incumplimiento del precepto citado, y ha dificultado de forma significativa la labor de la Comisión de Investigación referente a esclarecer los hechos investigados.



### II.3. Precedentes

Es preciso asumir, en primer lugar, el marco general de normativa minera.

La Ley de Minas (LM · Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas) establece una secuencia al respecto del trámite a seguir a fin de obtener una concesión minera que permita un aprovechamiento económico del dominio público, establecida en tres pasos, para un recurso como el que nos ocupa (antracita, un tipo de carbón). Cabe notar que lo establecido para la sección C es de aplicación al caso (Sección D).

Título V. Regulación de los aprovechamientos de recursos de la Sección C.			
Capítulo II. Permisos de exploración.			
Permiso	EXPLORACIÓN	1 año	
Capítulo III. Permisos de investigación.			
Permiso	INVESTIGACIÓN	< 3 años	Planes de: Labores / Restauración
Capítulo IV. Explotación			
Concesión	EXPLOTACIÓN	30 años/90 años	Planes de: Labores / Restauración
Tipo	Episodio	Plazo	Requisitos

La EXPLORACIÓN y la INVESTIGACIÓN se regulan mediante permisos, mientras que la EXPLOTACIÓN se regula mediante concesión.

La EXPLORACIÓN es un episodio simple, limitado, sin repercusión en el medio, y que no precisa detalle ni concreción inicial (proyecto) ni presentación ni tramitación de Planes de Labores anuales para el control del desarrollo de los trabajos.

La INVESTIGACIÓN ya requiere definición de la actuación (proyecto), detalle anual de la misma, y ello asociado a la intervención real en el medio, limitada pero cierta, mediante trabajos de prospección de carácter minero (sondeos, calicatas, rozas, estudios geofísicos, muestreos, etc.). Implica la presentación anual de Planes de Labores que secuencien las tareas a realizar en esa anualidad.

La EXPLOTACIÓN resulta ser el título habilitante para el aprovechamiento del dominio público, a largo plazo, mediante proyecto (igualmente), y labores mineras ya del tipo plenamente reconocido como tal (minas), con alteración evidente de la realidad física. Implica la presentación anual de Planes de Labores que secuencien las tareas a realizar en esa anualidad.

Adicionalmente, tanto la INVESTIGACIÓN como la EXPLOTACIÓN requieren de planes de restauración, para reponer o minimizar el daño ambiental efectuado, suponiendo que los trámites ambientales asociados (Estudios de Impacto Ambiental) validen la viabilidad de la actuación, con carácter previo.

En todo caso, hay una diferencia crucial entre una fase (la primera) y las siguientes, tal cual es el acompañamiento de un proyecto en la solicitud.



Permiso de <b>EXPLORACIÓN</b>	-
Permiso de <b>INVESTIGACIÓN</b> Concesión de <b>EXPLOTACIÓN</b>	<b>Proyecto(s)</b>

La consideración obligada de un proyecto para la solicitud (y otorgamiento) de un permiso de investigación minero conlleva atenernos a lo prescrito para tales documentos técnicos.

En segundo lugar, en el ámbito minero reciente, en Zarréu/Cerredo, nos encontramos con los siguientes hitos, inexcusables para el adecuado acercamiento al asunto:

**2014.** Resolución del Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Economía y Empleo, de fecha 16 de diciembre de 2014, del director general de Minería y Energía, don Isaac Pola Alonso, por la cual se autoriza administrativamente la transmisión de las concesiones mineras de la Sección D) 'Constantina, n.º 14.209 y 17 más, de 'Coto Minero Cantábrico, S.A., en liquidación' a favor de 'Compañía Minera Astur Leonesa, S.A.' Ref: GMMC (Gonzalo Martín Morales de Castilla).

**2017.** Resolución del Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Empleo, Industria y Turismo, de fecha 26 de mayo de 2017, del director general de Minería y Energía, don Isaac Pola Alonso, por la cual se aprueba el plan de labores para el año 2017 del Grupo Cerredo (Explotación Subterránea) de CAML. Ref: AVM/jsr (Alberto Quirino Vázquez Martínez). Conforme: Santiago Berjano Serrano [jefe de Servicio de Seguridad Minera]. El plan de labores está suscrito por el director facultativo, don José Antonio Fernández Casillas.

**2018.** Finalizado el lapso anual de vigencia del plan de labores anterior, y dado que no se aprobó ningún otro plan de labores en interior en Cerredo, no hay autorización para la extracción de antracita en Cerredo. Dicho de otro modo, la extracción está prohibida.

**2019.** Resolución del Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, de fecha 18 de noviembre de 2019, de la directora general de Energía, Minería, y Reactivación, doña María Belarmina Díaz Aguado, por la que se autoriza la ejecución del Proyecto de Abandono de Labores de la unidad productiva subterránea del Grupo Cerredo. Ref.: JAGP/jsr (José Antonio García Pérez). Conforme: José Manuel Embil Fanjul [Jefe de Servicio de Seguridad Minera]. El Proyecto (2018) contempla el fin de las labores para diciembre de 2023.

**2021.** El BOPA de 2 de septiembre 2021 expone a Información Pública el Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales afectados por la unidad de producción única – Cerredo (La Granda) y su adecuación para los usos finales del suelo previstos. Con presupuesto de 27.034.421'51 euros, y un plazo de 14 trimestres, firmado por el jefe de Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros, Santiago Berjano Serrano (14 de julio de 2021). Se inicia en septiembre 2022, con final en abril 2026<sup>2</sup>.

**2022.** Resolución del Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, de fecha 21/04/2022, de la directora general de Energía, Minería y Reactivación, doña María Belarmina Díaz Aguado, por la cual se autoriza administrativamente el cambio de titularidad de concesiones mineras en Degaña, de CMAL-EL a COMBAYL.

**2022.** Accidente (25 de agosto de 2022) mortal (1) en exterior, bajo el piso 6.º. Se procede a una paralización cautelar que se levanta el 11 de abril de 2023. Se abre un expediente sancionador por extracción (deshulle) en piso 6.º.

<sup>2</sup> <https://planderecuperacion.gob.es/noticias/se-inicia-la-restauracion-ambiental-de-la-mina-de-carbon-cielo-abierto-de-cerredo-en-el>



**2023.** Resolución del Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, de fecha 27 de noviembre de 2023, de la directora general de Energía, Minería y Reactivación, doña María Belarmina Díaz Aguado, por la cual se autoriza administrativamente el cambio de titularidad de concesiones mineras en Degaña, de COMBAYL a Blue Solving, SL, bajo condiciones.

i. Cese de la producción de carbón.

ii. Desimpactación (o retirada de toda la maquinaria y restos mineros) antes del 11 de abril de 2025.

iii. Presentación de un anteproyecto de implantación de nuevos usos.

iv. Garantías financieras, antes del 31 de diciembre de 2024.

**2024.** Resolución del Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, de fecha 8 de julio de 2024, de la directora general de Energía, Minería y Reactivación, María Belarmina Díaz Aguado, por la cual se aprueba el denominado Proyecto de Investigación Complementario Grupo Cerrredo (Blue Solving) y se autoriza a esa compañía la realización de una prueba industrial respecto del material extraído en cantidad de 60.000 toneladas, en 24 meses. Dado que no se aprobó ningún plan de labores, nunca ha dado comienzo.

**2025.** Accidente (31 de marzo de 2025) mortal (5) en interior, en el piso 3.º.

**2025.** Declaraciones públicas de trabajador afectado sobreviviente del accidente de 2022 atestiguan extracción ilegal de antracita (diario *La Nueva España* del 16 de noviembre 2025).

**2026.** Declaraciones públicas de trabajador afectado sobreviviente del accidente de 2025 atestiguan extracción ilegal de antracita (diario *El Comercio* del 28 de marzo de 2026).

#### **II.4. Autorizaciones sobre la mina de Zarréu/Cerrredo**

Para un adecuado análisis de las actuaciones administrativas relativas a la mina de Zarréu/Cerrredo, es necesario examinar los antecedentes de las resoluciones de aprobación de la transmisión de 27 de noviembre de 2023 y de otorgamiento del permiso de investigación complementario de 8 de julio de 2024 (firmados ambos por la entonces directora general de Minas y Energía, doña María Belarmina Díaz Aguado), es decir, la resolución de Abandono de Labores de 18 de noviembre de 2019 (firmada también por doña María Belarmina Díaz Aguado, como directora general de Minas y Energía) y la aprobación del Proyecto de Rehabilitación (sometido a información mediante anuncio publicado en el BOPA n.º 170, de 2 de septiembre de 2021, firmado por el jefe del Servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Minera, de la Dirección General de Energía, Minería y Reactivación, don Santiago Berjano Serrano), financiado mediante una subvención directa del Instituto para la Transición Justa (ITJ, en adelante) y cuya finalización está prevista para abril de 2026.

##### **A. Aprobación del Proyecto de Abandono de Labores de 18 de noviembre de 2019**

Transcurrido más de un año desde la aprobación del último plan de labores de la mina de Cerrredo (mediante Resolución de 26 de mayo de 2017, firmada por don Isaac Pola Alonso, director general de Minas y Energía), la nueva directora general (entonces de Energía, Minería y Reactivación), doña María Belarmina Díaz Aguado, dicta la resolución de aprobación del plan de abandono de labores de la unidad subterránea de la mina de Cerrredo, presentado por el administrador concursal de la Compañía Minera Astur Leonesa, SA, en fecha 18 de noviembre de 2019.



Debe resaltarse la relevancia de esta resolución que determina la prohibición de extracción de carbón de la mina subterránea de Cerredo, prohibición que no consta que hubiese sido levantada con posterioridad.

Igualmente, implica la restauración y cierre de las bocaminas vinculadas a los accidentes mortales luego acaecidos.

### **B. Aprobación del Proyecto y firma del Convenio de Rehabilitación (2021)**

A lo largo del año 2021 se produce la aprobación definitiva del proyecto de restauración ambiental de la mina de Cerredo, que afecta a un área de 660 ha., y la firma del Convenio entre la presidenta del Instituto para la Transición Justa (organismo autónomo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico —MITECO—) y el consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias por el que se formaliza la subvención de 23,6 millones de euros concedida por el organismo estatal.

La naturaleza del proyecto y el condicionamiento de la subvención concedida son, ambos, incompatibles con la extracción de carbón en la mina de Cerredo, tal y como, por lo demás, se declara en las condiciones de la resolución de aprobación de transmisión de la concesión que se analiza en el epígrafe siguiente y se reconoce expresamente en el Informe de don Santiago Berjano Serrano, jefe del Servicio de Minas de la Consejería de Ciencia, Industria y Comercio de fecha de 26 de junio de 2025, emitido para responder a la solicitud de información formulada por el ITJ respecto de la situación administrativa del Grupo Cerredo. En efecto, en la página 3.<sup>a</sup> del referido informe se indica que «la transmisión de derechos mineros autorizada establece la expresa prohibición de extraer carbón de las UU. PP. en cierre, estando inicialmente autorizada únicamente a la recuperación de equipos y chatarras y depósitos residuales de carbón en el exterior, hasta el 11 de abril de 2025».

### **C. La transmisión (Resolución de 27 de noviembre de 2023)**

Tal y como figura en los distintos documentos administrativos aportados a esta Comisión de Investigación, COMBAYL, el anterior propietario de los bienes y activos correspondientes a la explotación minera de Zarréu/Cerredo, contaba con concesiones de explotación para recursos de la Sección D) Carbón en la denominada «Constantina, n.º 14.209» y 17 más, en las cuales se sustentaba la explotación de la mina.

Autorizada la transmisión de derechos mineros de CMAL a COMBAYL, esta inició un proceso de desimpactación, en el ámbito del cual se produjo el siniestro laboral de agosto de 2022, que dio lugar a dos expedientes sancionadores, uno por extracción ilegal de carbón, que concluyó con abono de la sanción y reconocimiento de la infracción por la mercantil, y otro por diversas infracciones, de distinta índole, que continúa suspendido.

Mediante la Resolución de 27 de noviembre de 2023 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, se autoriza a favor de la sociedad Blue Solving, SL el cambio de titularidad de diversas concesiones mineras de la Sección D). Tal y como señala informe sobre accidente laboral (3/25) en el grupo minero Cerredo [Servicio de Minas / Sección de Seguridad Minera de fecha 3 de marzo de 2026] elaborado por la Dirección General de Energía y Minas del Principado de Asturias, «la transmisión de estos derechos mineros se realiza en el marco del proceso de cierre de ambas unidades productivas del Grupo Cerredo, mina subterránea y mina a cielo abierto, que transmiten al titular tanto los derechos de aprovechamiento o venta de las instalaciones como obligaciones, en cuanto al cierre ordenado de las unidades productivas; sin perjuicio de los derechos del titular para la promoción de las actividades que se encuentran regladas en la Ley de Minas fuera de las unidades productivas del Grupo Cerredo».





Autorizada la transmisión de derechos mineros de COMBAYL a Blue Solving, esta también inició un proceso de desimpactación, en el ámbito del cual se produjo el siniestro laboral de marzo de 2025.

En la Resolución de 27 de noviembre de 2023 se imponen las siguientes condiciones de compatibilidad con el proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales afectado por la unidad de producción Grupo Cerrredo (Degaña) y su adecuación para los usos finales del suelo previstos aprobado en fecha 6 de mayo de 2022 por Resolución de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, previo trámite de información pública (*BOPA* n.º 170, de 2 de noviembre de 2021 —la negrita es de la propia resolución—):

#### «A) CONDICIONES GENERALES DE COMPATIBILIDAD

**CG1. Cese de la producción de carbón.** En ningún caso es autorizable la extracción de carbón de ninguna de las explotaciones, cielo abierto o subterránea, que son objeto del Proyecto, en los términos establecidos en el artículo 29 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, así como en el artículo 12.2 del Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (**PRTR**), correspondiente a la componente 10 del mismo, para proyectos en zonas degradadas a causa de la minería del carbón.

**CG2. Temporalidad de las actuaciones de desimpactación.** Las actuaciones comprendidas en la Memoria de trabajos de desimpactación citada en el antecedente OCTAVO tienen carácter temporal y habrán de estar realizadas al menos doce meses antes de la finalización del Proyecto, establecida en la Resolución de aprobación del mismo para día 11 de abril de 2026; por tanto, antes del día 11 de abril de 2025, salvo autorización expresa de esta Autoridad Minera.

**CG3. Introducción de nuevos usos.** En cuanto a la incorporación de los terrenos e instalaciones del Grupo Cerrredo, mina subterránea o cielo abierto, a “los usos finales del suelo previstos” no son objeto específico del Proyecto, salvo la adecuación topográfica y logística en el marco de las operaciones de restauración y rehabilitación proyectadas. En todo caso, la preservación de los bienes inmuebles referidos en el antecedente CUARTO, para el desarrollo por parte de BLUE SOLVING S.L. de nuevos usos, estará condicionada por la presentación de un **anteproyecto de implantación de los nuevos usos previstos**, que será objeto de estudio y, en su caso, aprobación en el marco del Convenio (*BOPA* n.º 18, de 27 de enero de 2022) por el que se formalizan las ayudas del Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el Marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a proyectos de zonas degradadas a causa de la minería del carbón, sin perjuicio de la normativa ambiental y sectorial que sea de aplicación.

El anteproyecto de implantación de nuevos usos prestará especial atención a la viabilidad ambiental y económica de las nuevas actividades proyectadas. Para la presentación del mismo se establece un **plazo de TRES MESES**, contado a partir de la notificación de la presente resolución.

**CG4. Garantías financieras.** La preservación de los citados elementos se establece sin perjuicio de la responsabilidad que la gestión de los mismos pueda generar a su poseedor actual o futuro, en relación con la recuperación ambiental del entorno restaurado mediante las actuaciones subsidiarias proyectadas y, en general, sobre el medio físico, de conformidad con la legislación en materia medioambiental (aguas, calidad del aire, gestión de residuos, etc.) y demás legislación en materia de protección del medio ambiente que en su momento sea de aplicación.

Consecuentemente, **antes del día 31 de diciembre de 2024**, a los efectos de lo previsto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de



protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras, BLUE SOLVING S.L. **deberá constituir una garantía financiera** equivalente al coste de las operaciones de restauración y rehabilitación para los terrenos e instalaciones preservadas contenidas en el Proyecto y que asciende a la cantidad de TRES MILLONES CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS, CON ONCE CÉNTIMOS (3.112.879,11€) correspondientes a las operaciones de demolición, gestión de residuos y revegetación de las superficies afectadas.

En tanto no se constituyan las garantías referidas, estos costes se mantendrán en el presupuesto del Proyecto, con el objeto de garantizar la completa ejecución del mismo y los elementos que son objeto de preservación serán gestionados de conformidad con lo previsto en el mismo.

Estas garantías podrán ser canceladas o sustituidas, en su caso, por las correspondientes que sean requeridas en el acto de aprobación del plan o planes de restauración vinculados con la aprobación del proyecto o proyectos de incorporación de nuevos usos.

#### **B) CONDICIONES PARTICULARES DE COMPATIBILIDAD**

En función del desarrollo de los trabajos de BLUE SOLVING, S.L. en el ámbito de actuación establecido en el Proyecto y a la vista del anteproyecto requerido en la CG3, se establecerán condiciones particulares, atendiendo a las condiciones específicas de cada una de las unidades preservadas, incluidas en la siguiente relación:

1. Instalaciones anejas al piso cero de la mina subterránea.
2. Bocaminas e instalaciones anejas.
3. Cielo abierto de Cerredo.
4. Tendidos eléctricos interiores.
5. Acopios de carbón.
6. Balsa del piso tercero.».

Por tanto, cuando se produjo el accidente, tal y como concluye la citada Resolución «la explotación minera se encontraba en fase de cierre y clausura de las unidades productivas que lo integran: unidad de explotación a cielo abierto y unidad de explotación subterránea, ambas para extracción de carbón». Asimismo, Blue Solving incumplió con la obligación de prestar la garantía financiera descrita en el apartado «CG4. Garantías financieras», puesto que, expirado el plazo marcado en fecha 31 de diciembre de 2024, no se ha procedido a constituir esta garantía.

#### **D. El proyecto de investigación complementario (Resolución de 8 de julio de 2024).**

Por otro lado, mediante Resolución de 8 de julio de 2024 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, se autorizó un denominado «Proyecto de Investigación Complementario» de Blue Solving para la aplicación de los carbones de Zarréu/Cerredo para nuevos usos, fuera de la producción de carbón térmico, para lo que utilizaría las instalaciones del piso primero y el antiguo transversal para acceder a zonas del yacimiento situadas fuera del perímetro de actuación del proyecto de restauración. La aprobación de dicho proyecto se realizó en los siguientes términos (la negrita es de la propia resolución):

«**PRIMERO.** Aprobar, de acuerdo con la documentación presentada, el denominado “**Proyecto de Investigación Complementario Grupo Cerredo**”, promovido por la sociedad “**BLUE SOLVING, S.L.**”, con CIF Núm. B-09892688, a desarrollar de forma compatible con el Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales afectados por la unidad de producción Grupo Cerredo y su adecuación para los usos finales del suelo previstos, que en la actualidad se llevan a cabo por la Administración del Principado de Asturias, a través de TRAGSA, por cuanto en el PIC se llevarán a cabo labores subterráneas de investigación con la recuperación y acondicionamiento parcial del transversal del piso 1º, desde donde se accederá



mediante guías en capa en dirección Oeste (W), a una zona no investigada y ubicada en el exterior del actual límite de restauración del Grupo Cerrredo.

**SEGUNDO.** Autorizar a la sociedad “BLUE SOLVING, S.L.”, la realización de una “**prueba industrial**” respecto del material extraído en cantidad de **60.000 tn**, durante un periodo de **24 meses**, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente Resolución, a fin de poder comprobar y evaluar cualitativa y cuantitativamente cuantos recursos sean susceptibles de ser utilizados como materia prima de productos de alto valor añadido para usos industriales en los sectores de aceros especiales, grafito, fabricación de componentes de las baterías, plásticos especiales, filtros o paneles fotovoltaicos, etc., entre otros muchos destinos y finalidades, entre los que se incluyen la alimentación de las plantas de **valorización de subproductos y escombros de construcción** y de **fabricación de briquetas de aditivos para uso industrial** proyectadas en el entorno de las antiguas instalaciones del Grupo Cerrredo y referidas en la **PROPUESTA DE RESOLUCIÓN PROVISIONAL PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS, DEL INSTITUTO PARA LA TRANSICIÓN JUSTA** de 22 de diciembre de 2023, (Orden TED/1240/2022, de 14 de diciembre), con el objeto de fomentar la implantación de nuevas actividades económicas sostenibles en el área de Cerrredo y siendo a su vez **compatibles con la rehabilitación y restauración de pasivos ambientales**.

**TERCERO.** El desarrollo del proyecto de investigación promovido, se llevará a cabo ajustándose a la documentación presentada y de acuerdo con el objetivo de **reconocimiento y caracterización del yacimiento** en cuestión y sus recursos, para su utilización en **procesos industriales** como precursores para distintos materiales de carbono de alto interés, tales como carbones activados de ultra-alta porosidad (almacenamiento de gases/energía) o grafitos sintéticos (grafeno, baterías ión-lítio). De cualquier modificación sustancial que se pretenda introducir, deberá darse cuenta a esta Dirección General para su autorización si procediera.

**CUARTO.** “BLUE SOLVING, S.L.”, deberá de dar observancia a las obligaciones propias de los titulares de derechos mineros, entre otras, deberá de proceder a la ratificación o al nombramiento de director Facultativo para este PIC. Asimismo, y previo al inicio de los trabajos de investigación proyectados, se presentará para su aprobación si procede, el correspondiente **Plan de Labores** para el primer año de vigencia del PIC en cuestión, y posteriormente para sucesivos años, de acuerdo con los trabajos previstos para los mismos, en tanto se mantenga vigente el referido proyecto de investigación.

**QUINTO.** De modo general, la ejecución del proyecto presentado se encuentra sujeto a las obligaciones propias de los titulares de derechos mineros establecidas en la vigente legislación sectorial, así como a los requerimientos que, en materia de seguridad minera, establece el R.D. 863/1985, de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, sin perjuicio de cualquier otra obligación que le sea de legal aplicación.

**SEXTO.** De acuerdo con la Resolución por la que se autoriza la transmisión de las concesiones “Constantina”, n.º 14.209 y 17 más, que se adquieren a favor de la sociedad BLUE SOLVING S.L. y que figuran a su titularidad, cualesquiera que sea el tipo de **trabajos** que se proyecten, entre los que se incluyen el desarrollo del **Proyecto de Investigación complementario** presentado, deberán ser **compatibles con el Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales afectados por la unidad de producción GRUPO CERREDO y su adecuación para los usos finales del suelo previstos**, y en todo caso quedarán supeditadas a la previa obtención de las autorizaciones que la normativa exigiera en ese momento.»

Sin embargo, este permiso autorizaba actuaciones en el piso primero y el antiguo transversal, siendo que el accidente se produjo en el piso tercero. No obstante, se analizarán a continuación



las consecuencias del incumplimiento de otorgar la garantía financiera, así como las actividades para las que se habilita esta aprobación del proyecto de investigación complementario.

Cabe señalar que el Proyecto de Investigación Complementario presentado por BLUE SOLVING tiene fecha de 31 de mayo de 2024, siendo autorizado con fecha de 8 de julio del mismo año. No obstante, en el calendario incluido en el PIC se indica que se «ejecutará a lo largo de lo que queda de año 2023 y los dos años siguientes». Ni la empresa ni la administración advirtieron que resultaba imposible ajustarse al calendario y cronograma aportados en el PIC, y, de hecho, no se solicitó subsanación al peticionario antes de su autorización.

En todo caso, a falta de Plan de Labores aprobado, esta autorización no habilita ni ampara ninguna concreta labor minera.

Además, debe subrayarse que, con independencia de su dudosa legalidad, este PIC resulta en todo caso incompatible tanto con el Plan de Abandono de Labores aprobado en 2019 como también con el Proyecto de Restauración (y el subsiguiente Convenio con el ITJ) de 2021.

El IDEPA contribuyó a la subsanación, para cumplimiento del objeto de la convocatoria, y reconocimiento de las ayudas que se citan en el Resuelvo Segundo. Debiendo señalarse que a la misma convocatoria también acudió la mercantil COMBAYL, con otro proyecto a ubicar en las mismas instalaciones de Zarréu/Cerredo, que también obtuvo una propuesta de Resolución favorable a sus intereses.

En este sentido, en el informe remitido por el jefe del servicio de Minas al ITJ de fecha 26 de junio de 2025 (emitido, por tanto, menos de tres meses después del accidente mortal), ya se reconocía la irregularidad absoluta de la «situación administrativa actual» en la mina de Zarréu/Cerredo, tanto respecto de la actuación de las empresas como también respecto de la Administración y el Gobierno del Principado de Asturias:

«La actividad de BLUE SOLVING no se ha ajustado a lo establecido, no sólo en cuanto a la prohibición de extraer carbón, ni otros requerimientos de la Resolución de 27 de noviembre, sino también en cuanto al incumplimiento de la normativa básica en materia de seguridad minera, en una actividad clandestina que conduce al trágico suceso del 31 de marzo; fecha desde la que se establece la paralización cautelar de toda actividad de BLUE SOLVING.

En cuanto a los anunciados nuevos usos, ni por parte de COMBAYL ni de BLUE SOLVING se han presentado solicitudes de aprobación de los proyectos subvencionados por el Instituto para la Transición Justa (ITJ) citados anteriormente, para las actividades recogidas en ellos, dentro del marco de nuestras competencias.

En esta situación se puede entender que la actividad en el Grupo Cerredo quedará definitivamente limitada a la ejecución del Proyecto de rehabilitación en curso; sin perjuicio de las consecuencias que deriven de las investigaciones administrativas y judiciales en curso relativas al trágico accidente del 31 de marzo».

## **E. El incumplimiento de las garantías financieras en la transmisión**

### **Requisitos para la transmisión de derechos mineros:**

Como se señalaba anteriormente, antes de analizar la autorización del proyecto de investigación complementario y sus eventuales consecuencias, se debe comenzar por analizar la Resolución de 27 de noviembre de 2023. En esta, como se observaba, se autorizaba el cambio de titularidad de diversas concesiones mineras, entre las que se encuentra la explotación en la que se produjo el accidente, de COMBAYL a Blue Solving S.L.

Más allá de su dimensión administrativa, la autorización de esta transmisión a una sociedad con un capital social de 3000 euros, sin estructura operativa acreditada y en el seno de un entramado



empresarial de carácter familiar, evidencia una forma de actuación política que permitió dar continuidad a una explotación minera afectada por la Decisión 2010/787/UE.

La Comisión considera relevante que dicha transmisión se autorizase sin que conste una valoración reforzada del perfil del nuevo titular, pese a los antecedentes existentes, entre ellos el accidente de 2022 y las informaciones relativas a actividades de extracción de carbón. Todo ello contribuyó a consolidar el contexto en el que posteriormente se produjo el siniestro.

La transmisión de derechos mineros se regula en los títulos IX de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas (Ley de Minas, en adelante), y del Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería (Reglamento de Minas, en adelante). El artículo 97.1 de la Ley de Minas (y en el mismo sentido el artículo 123.1 del Reglamento de Minas) expresa que:

«Los derechos que otorga una concesión de explotación de recursos de la Sección C)<sup>3</sup> podrán ser transmitidos, arrendados y gravados, en todo o en parte, por cualquiera de los medios admitidos en derecho a favor de las personas que reúnan las condiciones establecidas en el título VIII, con sujeción al procedimiento que se determina en el artículo noventa y cinco»

En cuanto a esas condiciones establecidas en el título VIII, cabe señalar que este fue dejado sin contenido por la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. Por su parte, en el artículo 95 de la Ley de Minas lo que se expresa es (negrita propia):

«Uno. Los permisos de exploración y los de investigación podrán ser transmitidos, en todo o en parte, por cualquier medio admitido en Derecho a personas que reúnan las condiciones establecidas en el Título VIII.

Dos. Para hacer uso de este derecho, deberá solicitarse autorización de la autoridad que hubiere otorgado el permiso, mediante instancia presentada en la Delegación Provincial competente, a la que se acompañará el proyecto de contrato a celebrar o el título de transmisión correspondiente, así como los documentos acreditativos de que el adquirente reúne las condiciones legales antes mencionadas, y los informes y estudios a que se refieren los artículos cuarenta y siete y cuarenta y ocho, con las garantías que se ofrecen sobre su viabilidad.

Tres. La Delegación Provincial o la Dirección General de Minas, según proceda, otorgará la autorización una vez comprobada la personalidad legal suficiente del adquirente y su **solvencia técnica y económica y la viabilidad del programa de financiación**, inscribiendo el cambio de dominio cuando se presente formalizada la correspondiente escritura pública y se acredite el pago del impuesto procedente.

Cuatro. De no considerarse suficiente la solvencia económica del cesionario o racionalmente viable el proyecto de financiación ofrecido, podrá exigírsele la fianza a que se refiere el artículo cuarenta y ocho.

Cinco. Si la cesión no afectase a la totalidad del permiso, se procederá a la demarcación de los diferentes perímetros, dividiéndose el permiso en dos o más, siempre que cada uno de ellos conserve los mínimos exigidos.».

---

<sup>3</sup> Si bien en el caso que nos ocupa nos encontramos ante concesiones mineras de la Sección D) el artículo 1.3 de la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, de modificación de la Ley de Minas, con especial atención a los recursos minerales energéticos establece que «Los preceptos de la Ley de Minas, de la Ley de Fomento de la Minería y sus respectivas disposiciones complementarias que hagan referencia a la sección C) se entenderán igualmente aplicables a la sección D), sin perjuicio de las salvedades que para ésta se establecen en la presente Ley».



Así pues, por un lado, se exige capacidad legal suficiente para ser titular de derechos mineros y, por otro lado, que se acredite la solvencia técnica y económica. El requisito de capacidad legal está referido a las condiciones reflejadas en el título VIII de la Ley de Minas. Sin embargo, como se señalaba, este, que establecía requisitos tales como la necesidad de que quien operase la mina fuese nacional español, a fecha de la Resolución de 27 de noviembre de 2023 ya no se encontraba en vigor, por lo que dichos requisitos no resultan de aplicación.

Por su parte, la referencia a los requisitos de solvencia técnica y económica se describe con más detalle en el artículo 123.3.b) del Reglamento de Minas, que exige que el adquirente de la concesión acredite «su solvencia técnica y económica mediante la presentación de los documentos a que se refieren los artículos 68 de la Ley y 89 de este Reglamento, con las garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad».

El artículo 68 de la Ley de Minas establece:

«Uno. La concesión de explotación se solicitará de la Dirección General de Minas en la Delegación Provincial correspondiente, presentando a tal efecto, además de otros documentos que especifique el Reglamento, el proyecto de aprovechamiento del recurso o recursos de que se trate, proyecto que comprenderá el programa de trabajos, el presupuesto de las inversiones a realizar y el estudio económico de su financiación, con las garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad.

Dos. Si la documentación presentada reuniera los requisitos reglamentarios y el proyecto se estimara adecuado al aprovechamiento racional del recurso definido por la investigación realizada, la Delegación Provincial comprobará sobre el terreno la existencia del mismo, así como el área solicitada dentro de la totalidad o parte de la del permiso original, procediendo, en su caso, a la demarcación correspondiente.».

Mientras, el artículo 89 del Reglamento de Minas expresa:

«La concesión de explotación se solicitará de la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción, en la Delegación Provincial correspondiente, presentando, a tal efecto, por duplicado, los siguientes documentos:

a) Instancia con la designación del terreno solicitado que, en todo caso, deberá estar comprendido dentro del otorgado para el permiso de investigación.

b) Informe detallado de la naturaleza geológica del yacimiento o criadero, investigaciones realizadas y resultados obtenidos, con expresión de los recursos y reservas, todo ello firmado por el titulado competente.

c) Estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento del recurso o recursos de que se trate, que incluirá: Memoria sobre el sistema de explotación, esquema de la infraestructura, programa de trabajo, presupuesto de las inversiones a realizar y estudio económico de su rentabilidad, y fuentes de financiación, con las garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad. Se incluirán, en su caso, los proyectos correspondientes a las instalaciones de concentración o de beneficio de los minerales. Todo ello deberá ser suscrito por titulado de Minas conforme a su competencia.

La presentación de los documentos señalados en los puntos b) y c) podrá hacerse conjuntamente con

la solicitud de la concesión o en el plazo máximo de tres meses a contar de la fecha de la misma.».

Además, se debe tener en cuenta que, tras la entrada en vigor del «Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras», debe realizarse este análisis de solvencia también respecto a los planes de restauración, de acuerdo con la legislación de contratos del sector público (artículo 4.1).



La remisión debe entenderse hecha no solo, pero en particular, al artículo 87.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y al artículo 11.4 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. Esto se pone de manifiesto, igualmente, en el artículo *La transmisibilidad administrativa de los derechos mineros en tramitación* (Martín Morales de Castilla, Gonzalo: 2022), obrante en el Repositorio Institucional de Asturias<sup>4</sup>.

El cumplimiento de los requisitos para la adquisición de derechos mineros ha suscitado un debate relevante en la Comisión de Investigación. Así, en diversos momentos se recrimina que Blue Solving se trata de una empresa de muy reciente creación, con un capital social de solo 3000 euros, que no contaba con trabajadores dados de alta, ni activos tangibles, ni maquinaria a su nombre, ni financiación ajena demostrada, y cuyo administrador solo tenía 21 años. Estas críticas han sido vertidas por diferentes diputados/as.

En concreto, en **la sesión de la Comisión de Investigación del 23 de octubre de 2025**, el señor Centeno Martín (GP VOX) preguntó sobre el carácter de dominio público de las minas a don Luis Javier Vázquez López, compareciente en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving:

«El señor Centeno Martín: (...) para entrar en una empresa que explota el dominio público basta presentarse allí sin avisar, porque no es de la empresa, el carbón y el subsuelo es de todos los españoles. Tiene usted constancia de esto, ¿verdad?»

El señor Vázquez López (miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving): Legalmente así es, son concesiones.»

**En la sesión de 3 de noviembre de 2025**, el mismo diputado, señor Centeno Martín, pregunta sobre la pertinencia o no de que una empresa con determinadas condiciones técnicas y financieras explote una concesión minera. Hace la pregunta a doña Nuria Menéndez Martínez, compareciente en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving:

«... autorizar actividades (...) destinadas en último término a extraer 60 000 toneladas de carbón en dos años, 30 000 por año, a una sociedad que no cuenta con trabajadores de alta y cuya única fuente de financiación es una aportación de 3000 euros (...), usted va a subcontratar una de las actividades de su empresa, ¿se la cedería a otra empresa con estas fuentes de financiación y con esta mano de obra nula?»

La señora Menéndez Martínez (miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving): Yo entiendo que para la adjudicación de esos derechos se habrá completado el procedimiento de evaluación de solvencia técnica, administrativa y financiera.»

Teniendo en cuenta la normativa analizada y las cuestiones suscitadas en la Comisión de Investigación, conviene realizar diversas precisiones sobre la transmisión de una concesión minera de la Sección D), y, concretamente, la realizada por medio de la Resolución de 27 de noviembre de 2023 en favor de Blue Solving, SL. Concretamente, conviene precisar:

- La normativa de minas no exige ninguna edad mínima para ser administrador de una empresa que cuente con uno o varios títulos concesionales en el ámbito minero de la Sección D) (más allá de lo exigido la normativa general), por lo que una persona de 21 años sí podría ser administrador de una sociedad de tales características.
- La normativa de minas no exige requisitos de experiencia previa operando otras minas para

---

<sup>4</sup> <https://ria.asturias.es/RIA/handle/123456789/14668>



poder adquirir títulos concesionales en el ámbito minero de la Sección D).

- La normativa de minas no exige ningún tipo de capital mínimo ni activos concretos para que se le puedan traspasar a una empresa determinadas concesiones mineras.
- Lo que sí exige la normativa minera es un estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento del recurso o recursos de que se trate en el que se debe incluir, entre otras cuestiones, un presupuesto de las inversiones a realizar y estudio económico de su rentabilidad, así como las fuentes de financiación con las que se cuenta y las garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad. Esto implica un análisis de la capacidad patrimonial de la concesionaria. Este examen debe valorar su aptitud para generar ingresos para cubrir los costes e inversiones asociados a la actividad minera (*«presupuesto de las inversiones a realizar y estudio económico de su rentabilidad»*), así como la posibilidad racional de disponer de recursos propios —capital social, otras aportaciones de socios, etc.— o para allegar los de terceros —aportaciones de inversores, financiación bancaria, subvenciones, etc.— para poder financiar la ejecución material de la actividad minera (*«fuentes de financiación, con las garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad»*). Si, realizado ese juicio de solvencia, no se considera solvente a la adquirente, la administración minera puede imponer la prestación de fianza (cfr. artículo 48 LMi).
- Estos estudios acerca de la viabilidad de la operación, y, en especial, la viabilidad económica, no constan en los documentos de la Comisión de Investigación. En los antecedentes de la Resolución de 27 de noviembre de 2023 existe una referencia ambigua que se podría entender a este tipo de estudios, que es la siguiente: «QUINTO: El pasado 13/02/2023, por parte de las representaciones legales de la mercantil COMBUSTIBLES ASTURIANA Y LEONESA, S.L.U. (B-24559403), en lo sucesivo COMBAYL y de BLUE SOLVING S.L. (B-09892688), se solicita de esta Consejería que se autorice administrativamente el cambio de dominio de derechos mineros de la sección D) del Grupo Minero Cerrado, relacionadas en el primero de los antecedentes. A tal efecto se acompaña copia de la escritura de compraventa, protocolizada con en n.º 420 el 10/02/2023, ante el notario de León Francisco Enrique Ledesma Muñiz, por la que COMBAYL vende a BLUE SOLVING, S.L. las concesiones mineras de explotación de la Sección D) del denominado Grupo Minero Cerrado, “Constantina”, n.º 14.209 y 17 más. En dicha escritura queda acreditada la liquidación de los impuestos correspondientes, se incorporan las cláusulas obligatorias que previene la legislación minera. Específicamente en esta escritura de compraventa n.º 420 del 10/02/2023, se recoge que “A los fines y efectos que legalmente procedan, BLUE SOLVING, S.L., declara conocer en su integridad, los particulares del Plan de cierre y abandono y restauración de la mina de interior y a cielo abierto de Cerrado, así como las Resoluciones administrativas que los autorizan y aprueban”. SEXTO: En este sentido, siendo BLUE SOLVING S.L. conocedora del contenido del Proyecto y de su ejecución, a través de TRAGSA, asume, al igual que lo había hecho COMBAYL, que el desarrollo de nuevas actividades mineras en las concesiones “Constantina”, n.º 14.209 y 17 más, cualesquiera que sea el tipo de trabajos de aprovechamiento que se proyecten, deberán ser compatibles con el Proyecto, y en todo caso quedarán supeditadas a la previa obtención de las autorizaciones que la normativa exigiera en ese momento.».
- Aun en el caso de que el proyecto de COMBAYL acredite el cumplimiento de los requisitos de solvencia técnica y económica exigidos por la normativa minera, ni en el expediente ni en la resolución figuran acreditados estos requisitos por parte de Blue Solving, SL, puesto que esta es una entidad jurídica diferente de COMBAYL. Más allá de que pueda ser o no una empresa pantalla (cuestión que no es objeto de este dictamen el analizar) y de que los socios de dichas empresas resulten familiares y formen parte del mismo grupo empresarial, circunstancias que constan en los expedientes promovidos y en las comparecencias celebradas, son entidades distintas, por lo que la solvencia de COMBAYL no tiene necesariamente por qué resultar directamente aplicable a Blue Solving.





- El artículo 123.3 del Reglamento de Minas dispone que es el adquirente quien debe acreditar su solvencia técnica y económica. Por tanto, era Blue Solving quien debía acreditar esa solvencia. Aparentemente, el contrato de servicios suscrito entre ambas mercantiles, al que no se dio ningún trámite, podría evidenciar la falta de solvencia de Blue Solving.
- Si dicha solvencia fue acreditada al realizar la transmisión de derechos mineros (cuestión que, como se indica, no consta en el expediente), los fundamentos jurídicos de la Resolución de 27 de noviembre de 2023 no realizan ningún tipo de análisis sobre esta cuestión. Ello implica que dicha resolución, en lo que a esa solvencia se refiere, adolece de falta de motivación.

#### **Consecuencias del incumplimiento de las garantías financieras:**

La Resolución de 27 de noviembre de 2023 establecía entre sus condiciones generales la obligación de constituir una garantía financiera antes del 31 de diciembre de 2024 de 3.112.879,11 euros. Esta obligación fue recurrida en reposición por Blue Solving en fecha 27 de diciembre de 2024 con una argumentación basada esencialmente en que no consideraba suficientemente motivada dicha garantía y no se le había concedido trámite de audiencia para su imposición. Sin embargo, con carácter posterior, Blue Solving interpuso escrito desistiendo de este recurso de reposición. Asimismo, la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias, mediante Resolución de 25 de enero de 2024, desestimó el citado recurso de reposición.

Por tanto, Blue Solving debía constituir la citada garantía de 3.112.879,11 euros antes del 31 de diciembre de 2024, pero no llegó a realizarlo. Tal y como se establece en la Resolución de 27 de noviembre de 2023, las garantías se exigían a efectos de lo dispuesto en el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades mineras. Esta norma, al prever su régimen sancionador por incumplimientos relacionados con la misma, establece en su artículo 46:

«1. El régimen sancionador aplicable en el ámbito de la protección y rehabilitación del espacio afectado por actividades extractivas, regulado por el presente real decreto, será el previsto en el artículo 121 de la Ley de Minas, modificado en la Ley 12/2007, de 2 de julio, en su disposición adicional primera, incluyendo, cuando proceda, la caducidad del permiso de investigación, autorización o concesión de explotación, en el capítulo II del título VI de la Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos, en lo referente a la gestión de los residuos mineros y en el capítulo V de la Ley 26/2007, de 23 de octubre, en lo referente a la responsabilidad medioambiental.».

Por tanto, se debe acudir al artículo 121 de la Ley de Minas. Este, en su punto segundo, letra f), considera como una infracción grave, castigada con sanciones de hasta 300.000 euros, el «incumplimiento de las obligaciones incluidas en el Plan de Restauración sin la autorización del órgano que lo aprobó, incluyendo la obligación de constituir y mantener la garantía suficiente para su cumplimiento en la cuantía y plazo fijados». Así pues, en primer lugar, procedía que la Administración iniciase un procedimiento sancionador contra Blue Solving. Este resulta competente en base al Estatuto de Autonomía del Principado de Asturias y al «Real Decreto 386/1985, de 9 de enero, sobre valoración definitiva y ampliación de funciones y medios adscritos a los servicios traspasados al Principado de Asturias en materia de industria, energía y minas», que en su anexo I expresa:

«Con sujeción a las bases del régimen minero, el Principado de Asturias asumirá las funciones y servicios que actualmente ejerce el Ministerio de Industria y Energía en Asturias en relación con:

[...]

d) Otorgamiento de los permisos de exploración, de investigación y de las concesiones de



explotación de recursos de la Sección C de la repetida Ley de 21 de julio de 1973, y de la Sección D establecida en la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, solicitados en terrenos situados totalmente dentro de su territorio.

e) Atribuciones relativas a la autorización, inspección y vigilancia de los trabajos de explotación, investigación, exploración y beneficio de minerales y facultades técnicas correspondientes, incluida su aplicación a otros usos. Igualmente, la potestad sancionadora y declaración de caducidad».

Por otro lado, resulta cuestionable que este incumplimiento, además de la sanción descrita, pueda llevar acarreada también la caducidad del título concesional. Esta caducidad, para la explotación de recursos de las Secciones C y D), se regula en el artículo 86 de la Ley de Minas. De los supuestos que el precepto describe, el que podría encajar con estas circunstancias sería el recogido en el punto segundo, que señala que es causa de caducidad cualquiera de las previstas en los apartados uno, dos, cinco y seis del artículo 83 de la Ley de Minas. De este artículo 83 se destaca especialmente el apartado seis, que señala que se declaran caducadas las concesiones «por los supuestos previstos en los artículos de esta Ley que lleven aparejada la caducidad o por el incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización o en los planes de labores anuales cuya inobservancia estuviese expresamente sancionada con la caducidad». Con respecto al «incumplimiento de las condiciones impuestas en la autorización», resulta evidente su concurrencia, pero esto solo conlleva la caducidad cuando dicha autorización expresamente lo prevea. Esto no era el caso en la Resolución de 27 de noviembre de 2023.

Por su parte, el último de los preceptos que se debe analizar respecto a esta posible caducidad es el artículo 87.1 de la Ley de Minas, que establece:

«Con independencia de las causas señaladas en los artículos anteriores de este capítulo, el Gobierno<sup>5</sup>, a propuesta del Ministerio de Industria y oída la Organización Sindical, podrá acordar la caducidad por motivo de grave o reiterada infracción de las condiciones contenidas en el título de otorgamiento de la autorización, permiso o concesión o de normas de observancia obligatoria, en perjuicio del orden público o del interés nacional».

En este caso, concurre la existencia de un incumplimiento grave de las condiciones impuestas en la Resolución de 27 de noviembre de 2023 que menoscaba el interés general al no constituirse la fianza. Sin embargo, dado que ha sido un único incumplimiento, se entiende que lo procedente sería la incoación del procedimiento sancionador resultante de la aplicación del artículo 121.2.f) de la Ley de Minas antes descrito y en ese momento advertir expresamente que, de continuarse con el incumplimiento de esta condición, se iniciará el procedimiento para declarar caducadas las concesiones transmitidas por medio de la Resolución de 27 de noviembre de 2023.

## **F. Sobre la autorización de un proyecto de investigación complementario.**

### **Naturaleza jurídica:**

Durante las comparecencias ante la Comisión de Investigación, uno de los temas que ha generado mayores controversias entre los partícipes ha sido el de los proyectos de investigación complementarios.

Así, en la sesión de 17 de noviembre de 2025, don Gonzalo Martín Morales de Castilla, miembro de la Comisión de Seguridad Minera y ex secretario general técnico de la Consejería de Industria,

---

<sup>5</sup> Debido a la normativa de transferencia de competencias citada, esta referencia al Gobierno se debe entender hecha al Gobierno del Principado de Asturias. Recuérdese que la Ley de Minas es de 1973 y, por tanto, anterior a la normativa de traspaso de competencias.



## Junta General del Principado de Asturias

---

Empleo y Promoción Económica, responde una pregunta planteada por el señor González Vegas (GP Convocatoria por Asturias) acerca de los proyectos de investigación complementarios y, más concretamente, su naturaleza jurídica.

La respuesta incluye un breve recuerdo histórico, incluido el listado de una serie de números de BOPA que hacen referencia a esta figura, y concluye:

«(...) Es decir, entendemos que (por lo menos yo así lo entiendo) esta figura de proyectos de investigación complementario —proyectos, que no permisos, proyectos— es una figura que tiene, obviamente, la categoría de consuetudinaria. Incluso, a mayor abundamiento, el Tribunal Superior de Justicia, la Sala de lo Contencioso, nos dio la razón en sendas ocasiones respecto a la viabilidad jurídica de esta figura. No sé si ha quedado claro (...)».

Sobre lo último que manifestó don Martín Morales de Castilla se debe señalar que en el buscador de jurisprudencia del Consejo General del Poder Judicial (CENDOJ) tan solo existen dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias que hagan referencia a los proyectos de investigación complementarios. Estas son la Sentencia 126/2015, de 23 de febrero, de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (ECLI:ES:TSJAS:2015:447) y la Sentencia 1203/2013, de 28 de octubre, de la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (ECLI:ES:TSJAS:2013:3344). Sin embargo, en ninguna de esas dos sentencias se realiza un análisis exhaustivo de la figura de los proyectos de investigación complementarios, por lo que no se puede concluir que la jurisprudencia avale o no dicha figura.

Por su parte, otros comparecientes ante la Comisión de Investigación caracterizaron estos proyectos de investigación complementarios como excepcionales.

Mientras, al solicitarle información a la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo sobre la base legal de los permisos de investigación complementarios (aunque lo correcto en este caso sería hablar de *proyecto* en lugar de *permiso*), esta, en su respuesta de 14.07.2025 (n.º expediente: 12/0190/0182/16059), ha indicado:

«En relación con la solicitud de información dirigida al Consejo de Gobierno por parte de la Comisión

de Investigación sobre el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025:

Informes jurídicos en poder de la Administración pública, tanto elaborados por funcionarios de cualquier Administración pública como encargados a personas o entidades externas, en relación con los permisos de investigación complementarios de cualquier actividad minera, así como con cualquier otro permiso o autorización regulado por la legislación minera.

Cabe responder:

La base jurídica de los permisos se justifica en los Fundamentos de Derecho de los Proyectos de Investigación complementario y que ya obran en poder de esa Comisión de Investigación.»

Sin embargo, el proyecto presentado por Blue Solving no realiza la fundamentación jurídica señalada. Mientras, la Resolución de 8 de julio de 2024 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico que aprobó el proyecto de investigación complementario de Zarréu/Cerrodo, en su fundamentación jurídica, simplemente se ha limitado a indicar cual es la normativa que considera aplicable. Sin que conste la solicitud de ningún informe al ITJ sobre prohibición de extracción de carbón y la procedencia o no de la devolución de las ayudas concedidas.

Visto todo esto, nos debemos dirigir a esta normativa de aplicación, que en esencia es la Ley de Minas y su Reglamento. En estos no se hace mención alguna a proyectos de investigación complementarios. La Administración asturiana entiende que la aprobación de estos proyectos de investigación complementario se produce en concesiones derivadas de permisos de



investigación. De hecho, la Resolución de 8 de julio de 2024 hace mención a la normativa de estas concesiones de explotación derivadas de permisos de investigación en los siguientes términos:

«PRIMERO.- Ley 22/73, de 21 de julio, de Minas (LMi) modificada por la Ley 54/1980, de 5 de noviembre, sobre recursos minerales energéticos y el R.D. 2857/78, de 25 de agosto que aprueba el Reglamento General para el Régimen de la Minería (RMi), BOE n.º 295 y 296 de 11 y 12 de diciembre de 1978, **con especial referencia al art. 71 LMi y art. 93 RMi relativos** a la aprobación de Proyectos. Asimismo art. 78 RMi, de aplicación analógica al presente supuesto, por cuanto si bien se aprueban unas labores de investigación, la promotora ha solicitado la realización de “pruebas industriales”, se debe dejar constancia de la expresa prohibición de comercialización de mineral, señalándose su cuantía y características, que requiere autorización por esta Administración Minera»

Sin embargo, en los artículos 71 de la Ley de Minas y 93 del Reglamento de Minas los proyectos que se mencionan son los proyectos de aprovechamiento del recurso. Por su parte, en el informe del Servicio de Minas del Principado de Asturias de fecha 26 de mayo de 2025 (si bien dicho informe se refiere a una concesión distinta a la de Zarréu/Cerredo) se afirma expresamente que los proyectos de investigación complementarios se encuentran fuera del ámbito de los permisos de investigación. Concretamente se menciona:

«Con fecha 7/03/2025 (ENT20250270550) la mercantil “SPECIAL ANTHRACITES S.L.U.”, presenta una denuncia por competencia desleal, y otros argumentos que no responden a la realidad, relacionados con una supuesta falta de medidas de seguridad y la confusión relativa a la ejecución de un “Permiso de Investigación” regulado por la Ley de Minas, cuando se trata de un “proyecto de investigación complementario”, en el marco de los derechos mineros –concesiones de explotación- de la titularidad de TYCN, siendo, en general, la finalidad de un PIC la de mejorar el conocimiento del potencial geominero de sus concesiones, de cara al aprovechamiento de los recursos minerales presentes».

Por tanto, si no se trata de permisos de investigación, los proyectos de investigación complementarios deberían entenderse en el marco de una concesión de explotación. Y, según la tesis del Servicio de Minas y de la Dirección General de Energía y Minería del Principado de Asturias, al aprobar el proyecto nos encontraríamos en la esfera de concesiones de explotación derivadas de permisos de investigación. Concretamente, al citarse los artículos 71 de la Ley de Minas y 93 del Reglamento de Minas, la Administración entiende que se trata de un plan de trabajo de una concesión ya existente.

Al respecto, se debe indicar que se tiene conocimiento del artículo del ya citado señor Gonzalo Martín Morales de Castilla de título *Otorgamiento de permisos de investigación: Análisis de las alegaciones más habituales y su contestación*, presentado en 2018 en el V Congreso Nacional de Áridos. En este artículo se indica que los proyectos de investigación complementarios son proyectos de investigación que tienen sustento en una concesión ya existente y cuya finalidad es afianzar y precisar conocimientos geológicos y estratigráficos que permitan la continuación de la explotación minera, la apertura de nuevos frentes o incluso el aprovechamiento de nuevos recursos. El amparo normativo que se indica en este estudio es el artículo 62.5 de la Ley de Minas y el artículo 83 del Reglamento de Minas. Sin embargo, estos artículos ni mencionan ni amparan este tipo de proyectos. Así, el artículo 62.5 de la Ley de Minas expresa:

«El titular de la concesión deberá dar cuenta inmediata a la Delegación Provincial correspondiente del descubrimiento de recursos de presumible interés distintos de los que motivaron el otorgamiento y podrá iniciar su aprovechamiento o renunciar expresamente al mismo. En este último caso el Estado podrá reservarse su explotación, previo el oportuno expediente que se establezca en el Reglamento de esta Ley.».

Mientras, el artículo 83 del Reglamento de Minas indica:



«1. El titular de la concesión deberá dar cuenta inmediata a la Delegación Provincial correspondiente del descubrimiento de recursos de presumible interés distintos de los que motivaron el otorgamiento y podrá iniciar su aprovechamiento o renunciar expresamente a los mismos. En este último caso, el Estado podrá reservarse su explotación, previo el oportuno expediente.

2. Si al titular de la concesión le interesase el aprovechamiento del nuevo recurso descubierto, deberá presentar, antes de iniciar los trabajos, en la Delegación Provincial, el proyecto general de explotación y la información complementaria a que se refiere el artículo 89 del Reglamento, incluyendo los programas de investigación que, en su caso, fuesen necesarios.

La Delegación Provincial determinará si el recurso o recursos descubiertos pueden constituir objeto de la concesión de explotación, y, en caso afirmativo, presentados los documentos citados en el párrafo anterior, propondrá a la Dirección General de Minas e Industrias de la Construcción la variación pertinente de los términos de la concesión remitiendo con el correspondiente informe el título de la misma. Tan pronto le sea devuelto el título modificado, que entregará a su titular, lo comunicará a la Delegación de Hacienda a efectos de tributación por canon de superficie, imponiéndose, en su caso, la tarifa del recurso que resulte más alta.

3. En el caso de que el titular de la concesión renunciara al aprovechamiento de los nuevos recursos, el Estado podrá declarar zona de reserva respecto de los mismos, pudiendo llevar a efecto su explotación en cualquiera de las modalidades establecidas en el capítulo II del título II de la Ley de este Reglamento.».

De la lectura de los preceptos se observa la obligación de que el concesionario informe a la Administración si encuentra recursos de interés distintos de los que motivaron la concesión y, en ese caso, de interesarle el aprovechamiento, se presentará un proyecto de explotación, que puede incluir en su seno programas de investigación. Sin embargo, no ampara proyectos de investigación complementarios presentados de forma autónoma a un proyecto de explotación.

Esta explotación, y la viabilidad de la misma, resulta muy relevante en la normativa de minas. Esta (artículo 71 de la Ley de Minas y 80 de su Reglamento) indica expresamente que «para que pueda otorgarse una concesión de explotación será necesario que se haya puesto de manifiesto uno o varios recursos de la Sección C) susceptibles de aprovechamiento racional». Mientras que, en la sección de concesiones de explotación derivadas de permisos de investigación, en el artículo 77 de la Ley de Minas y en el 88 de su Reglamento se señala que «tan pronto como la investigación demuestre de modo suficiente la existencia de un recurso o recursos de la Sección C), y dentro siempre del plazo de vigencia del permiso de investigación, su titular podrá solicitar la concesión de explotación sobre la totalidad o parte del terreno comprendido en el perímetro de investigación». Esto se complementa con lo expresado en el artículo 89 del Reglamento de Minas, que para la obtención de estas concesiones exige que se presente, entre otra documentación, un estudio de factibilidad y proyecto de aprovechamiento del recurso en el que una de las cuestiones que se le exija que incluya es un estudio económico de la rentabilidad del aprovechamiento y garantías que se ofrezcan sobre su viabilidad.

Sin embargo, proyectos de investigación complementarios como el que nos ocupa se solicitan precisamente para poder estudiar esa viabilidad. De hecho, la Resolución de 8 de julio de 2024 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico que aprobó el proyecto de investigación complementario de Zarréu/Cerredo recordemos que resolvía «Autorizar a la sociedad “BLUE SOLVING, S.L.” la realización de una “prueba industrial” respecto del material extraído en cantidad de 60.000 tn, durante un periodo de 24 meses, a contar desde el día siguiente al de la recepción de la presente Resolución, a fin de poder comprobar y evaluar cualitativa y cuantitativamente cuantos recursos sean susceptibles de ser utilizados como materia prima de productos de alto valor añadido para usos industriales [...]» y,



además indicaba que el objetivo del permiso era de “reconocimiento y caracterización del yacimiento en cuestión y sus recursos, para su utilización en procesos industriales».

Asimismo, el proyecto de investigación complementario que figura en el «expediente por el que la empresa Blue Solving, SL solicita permiso o autorización de proyecto de investigación complementario con fecha de 5 de junio de 2024, incluyendo solicitud del permiso y documentación, informe técnico previo a la resolución por la que se le concede el permiso con fecha de 8 de julio de 2024 (12/0190/0147/16024)», elaborado por don José Antonio Fernández Casillas y visado por el Colegio de Ingenieros Técnicos de Minas y Grado en Ingeniería en fecha 05.06.2024, se manifiesta en el mismo sentido. Este proyecto no incluye ningún tipo de estudio económico de la rentabilidad y es lógico que este no exista puesto que precisamente se solicita realizar una prueba industrial para investigar la compatibilidad del material extraído con determinados usos. Concretamente, el proyecto expresa:

«Es por ello que el objeto del presente Proyecto de Investigación Complementario es la ejecución de labores en la galería en el Piso 1º del Grupo Cerrado, que pueda dar acceso a los recursos existentes en dicho Piso, con la intención posterior de realizar una “prueba industrial” (60.000 tb, durante 24 meses), teniendo por objeto esta prueba el comprobar la aptitud del material analizado para su posible utilización en los referidos procesos industriales y en los proyectos de las plantas de valorización y de briquetas en Cerrado».

Por tanto, a nuestro parecer, no puede entenderse un permiso de estas características como un programa de investigación realizado al amparo de un proyecto general de explotación suscitado por un «descubrimiento de recursos de presumible interés distintos de los que motivaron el otorgamiento». Por tanto, aunque la solicitud contenida en el objeto del proyecto se realizase «al amparo de lo establecido tanto en el art. 70 de la Ley de Minas y el art. 92 del Reglamento General para el Régimen de la Minería, relativos a la aprobación de Proyectos» y se concediese «con especial referencia al art. 71 LMi y art. 93 RMi relativos a la aprobación de Proyectos», esta normativa no ampara este tipo de proyectos.

De hecho, estos proyectos de investigación complementarios podrían tener un más fácil encuadre en el ámbito de los permisos de investigación. Así, aunque se esté operando en el ámbito de una concesión ya existente, lo que se le está solicitando a la Administración es permiso para realizar unos estudios para determinar la viabilidad de la explotación. Siguiendo el artículo 44 de la Ley de Minas, «el permiso de investigación concede a su titular el derecho a realizar, dentro del perímetro demarcado y durante un plazo determinado, los estudios y trabajos encaminados a poner de manifiesto y definir uno o varios recursos de la Sección C) y a que, una vez definidos, se le otorgue la concesión de explotación de los mismos». Mientras, el artículo 59 indica que «el titular de un permiso de investigación podrá realizar en el terreno que éste comprenda cuantas labores se precisen para el mejor conocimiento de los posibles recursos, pero no podrá disponer de éstos para fines distintos a los de la investigación, salvo autorización expresa de la Delegación Provincial correspondiente».

Esto es exactamente lo que se pretende con el proyecto de investigación complementario. Por tanto, con la aprobación de un proyecto de investigación complementario nos encontramos con una figura que, a priori se debería encajar en el ámbito de los permisos de investigación, pero que permite una explotación significativa del mineral como si de una concesión se tratase. De hecho, el artículo citado del señor Gonzalo Martín Morales de Castilla expresamente indica que los proyectos de investigación complementarios son, en esencia, proyectos de investigación, aunque luego los encuadre en el ámbito de las concesiones, en lugar de los permisos de investigación. Sin embargo, existe un detalle, que no resulta menor, que aleja estos proyectos de la esfera de los permisos de investigación. Este es que se autorice también la extracción de una cantidad significativa de mineral. En el caso de la Resolución de 8 de julio de 2024 eran 60.000 toneladas de carbón en 24 meses.



Sin embargo, la objeción política más grave reside en la coincidencia material entre lo autorizado y lo que, en la práctica, constituye una explotación. Cuando un proyecto de investigación complementario permite la extracción de 60.000 toneladas, la invocación de una finalidad investigadora no puede servir para rebajar las exigencias propias de una explotación, tanto en lo que respecta a la seguridad laboral como en el terreno de la protección del medioambiente u otro tipo de aspectos.

Lo problemático de esta cantidad ha sido explicado ante la Comisión de Investigación en las declaraciones de don Luis Javier Vázquez López, que declaró en calidad de miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving.

A la pregunta concreta de don Javier González Vegas (GP Convocatoria por Asturias) sobre si un PIC es una vía para permitir la extracción de mineral de carbón sin que haya permiso de extracción, el compareciente señala:

«(...) Yo no tengo certidumbre sobre ello, la única certidumbre que tengo es aplicar mi sentido común y el conocimiento del sector. Yo eso nunca lo vi, nunca vi aprobar esos proyectos con esa cantidad de carbón, que no se necesita (...)»

En definitiva, todo parece indicar que la figura del proyecto de investigación complementario, más allá de cualquier otra consideración jurídico-administrativa, resultó ser el instrumento escogido para sustanciar una decisión política consciente cuyo objetivo era permitir la realización de extracciones masivas de carbón sorteando los controles propios de una concesión de explotación, la evaluación de impacto ambiental y el espíritu de la Decisión 2010/787/UE y de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética.

En síntesis, con este PIC, Blue Solving obtuvo una autorización con efectos equivalentes a los de los arts. 45 LMi<sup>6</sup> e, incluso, 63 b) LMi<sup>7</sup>, rehabilitando derechos mineros limitados sin someterse a los trámites ordinarios de otorgamiento de permisos o concesiones (incluido el examen de solvencia del art. 47 LMi). Esta práctica, de institucionalizarse, conllevaría difuminar el carácter reglado de las autorizaciones mineras, en una construcción con dos riesgos estructurales importantes:

1. Riesgo de opacidad. Induce a confusión sobre lo realmente otorgado. Problema que se manifiesta actualmente en las comunicaciones que mantiene el Principado con el Instituto de Transición Justa.
2. Riesgo de arbitrariedad. Al tener un carácter eminentemente práctico y consuetudinario, su tramitación depende en gran medida de la discrecionalidad administrativa. Esto puede crear incentivos perversos al permitir usar la figura para dificultar el adecuado control administrativo de las actividades desarrolladas.

#### **Trámites ambientales:**

En relación con los proyectos de investigación complementarios, también se debe realizar una breve reseña acerca de su tramitación ambiental. En el caso de Zarréu/Cerrodo, el proyecto de investigación complementario presentado por Blue Solving, SL y visado por el Colegio de

---

<sup>6</sup> El permiso de investigación concede a su titular el derecho a realizar, dentro del perímetro demarcado y durante un plazo determinado, los estudios y trabajos encaminados a poner de manifiesto y definir uno o varios recursos de la Sección C) y a que, una vez definidos, se le otorgue la concesión de explotación de los mismos.

<sup>7</sup> Podrá solicitarse directamente la concesión de explotación sin necesidad de obtener previamente un permiso de investigación, en los casos siguientes [...] b) Cuando sobre recursos suficientemente reconocidos en derechos mineros caducados, existan datos y pruebas que permitan definir su explotación como consecuencia de mejoras tecnológicas o de nuevas perspectivas de mercado.



Ingenieros Técnicos de Minas y Grado en Ingeniería en fecha 5 de junio de 2024 señala:

«En otro orden de ideas, de la mera lectura del PIC se desprende que el mismo no tiene incidencia ambiental, no estando sometido ni a Evaluación de impacto ambiental, ni a la necesidad de autorización de Plan de Restauración, por lo que no es preciso ningún tipo de tramitación ambiental. Asimismo, el PIC se desarrolla conforme con el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera, con las Instrucciones técnicas que lo desarrollan y resto de la normativa de seguridad minera de aplicación».

Esta tesis es sostenida por la Administración, que autoriza el proyecto sin exigir ningún tipo de trámite ambiental. Sobre esto, el señor Gonzalo Martín Morales de Castilla sostenía en su ya referenciada declaración ante la Comisión de Investigación de fecha 17 de noviembre de 2025 que no se realizaba trámite ambiental porque estos proyectos no presentan implicación ambiental. Sin embargo, el mismo don Gonzalo Martín Morales de Castilla, en su artículo *Otorgamiento de permisos de investigación: Análisis de las alegaciones más habituales y su contestación*, expresaba que los proyectos de investigación complementarios se deben aprobar «con la tramitación ambiental que también proceda».

Por tanto, teniendo en cuenta que el único contexto en el que los proyectos de investigación complementarios pueden encontrar amparo normativo es en el ámbito del descubrimiento de recursos de interés distintos de los que motivaron el otorgamiento de la concesión, no se puede entender que están amparados por la concesión existente, ya que precisamente se ha encontrado algo que esta no preveía.

Así, si estuviésemos en el ámbito estricto de la investigación, se debería exigir una evaluación ambiental simplificada cuando se diesen las circunstancias descritas en el anexo II de la Ley de Evaluación Ambiental, esto es, «Proyectos de investigación minera cuando incluyan alguno de los siguientes trabajos: apertura de un frente piloto, la constitución de una instalación de residuos mineros o la ejecución de galerías de investigación minera».

Sin embargo, este proyecto de investigación complementario autoriza también una extracción significativa de mineral, por lo que debe someterse a evaluación de impacto ambiental ordinaria, a tenor de lo dispuesto en el Anexo I, Grupo 2, de la Ley de Evaluación Ambiental, o a evaluación de impacto ambiental simplificada, a tenor de lo dispuesto en el Anexo II, Grupo 3, de la misma Ley de Evaluación Ambiental.

Lo primero (EvIA ordinaria), dado que se trata de:

«a) Explotaciones y frentes de una misma autorización o concesión a cielo abierto de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D cuyo aprovechamiento está regulado por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas, y normativa complementaria, cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:

1.º.

2.º. Explotaciones que tengan un movimiento total de tierras superior a 200.000 metros cúbicos anuales. [Posible]

3.º

4.º

5.º Explotaciones visibles desde autopistas, autovías, carreteras nacionales y comarcales, espacios naturales protegidos, núcleos urbanos superiores a 1.000 habitantes o situadas a distancias inferiores a 2 km de tales núcleos. [Cierto]

6.º Explotaciones de sustancias que puedan sufrir alteraciones por oxidación, hidratación, etc., y que induzcan, en límites superiores a los incluidos en las legislaciones vigentes, a acidez,





toxicidad u otros parámetros en concentraciones tales que supongan riesgo para la salud humana o el medio ambiente, como las menas con sulfuros, explotaciones de combustibles sólidos, explotaciones que requieran tratamiento por lixiviación in situ y minerales radiactivos.

7.ºExtracciones que, aun no cumpliendo ninguna de las condiciones anteriores, se sitúen a menos de 5 km de los límites del área que se prevea afectar por el laboreo y las instalaciones anexas de cualquier explotación o concesión minera a cielo abierto existente. [Cierto]»

Lo segundo (EvIA simplificada), dado que se trata de:

«h) Explotaciones subterráneas de yacimientos minerales y demás recursos geológicos de las secciones A, B, C y D reguladas por la Ley 22/1973, de 21 de julio, de Minas. Se incluyen las superficies, estructuras e instalaciones (incluidas las de residuos mineros) necesarias para la extracción, tratamiento, almacenamiento, aprovechamiento y transporte del mineral, así como para la gestión de los residuos mineros y restauración del espacio afectado por la actividad minera (proyectos no incluidos en el anexo I).

i) Proyectos de investigación minera cuando incluyan alguno de los siguientes trabajos: apertura de un frente piloto, la constitución de una instalación de residuos mineros o la ejecución de galerías de investigación minera.».

A mayor abundamiento, el PIC se aprueba sin que conste la solicitud del preceptivo informe del Instituto para la Transición Justa sobre la compatibilidad de esta extracción con el artículo 12.2 del Real Decreto 341/2021, que prohíbe expresamente cualquier extracción de carbón en los terrenos objeto de la subvención de 23,6 millones de euros. Esta autorización sustancia una decisión política que podía hacer descarrilar las ayudas del Instituto para la Transición Justa destinadas a la restauración ambiental del entorno del Grupo Cerrredo.

## **G. Autorizaciones en materia de montes**

### **Régimen jurídico:**

Las concesiones mineras del Grupo Cerrredo se ubican en el monte Navarriegos, Bustatán y Los Collados, núm. 144 del Catálogo de Montes de Utilidad Pública, cuyo titular es la Parroquia Rural de Zarréu (en adelante, «MUP 144»). Se rige por la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal, que, siguiendo la legislación básica<sup>8</sup>, califica los MUP como montes de dominio público o demaniales (arts.7.1 a), 8 a 10). La principal consecuencia de la calificación es su sometimiento a un sistema de supervisión, aprovechamientos y autorización.

Para actividades mineras, en concreto, su artículo 39.7 a) dispone que los aprovechamientos extractivos en montes de utilidad pública quedan sujetos a su legislación específica, pero PRECISANDO informe previo vinculante de la Consejería competente en materia forestal, y a la prestación de fianza suficiente en los términos previstos reglamentariamente. Con este artículo, la ley pretende coordinar la normativa de montes con legislación minera. Para su aplicación sigue vigente el Decreto 51/1989, de 21 de marzo<sup>9</sup>, que establece un sistema de tramitación en paralelo.

De la documentación examinada se desprende que el procedimiento no se activa de forma automática. También se pudo observar que ni COMBAYL ni Blue Solving instaron la aplicación

---

<sup>8</sup> La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, califica los montes de utilidad pública como montes pertenecientes a entidades públicas que integran el dominio público forestal (arts. 7, 11, 12 y 16), sometiéndolos a un régimen de autorización (art. 15.2).

<sup>9</sup> Decreto 51/1989, de 21 de marzo, por el que se regula el procedimiento para la autorización de la ocupación de terrenos y de explotaciones mineras en montes de la competencia del Principado de Asturias (BOPA 78 de 5-IV-1989, con corrección en BOPA 10 de 3-V-1989).



del citado decreto en sus respectivas solicitudes de transmisión de derechos mineros para obtener autorizaciones de ocupación del MUP 144.

#### **Tramitaciones relativas al MUP 144:**

En relación con el MUP 144, constan las siguientes actuaciones relevantes para el estudio del caso:

- Resolución del director general de Política Forestal de 9 de abril de 2015. Esta resolución autorizó la transmisión de la concesión de ocupación del MUP 144 a la Compañía Minera Astur Leonesa.
- En ejecución del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 3 de febrero de 2016, se dicta en 8 de febrero de 2016 una resolución que declara vigente la ocupación hasta el 1 de julio de 2019.
- Una Resolución del director general de Infraestructuras Rurales y Montes, de 23 de julio de 2020, deniega la prórroga interesada por Compañía Minera Astur Leonesa el 4 de diciembre de 2017 y declara caducada la autorización sobre el MUP 144 proponiendo someterla a «la consideración del Consejo de Gobierno, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 179.2 del Reglamento de Montes». No consta acuerdo expreso posterior.
- Resolución del director general de Infraestructuras Rurales y Montes de 7 de marzo de 2023. Estima la solicitud de COMBAYL, de 6 de junio de 2022, autorizándola a ocupar 1,2 ha del MUP 144 para parque de maquinaria. Es la única solicitud tramitada de la empresa. En este sentido, hay varias actas de la Guardería de Medio Natural que incorporan un documento aportado reiteradamente por la empresa, que no consta tramitado, como puso de manifiesto el jefe de servicio de Montes, don Ángel de Miguel Llanes, durante la sesión de la Comisión de Investigación del 31 de julio de 2025, quien indica que no constaba registro del escrito y añade que conforme al Decreto 51/1989 este tipo de ocupaciones son competencia del órgano sustantivo, que es el Servicio de Minas. NO CONSTA en la documentación aportada a la comisión documento alguno que acredite autorizaciones de ocupación realizadas por la DG de Minas.
- El entonces jefe de sección de Montes, Ángel de Miguel Llanes, emite informe el 21 de julio de 2023 consultando al Servicio de Minas. El 30 de octubre de 2023, el jefe de servicio de Minas, Santiago Berjano, responde que permanecen vigentes los derechos mineros y que COMBAYL realiza «labores de recuperación de material minero dentro del plan de cierre», sin pronunciarse sobre la legalidad de la ocupación del monte.
- Resulta, por tanto, evidente que la ocupación del monte de utilidad pública 144 por parte de COMBAYL y de Blue Solving no contaba con la autorización dictada por órgano competente a la luz de lo establecido en el Decreto 51/1989, de 21 de marzo.

#### **II.5. Actividad de supervisión en el MUP 144**

El régimen de supervisión del MUP 144 viene determinado por el artículo 40 de la Ley del Principado de Asturias 3/2004, de 23 de noviembre, de montes y ordenación forestal. Este régimen involucra, principalmente, a la consejería competente en materia forestal y a los Guardas de Medio Natural.

La Instrucción GMN 1/2007 establece los procedimientos y los documentos que los guardas de Medio Natural deben emitir en ejercicio de estas funciones.

Los miembros de la Guardería de Medio Natural que comparecieron a las sesiones de la Comisión manifestaron problemas de organización del cuerpo, de transmisión de los flujos de información y de obsolescencia de la mencionada Instrucción GMN 1/2007.

La Comisión considera relevante al caso reflejar de forma sucinta lo incluido en las siguientes



actas suscritas por el funcionario de la GMR (NIP 33 1030 JC) adscrito a la supervisión de las actividades realizadas en el MUP 144:

- *Acta de 23 de abril de 2022 e informe complementario de 11-05-2022.* Se observan trabajos para explotar una bocamina de interior conocida como «el sexto». In situ, preguntó a un trabajador que lo remite a las oficinas, en las que ese día no había nadie. Volvió a ellas el 3 de mayo, para encontrarse con el facultativo Roberto Valdés González, que a la sazón actuaba en representación de la empresa COMBAYL. El ingeniero comunicó que todavía no habían iniciado la explotación y que solo se trataba de trabajos de preparación, pues estaban pendientes de autorizaciones.
- *Acta de 13 de julio de 2023.* Se vuelve a constatar la realización de trabajos en la zona. Emite informe complementario al día siguiente describiendo que en el lugar continúa habiendo material para explotación minera de interior; que sigue sin constar autorización para la ocupación del MUP 144; y se remite a su acta de abril de 2022 en cuanto a la identidad de los implicados. Esta acta da lugar a las comunicaciones entre los servicios de Montes y Minas, antes reseñados, que se desarrollan entre junio y octubre de 2023.
- *Acta de 21 de junio de 2024.* De nuevo, se eleva acta ante trabajos detectados con informe complementario de 24 de junio de 2024. Se reitera que la empresa precisa contar con permisos para trabajar en el MUP 144 y que el actuario es desconocedor de la situación administrativa de la empresa con quien está tratando, a pesar de que esta le entrega una solicitud.
- *Acta de 3 de septiembre de 2024.* Se vuelven a detectar trabajos. Se emite informe complementario de 6 de septiembre de 2024. El informe resalta varias cuestiones, entre ellas, que los operarios le manifestaron pertenecer a COMBAYL y que estaban «preparando, limpiando y despejando la galería (tierra, rocas, etc.) para más adelante sacar o explotar carbón». Asimismo, describe un encuentro con Jesús Rodríguez Morán, quien comunica que es el «dueño» de la empresa (aunque concreta que más exactamente lo es su hijo) y que solicitó la ocupación de las plazas del nivel 2.º y 3.º, con intención de utilizarlas para explotar carbón. Igualmente, se hace constar que dijo que «ya lo restaurarán y está en contacto a niveles altos y tiene contactos con Medio Ambiente... Somos todos paisanos y con voluntad todo se arregla». El funcionario cierra el informe llamando la atención sobre la falta de información en relación con la situación de la empresa con el MUP 144.
- *Denuncia de 21 de octubre 2024.* El actuario formula una *denuncia* por los trabajos detectados. En concreto, se describe una ocupación consistente en una zanja de unos 70 metros en la zona de la bocamina «el sexto». Esta denuncia dio lugar a la incoación de expediente sancionador contra COMBAYL al que ya se hizo referencia.
- *Acta de 6 de febrero de 2025.* Se vuelve a levantar acta sobre los vertidos al río.

## II.6. Actividad de inspección

Con carácter previo es preciso recordar que, en 2019, de forma sorpresiva, tal y como recoge el informe de la IGS de mayo de 2021, se suprime el Servicio de Seguridad Minera, mediante el Decreto 81/2019, de 30 de agosto, que pasa a tener el nivel de Sección. Tras el accidente acaecido en agosto de 2022, también resultan relevantes las manifestaciones, relativas a COMBAYL, efectuadas en el seno de la Comisión de Seguridad Minera, sobre valoración de este tipo de empresas y, especialmente, la afirmación de que existirá un control e inspección en profundidad por parte de la Autoridad Minera.

Se ha observado a lo largo de este dictamen que Blue Solving ha realizado diversos incumplimientos normativos que han desembocado finalmente en el trágico accidente de 31 de marzo de 2025. Parte de responsabilidad, por tanto, también recae sobre los órganos de



inspección, que no alertaron de dichos incumplimientos normativos e instaron los procedimientos sancionadores correspondientes que, entre otros puntos, podrían permitir la clausura definitiva de la explotación, toda vez que nos encontrábamos ante una explotación clandestina.

En el expediente de investigación instruido por la Dirección General de Energía y Minería a raíz del accidente ocurrido en la explotación o grupo minero Cerredo el 31 de marzo de 2025, figuran las siguientes actas de inspección:

- Acta de inspección de 11 de abril de 2023: En esta acta se formaliza el reinicio de la actividad (recuperación de equipos, chatarras y acopios de estériles carbonosos procedente de anteriores labores de aprovechamiento) por parte de COMBAYL. Tras una inspección para verificar los medios materiales y la documentación de seguridad, se dejó sin efecto la paralización temporal que pesaba sobre la mina desde el accidente previo en agosto de 2022. Además, se requiere la ejecución inmediata de las actuaciones o trabajos necesarios para la señalización y cierre de los accesos al interior de la antigua explotación.
- Acta de inspección de 23 de mayo de 2023. Durante esta visita de control habitual, los inspectores señalan que procedieron a comprobar que el Grupo Cerredo continuaba en fase de clausura y cierre, verificando que los accesos a los diferentes niveles de la mina (pisos 1.º al 6.º) se encontraban inaccesibles, vallados o hundidos.
- Acta de inspección de 19 de julio de 2023. Esta inspección indica que los trabajos realizados se corresponden con lo establecido en la Memoria de Trabajos de Desimpactación. Se observó que continuaba la retirada de residuos carbonosos en el exterior y se revisaron los accesos del piso 1.º al 6.º, encontrando que la mayoría estaban cerrados, pero eran transitables (entre ellos, el piso tercero).
- Acta de inspección de 24 de agosto de 2023. En esta visita se inspeccionaron los pisos 2.º y 3.º. Sobre este piso 3.º, en el que se produjo posteriormente el accidente de 31.03.2025, se señala: «En lo referido al piso 3.º, en el momento de la visita se realizan trabajos de acondicionamiento del transversal general de acceso, actualmente situados a unos 150 m de la bocamina, con el objeto de la recuperación de dos equipos de ventilación y de transporte de mineral (transportador blindado) correspondientes al trazado de las antiguas galerías en mineral, situadas a unos 300 m de bocamina en iniciadas desde el citado transversal». Asimismo, se indica que «se visitan las instalaciones correspondientes al taller mecánico de la explotación, donde se realizan trabajos de recuperación y acondicionamiento de equipos mineros (locomotoras, cabrestantes, equipos perforación etc.) para su reutilización o achatarramiento en su caso». El acta concluye que estas tareas de desimpactación eran compatibles con el proyecto de rehabilitación ambiental y cumplían con el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera (Real Decreto 863/1985, de 2 de abril).
- Acta de inspección de 3 de octubre de 2023. En esta acta se indica que los inspectores accedieron al transversal del piso 3.º, donde se realizaban trabajos de limpieza y sostenimiento a 160 metros de la entrada para recuperar equipos eléctricos y de transporte en desuso. Sobre este piso también se indica que «Se comprueba la existencia a unos 235 m, de una galería trazada sobre la “Capa Inesperada”, no accesible y sobre la que se dispone la instalación de un transportador blindado en desuso. Asimismo, y a unos 20 m de esta, se comprueba otra galería trazada sobre la “Capa María” en condiciones de acceso semejantes a la anterior y sobre la que se disponen equipos eléctricos varios (trafo, cofres, cables) los cuales se supone prestarían servicio al citado transportador, así como a los equipos de ventilación. De acuerdo con la documentación obrante y lo reseñado por la empresa la recuperación de estos antiguos equipos mineros y otros que puedan aparecer, constituye el objeto de los trabajos actualmente realizados en esta zona». Además, se realizaron muestreos de ventilación, registrando un caudal de 1,30



## Junta General del Principado de Asturias

---

m<sup>3</sup>/s en el piso 3.º y 1,25 m<sup>3</sup>/s en el piso 2.º antiguo. Se concluyó que los trabajos se desarrollaban dentro del marco autorizado de recuperación de materiales.

– Acta de inspección de 20 de septiembre de 2024. Esta acta se realizó ya bajo la titularidad de Blue Solving, SL y se inspeccionaron varios niveles (pisos 1.º, 2.º, 3.º y 4.º). Sobre el piso 3.º, que es uno de los inspeccionados, se indica: «Se accede al interior de la explotación a través del correspondiente transversal general y antigua galería en dirección s/Cpa. María. Se han realizado trabajos de limpieza a acondicionamiento de las citadas estructuras para la recuperación de los materiales voluminosos, tales como cabrestantes, locomotora, transportadores blindados y herramientas menores. De acuerdo con lo manifestado por la empresa se prevé continuar, en la medida de lo posible, con la recuperación de los elementos metálicos (carril y perfiles sostenimiento)». Asimismo, en el piso 1.º se verificó el inicio del proyecto de investigación complementario «cuyo objeto se define en la investigación de zonas del yacimiento no reconocidas en su vertiente Oeste de materiales carbonosos (materias primas estratégicas) de alto valor añadido». En relación con esto, también «se visita la nave de almacenamiento de productos y equipos, donde se encuentran acopiados para su instalación, los elementos correspondientes al equipo de fabricación de briquetas de aditivos de uso industrial». Se concluye que las actividades realizadas son conforme a la normativa de aplicación y a los trabajos autorizados. El contenido de esta acta, firmada exclusivamente por don Alberto Quirino Vázquez Martínez, ha sido parcialmente negado posteriormente por el informe del Jefe de Servicio, don Santiago Berjano Serrano, de 26.06.2025, ante la solicitud de información del ITJ, en el que se indica que el PIC «nunca ha dado comienzo, habida cuenta de que antes del inicio de los trabajos de investigación proyectados es preceptiva la aprobación de un Plan de Labores (resuelvo cuarto de la Resolución de 08.07.2024) para el primer año de vigencia del PIC en cuestión. Dicho Plan de Labores no ha sido presentado a la fecha del presente informe».

– Acta de inspección de 31 de marzo de 2025. Esta acta se levantó el mismo día del accidente, tras el aviso del servicio de emergencias 112. Se confirmó el fallecimiento de cinco trabajadores y heridas graves en otros cuatro debido a una explosión en el piso 3.º (Mangueiro). Como medida inmediata, se prohibió cualquier acceso al lugar para preservar las condiciones iniciales del siniestro y se decretó la paralización cautelar de todos los trabajos realizados en la explotación Grupo Cerrado.

– Acta de inspección de 8 de abril de 2025. Esta acta ha sido realizada en el marco de la investigación oficial con la Brigada de Salvamento y la Policía Judicial y documentó los hallazgos físicos en el lugar del accidente. Se comprobó que, más allá de la zona autorizada para recuperación de equipos, se habían realizado labores de extracción de carbón (deshulle) ilegales en la «Capa Z», generando huecos de hasta 24 metros de longitud. Los inspectores concluyeron que estos trabajos eran clandestinos, estaban expresamente prohibidos y carecían de un circuito de ventilación reglamentario.

Todas estas actas están firmadas por don Alberto Quirino Vázquez Martínez, si bien en algunas también firman otras personas. El señor Vázquez Martínez, jefe de la Sección de Seguridad Minera, ha comparecido ante la Comisión de Investigación en la sesión celebrada el 10 de octubre de 2025. En esta, ante cuestiones planteadas por don Javier González Vegas y don Adrián Pumares Suárez, manifestó la dificultad de la inspección para descubrir la extracción ilegal de mineral en los siguientes términos:

«El señor Vázquez Martínez (jefe de la Sección de Seguridad Minera, inspector dependiente de la dirección general con competencia en materia de minería y miembro de la Comisión de Seguridad Minera y de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving): Sí, lo que hablábamos antes, 30.000 toneladas de carbón se esconden mal. Pero el caso no fueron 30.000, esto no fueron 30.000 ni de lejos. Quiero decir, esto es una labor... Porque en este caso



## Junta General del Principado de Asturias

---

del accidente lo irrelevante es el carbón, porque el carbón fue muy poco».

Sobre esta cantidad extraída ilegalmente se pronuncia el informe sobre accidente laboral (3/25) en el grupo minero Cerredo, Servicio de Minas, Sección de Seguridad Minera, de fecha 3 de marzo de 2026, elaborado por la Dirección General de Energía y Minas del Principado de Asturias, y del que uno de los firmantes es el propio señor Vázquez Martínez (junto con don José Enrique Fidalgo Menéndez, jefe del Negociado Técnico de Demarcación y Cambios de Dominio, y don Santiago Serrano Berjano, jefe de servicio). Este informe concluye que «se estiman las actuaciones de extracción, entre mediados de febrero y 31 de marzo, se puede estimar un número de jornadas en torno a 25, con una extracción media diaria de 49 tb, entre 44 y 55. Este resultado es congruente con el arranque de dos series completas, una cada picador, con un tonelaje por jornada y picador de unas 25 tb». Es decir, este informe estima una extracción ilegal de carbón en la capa Z, en la que se produjo el accidente, de alrededor de 2.500 toneladas, en un período de alrededor de un mes. No se cuenta con ningún otro informe que confirme o desmienta esto.

Durante las comparecencias ante la Comisión de Investigación, si bien se ha reconocido el prestigio de los actuarios del Servicio de Minas de la Administración del Principado de Asturias por su dilatada experiencia en la minería del carbón, la labor de la inspección minera ha sido cuestionada tanto por parte de algunos representantes sindicales como de algunos agentes de Medio Natural, empresarios y expertos en el sector. La realidad de los hechos es que en el año 2023 constan cinco actas de inspección, mientras que en 2024 solo una y en 2025, antes del accidente, ninguna. Asimismo, de forma recurrente, se menciona que la supresión del Servicio de Seguridad Minera en 2019 para convertirlo en una sección dentro de otro servicio pudo suponer un posible factor de merma en la capacidad de control.

Por otro lado, ni la Ley de Minas, ni su Reglamento, ni la Ley 1/1997, de 4 de abril, de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera, ni el Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera establecen de forma clara la periodicidad y alcance de la inspección minera. Por su parte, el «Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras», establece que en las minas subterráneas «se inspeccionará periódicamente la estabilidad de los terrenos de las labores accesibles a los trabajadores, debiendo realizarse en consecuencia la conservación del sostenimiento». Lógicamente, esto solo aplica cuando no estamos ante una actividad clandestina como ha acontecido en este caso.

Por su parte, en declaraciones ante la Comisión de Investigación, el señor Vázquez Martínez señaló que, habitualmente, las inspecciones se realizan motivadas por la tramitación de expedientes específicos solicitados por las propias empresas. Mayor detalle ofreció don Juan José Fernández Díez (miembro de la Comisión especial de investigación del accidente de Blue Solving), al indicar:

«A ver, la inspección minera tiene, a mi modo de ver o por mi experiencia, tres tipos de visitas distintas. Una visita es una visita propiamente de inspección minera. La autoridad minera normalmente dice que va a ir a un sitio, avisa, normalmente, por mi experiencia, el día antes, y, a partir de ahí, va a hacer una inspección de seguridad. Bueno, un punto.

Segundo punto, la autoridad minera puede hacer visitas ya sea a las concesiones o bien establecimientos de beneficio, que también están amparados bajo la Ley de Minas, para hacer algún tipo de examen que es preceptivo, por ejemplo, examen de artilleros, examen de vigilantes, examen de maquinistas de tracción. Esa sería otra visita.

Y una tercera visita sería, de alguna manera, para poner en marcha equipos que necesites. Por ejemplo, tengo una pala cargadora, tengo tal.

Entonces, la autoridad minera en esos, digamos, tres aspectos giran las visitas que considera



oportunas: unas, a petición de parte, es decir, de la empresa, porque necesita legalizar o aprobar vigilantes o algunas personas; y otras, que hace directamente la autoridad minera para inspeccionar las labores que considera oportunas.

Hay una cuarta, que es ya más de tipo administrativo, que es cuando se presenta un proyecto, por ejemplo, un plan de labores, es habitual, habitual no, es preceptivo que la autoridad minera vaya y revise con el director facultativo las labores del plan de labores a ver si están de acuerdo. Y eso es una labor muchas veces administrativa, pero también es una visita de la autoridad minera».

Por su parte, el señor Vázquez Martínez también mencionó que las visitas sin avisar son muy puntuales y que vienen motivadas por una denuncia. En el presente caso se constata la existencia de una denuncia de la empresa Proyectos Mineros e Ingeniería, SA (Promining) de fecha 12 de marzo de 2025, si bien en dicha denuncia no se informa de una extracción clandestina de mineral, sino que se indica que se extrae este bajo la cobertura de un proyecto de investigación complementario, al que acusa de ser un fraude de ley. Por tanto, al ser esto una cuestión jurídica (es decir, si el proyecto de investigación complementario podía avalar o no la extracción de carbón) y no fáctica, no implicaba una necesaria visita a la mina.

De todo lo indicado, resulta especialmente relevante la falta de una normativa que establezca de forma clara el procedimiento de inspección. En ausencia de este, si bien sería deseable que estas inspecciones, en casos como en el que nos ocupa, se realizasen con mayor frecuencia, no se puede hablar de un incumplimiento normativo claro por parte de la Inspección minera. Pese a ello, sí es cierto que no consta ninguna crítica ni queja desde la Administración a ese escaso aparataje jurídico en el que se operaba desde la Ley de Minas de 1973 y que, en ausencia de normas estrictas y específicas, concede a la Administración un amplísimo margen de actuación.

Igualmente, si se asume como correcta la conclusión a la que llega el informe sobre accidente laboral (3/25) en el grupo minero Cerrredo, Servicio de Minas, Sección de Seguridad Minera, de fecha 3 de marzo de 2026, elaborado por la Dirección General de Energía y Minas del Principado de Asturias, si la extracción ilegal de carbón se había empezado a extraer apenas un mes antes, incluso con inspecciones más frecuentes se podría producir la actividad ilegal. En cambio, resulta igualmente cierto que estas inspecciones podrían tener efecto disuasorio.

Así pues, con respecto a la actividad de inspección, la principal carencia que se observa es la orfandad de regulación que establezca de forma clara la actuación de la Inspección minera. La regulación en este ámbito cuenta con una importante longevidad y un cuerpo escaso. Así, la Ley de Minas apenas trata esto en su artículo 117 y su Reglamento hace lo propio en el artículo 143. De la lectura de ambos preceptos se desprende una legislación muy generalista y anticuada. Por su parte, la Ley 1/1997, de 4 de abril, de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera, ofrece algún detalle más del funcionamiento de la inspección. Esta se recoge en su título II, «De la inspección». Sin embargo, en este se regulan única y exclusivamente las actas de inspección. La falta de una normativa de actuación por parte de la Inspección también puede facilitar la eventual impugnación de expedientes sancionadores por defectos de forma.

La detección de una extracción clandestina de carbón por parte de la Inspección minera era posible mediante la observación de indicios físicos externos e internos, así como a través del cruce de datos administrativos y operativos. Aunque desde la Inspección se señaló que una empresa con voluntad de delinquir puede intentar ocultar sus labores, existen señales inequívocas de actividad extractiva.

Los principales mecanismos y señales para detectar estas actividades, a las que varios técnicos, como el ya citado señor Vázquez López, han hecho referencia en las distintas comparecencias ante la Comisión de Investigación, son:

1. Indicios físicos en el exterior (plaza de la bocamina):



- Tipos de madera acopiada: la presencia de madera específica como mampostas, bastidores y llaves de madera es un indicio claro de extracción. Mientras que para retirar chatarra solo se necesitan tabloncillos de seguridad, la mamposta se utiliza para el sostenimiento de los tajos de explotación activa.
- Maquinaria y equipos: la existencia de compresores de gran tamaño, electrogeneradores, mangueras de aire comprimido y mangueras de ventilación sugiere que se están alimentando martillos picadores y sistemas de aire en zonas profundas sin ventilación natural.
- Movimiento de materiales: la observación de vagones cargados, locomotoras en funcionamiento o el trasiego constante de camiones (*dumpers* o «lagartos») con mineral fresco, diferente a los acopios antiguos, es una prueba directa. Esto consta en informes relativos al accidente de 2022 para la planta sexta de la mina. Si bien desde aquellas la explotación de la mina pasó a manos de Blue Solving, esta es del mismo grupo de empresas que COMBAYL, el anterior propietario, por lo que existía conocimiento de que en el pasado se había procedido a una extracción ilegal de carbón por la misma empresa (aunque bajo otra forma societaria).

## 2. Hallazgos en el interior de la mina:

- Huecos de explotación (ramblas): la inspección directa puede localizar huecos de deshulle (espacios de donde se ha extraído el carbón recientemente). En Zarréu/Cerredo se hallaron tras el accidente dos huecos de 18 y 24 metros de longitud.
- Sistemas de ventilación secundaria: el uso de pequeños ventiladores neumáticos en fondos de saco (galerías sin salida) para diluir el polvo y el gas grisú generados por el arranque de carbón.
- Herramientas específicas: el hallazgo de herramientas de perforación como la Turmag (utilizada para barrenar el carbón antes de disparar con explosivos) o martillos neumáticos de picar indica labores de arranque de mineral.
- Restos de explosivos: la presencia de bolsas de dinamita o hilo de cobre para detonaciones en los frentes de las capas.

## 3. Procedimientos de inspección y control:

- Autonomía en el recorrido: los inspectores tienen la potestad de decidir qué zonas visitar, alterando el recorrido propuesto por el director facultativo si sospechan de alguna irregularidad.
- Superación de obstáculos: ante señales de «prohibido el paso» o zonas supuestamente sin ventilación, el inspector puede exigir que se habilite la zona para entrar de forma segura o requerir el apoyo de la Brigada de Salvamento Minero para explorar áreas de difícil acceso.
- Trazabilidad y análisis del mineral: la Administración puede cotejar los planes de labores con los registros de entrada en puertos (como El Musel) o lavaderos (como El Batán). Además, análisis de laboratorio como el de la vitrinita permiten determinar fehacientemente si el carbón procede de una capa específica de la mina o de acopios externos.

## 4. Denuncias y alertas externas:

- Agentes de Medio Natural y vecinos: los informes de los guardas de montes que detectan maquinaria inusual o ruidos, así como las denuncias anónimas o comentarios de los vecinos del pueblo, suelen ser el punto de partida para inspecciones de oficio más exhaustivas. En este caso, por ejemplo, tal y como le manifiesta el diputado don Javier González Vegas al señor Álvarez Álvarez (funcionario de la dirección general con competencia en minería e ingeniero inspector de la Sección de Seguridad Minera) en la sesión de la Comisión de Investigación de 04.09.2025, en el que tras el accidente de 2022 la Inspección minera realizaba un informe indicando que





existían indicios de extracción ilegal de carbón.

#### 5. Comunicaciones formales de la empresa ignoradas:

- El ejemplo más grave de inacción lo constituye la ausencia de una reacción efectiva ante la notificación realizada por Blue Solving relativa a su contrato con COMBAYL para la extracción de carbón. Dicha comunicación, junto con el precedente del accidente de 2022 que puso de manifiesto la extracción ilegal de carbón por parte de COMBAYL, hace que resulte incomprensible la falta de respuesta por parte de las máximas autoridades autonómicas en materia de minería. Esta inacción política contribuyó a consolidar el contexto en el que posteriormente se produjo el accidente.

A pesar de estos medios, el sistema consistente en informar a la empresa o al director facultativo con antelación (habitualmente, uno o varios días antes) sobre la fecha y hora de una inspección con el que se actuaba desde la Inspección minera permitía a las empresas «limpiar» hasta cierto punto el escenario, ocultar herramientas o detener el movimiento de camiones antes de que llegase el actuario. Para justificar esto, existen razones tales como la necesidad de que cualquier persona ajena a la explotación que entre en el subsuelo debe ir acompañada por el director facultativo o un responsable de seguridad o de que se preparen las condiciones de seguridad necesarias para el propio inspector.

En cambio, tras el accidente de 2025 aquí analizado se ha decidido la realización de inspecciones por sorpresa. Esto, aunque pueda ser solo parcialmente efectivo por lo indicado de que se necesita entrar a la mina con el director facultativo y, en ocasiones, preparar medidas de seguridad previas, sí permite observar con claridad los medios que existen en el exterior de las instalaciones, que en muchas ocasiones permite tener indicios claros de la actividad desarrollada en el interior de la mina. Por tanto, los propios actos de la Administración confirman que era posible una actividad de inspección más diligente con carácter previo al accidente.

### II.7. Las subvenciones y sus incompatibilidades

Las unidades de explotación del Grupo Cerrredo Coto y Cantábrico en interior y Única en cielo abierto están afectadas por la Decisión 2010/787/UE del Consejo de la Unión Europea, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas. Tanto Coto Minero Cantábrico como la Compañía Minera Astur Leonesa percibieron las ayudas al cierre contempladas en esa decisión de la UE y afectadas por el artículo 29 de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, que señala que «El otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de los recursos de carbón de las unidades de producción inscritas en el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco de la Decisión 2010/787/UE, quedará supeditado a la devolución de las ayudas concedidas al amparo de la citada decisión comunitaria, y correspondientes a todo el período cubierto por el plan de cierre. Deberán reintegrarse la cuantía exigible y los intereses devengados con carácter previo a cualquier posible autorización por parte de la autoridad competente».

La autorización de un proyecto de investigación complementario que supone la extracción de 60.000 toneladas de mineral resulta manifiestamente incompatible con el citado artículo de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, toda vez que no se han devuelto las ayudas percibidas por el cierre de las explotaciones afectadas.

Posteriormente, el grupo minero Cerrredo fue objeto de una ayuda de 23,6 millones de euros, concedida al amparo del «Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia correspondiente a



proyectos de zonas degradadas a causa de la minería del carbón». Esta concesión directa se articulaba por medio de un convenio celebrado entre el Instituto para la Transición Justa y la consejería autonómica correspondiente.

En el caso del grupo minero Cerredo, el ITJ concedió al Principado de Asturias una ayuda de 23,6 millones de euros para la restauración ambiental de la mina de carbón a cielo abierto de grupo minero Cerredo. Esta cantidad se incrementó con el importe de los avales depositados por las empresas titulares de la mina (3,7 millones de euros). Los 27,3 millones de euros resultantes financiaron el encargo realizado por el Principado de Asturias a la empresa pública TRAGSA. La ejecución de las obras, aún en curso, se inició el 14 de septiembre de 2022.

El Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, prohíbe expresamente que «Desde la concesión de esta subvención quedará prohibida cualquier actividad de extracción de carbón en los terrenos rehabilitados» (artículo 12.2). El incumplimiento de este precepto, de acuerdo con el artículo 14 de la misma norma podría suponer incluso el reintegro de la ayuda. Sin embargo, dado que la subvención no le ha sido concedida a Blue Solving (la autora del minado clandestino), consideramos que no existiría base legal suficiente para una eventual devolución de la ayuda.

Finalmente, el ITJ preconcedió a la empresa Blue Solving una ayuda de 927.668 euros, al amparo de la convocatoria 2023 de «Ayudas a proyectos empresariales creadores de empleo», que no llegó a recibir. La finalidad de esta ayuda era la creación de 17 nuevos puestos de trabajo (que deberían mantenerse hasta 2029) mediante la instalación en superficie de una planta para la valorización de subproductos y escombros de la construcción en el municipio de Degaña. Debe subrayarse que esta ayuda no ampara, en ningún caso, actividades de extracción de carbón.

### **III. EL ANÁLISIS DE LA COMISIÓN**

#### **III.1. Previo**

- A.** La Comisión solicitó variada información, en muchas ocasiones recabando expedientes administrativos. Recibió 1.339 ficheros (s.e.u.o.), pero prácticamente ningún expediente, en términos administrativos legales (ni reales). La depuración de esos ficheros (a menudo repetidos, casi siempre desordenados y con denominaciones arbitrarias) implica el análisis de unos 700 útiles.
- B.** En no pocas ocasiones afloran documentos que mencionan otros que no constan. Sin disponer de expedientes, ni de índices, no es posible cotejar adecuadamente la acción administrativa.
- C.** El denominado SITE (Sistema Integral de Tramitación Electrónica del Principado de Asturias) o cualquier otro mecanismo informático de gestión, no puede sustituir ni alterar la gestión documental de la Administración pública.
- D.** Aparecen mencionados muchos expedientes en los documentos, ninguno de los cuales consta como tal a esta Comisión.
- E.** Se advierte de las comparecencias de empleados públicos de varios servicios la diferencia de manejo de recursos entre servicios y la obsolescencia de ciertos protocolos. Especialmente llamativos son el desamparo y las carencias de los agentes de Medio Natural, con una pobre estructura inadecuada para su labor y responsabilidades.

Igualmente, la Comisión pudo constatar deficiencias relevantes de coordinación entre los diferentes servicios implicados. Estas deficiencias de coordinación afectaron a los flujos de información, que se tradujeron en una toma en consideración tardía e insuficiente de las advertencias formuladas por los agentes de Medio Natural.



- F. En cualquier caso, se advierte que el informe de la Inspección General de Servicios (recién aportado) ha dispuesto de información de la cual no dispuso la Comisión, como el contrato (1 de diciembre de 2023) entre COMBAYL y Blue Solving, desconociéndose el resto de antecedentes y precedentes recabados por la citada IGS.
- G. Tras el fin de la vigencia anual de la autorización del último plan de labores de la mina subterránea de Zarréu/Cerredo a CMAL (Resolución del 26 de mayo de 2017), la extracción de carbón en Zarréu/Cerredo está prohibida, en virtud de la Decisión del Consejo de la Unión Europea 2010/787/UE, de 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas.
- H. En agosto de 2019, don Hugo González Prieto, ingeniero de minas, suscribe el proyecto de abandono de labores de las unidades de producción Coto y Cantábrico de Compañía Minera Astur Leonesa, SA, con la finalidad de «cumplir con lo establecido en el plan del carbón en cuanto a la obligatoriedad de notificar el cierre definitivo en diciembre de 2018 o devolver las ayudas recibidas. En ese sentido, la Administración Concursal de la empresa Compañía Minera Astur Leonesa S.A. da instrucciones para que realicen los planes de abandono definitivo de labores, según la decisión que han tomado». «Se elabora un Plan de Abandono siguiendo las especificaciones de la Instrucción Técnica Complementaria 13.003».
- I. En el citado proyecto figura el tabicado y cierre de todas las bocaminas, incluyendo las de los pisos 1.º, 3.º y 6.º. El cronograma estipulado finaliza en diciembre del año 2023. El presupuesto es de 7.102.000 de euros.
- J. El Proyecto de abandono es autorizado por doña María Belarmina Díaz Aguado, mediante Resolución de fecha 18 de noviembre de 2019, como directora general de Energía, Minería y Reactivación.
- K. En el año 2021, se tramita el Proyecto de rehabilitación del espacio natural y restauración de pasivos ambientales afectados por la unidad de producción única – Cerredo (La Granda) y su adecuación para los usos finales del suelo previstos, firmado por el jefe de servicio de Promoción, Desarrollo y Seguridad Mineros, Santiago Berjano Serrano (14/07/21). Con presupuesto de 27.034.421'51 de euros, y un plazo de 14 trimestres, en ejecución por TRAGSA, Contempla la restauración de todas las bocaminas y espacios donde se desarrollaron posteriormente accidentes mortales en 2022 y 2023.
- L. Mediante Resolución de doña María Belarmina Díaz Aguado, de fecha 21 de abril de 2022, como directora general de Energía, Minería y Reactivación, se transfieren los derechos mineros de CMAL a COMBAYL, que conllevan la obligación de cierre establecida.
- M. Un accidente mortal (25 de agosto de 2022) conlleva la constatación de actividades extractivas ilegales en el piso 6.º, dando lugar al Informe Técnico sobre realización de trabajos no autorizados, Expediente Informativo INS/2023/362, que derivó en el procedimiento sancionador SANC/2024/1977, incoado a COMBAYL, y que concluyó con abono de la sanción y reconocimiento de su responsabilidad como autor de la infracción.
- N. Un acta de inspección (23 de mayo de 2023) verifica que los accesos a los diferentes niveles de la mina (pisos 1.º al 6.º) se encontraban inaccesibles, vallados o hundidos.
- O. La siguiente acta (19 de julio de 2023) observa que se revisaron los accesos del Piso 1.º al 6.º, encontrando que la mayoría estaban cerrados, pero eran transitables (entre ellos, el piso 3.º, vinculado al accidente mortal múltiple de 31 de marzo de 2025).
- P. Mediante Resolución de doña María Belarmina Díaz Aguado de fecha 27 de noviembre de 2023, como directora general de Minería y Energía, se transfieren los derechos mineros de



COMBAYL a Blue Solving, del mismo grupo empresarial.

- Q. La resolución anterior es incompatible con el proyecto de abandono de labores subterráneas (2019) y con el proyecto de rehabilitación (2021), ambos autorizados.
- R. Mediante Resolución de doña María Belarmina Díaz Aguado de fecha 8 de julio de 2024, como directora general de Minería y Energía, se autoriza a Blue Solving un proyecto de investigación complementario para extraer 60.000 toneladas de antracita en dos años.
- S. La Resolución anterior es incompatible con el Proyecto de abandono de labores subterráneas (2019), con el Proyecto de rehabilitación (2021), y con la Resolución que autoriza la transmisión de COMBAYL a Blue Solving.
- T. Aun así, dado que no se presenta ni se aprueba ningún plan de labores de ese proyecto de investigación complementario, y como indica en fecha 26 de junio de 2025, en informe al ITJ —Instituto para la Transición Justa del MITECO—, el jefe del Servicio de Minas, don Santiago Berjano Serrano, nunca ha dado comienzo (subrayado del jefe de servicio).
- U. Sin embargo, la visita de inspección del 20 de septiembre de 2024 indica que en el piso 1.º se verificó el inicio del proyecto de investigación complementario. En relación con esto, también se visita nave de almacenamiento de productos y equipos, concluyendo que las actividades realizadas son conformes a la normativa de aplicación y a los trabajos autorizados.

Las tres actas de inspección citadas están firmadas por el jefe de sección don Alberto Quirino Vázquez Martínez, a su vez firmante del último plan de labores de la mina subterránea (2017).

- V. Aparentemente, la Inspección minera nunca consideró la oportunidad o la conveniencia de observar (sin previo aviso) el tránsito o evacuación de la antracita extraída por el exterior para verificar que la prohibición de extracción determinada desde 2018 se estuviese cumpliendo.
- W. Los denominados proyectos de investigación complementarios no son definidos como tales por ninguna norma, con lo cual no pueden generarse autorizaciones de los mismos con repercusiones distintas de las previstas con carácter reglado para cualquier otro proyecto.
- X. El PIC se interpreta otorgado en contra del artículo 29 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, así como sin el debido trámite ambiental.

### III.2. Conclusiones

Partiendo de todo lo señalado, cabe concluir:

1. Como antecedentes necesarios, incluidos expresamente en el informe remitido por el jefe del Servicio de Minas al ITJ de fecha 26 de junio de 2025 tres meses después del accidente mortal, deben citarse las Resoluciones de aprobación del proyecto de abandono de labores (18 de noviembre de 2019) y de aprobación del proyecto de restauración (con la firma del subsiguiente convenio entre el ITJ y la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica del Principado de Asturias, 2021). La relevancia de estas actuaciones deriva de que ambas determinan la prohibición de extracción de carbón de la mina de Zarréu/Cerrodo, de modo que tanto la resolución posterior de aprobación de transmisión (27 de noviembre de 2023) como, en especial, la aprobación del proyecto de investigación complementario (8 de julio de 2024), en la medida en que permiten la extracción de mineral resultan claramente incompatibles con aquellas.



2. Entre los requisitos establecidos entre la normativa de minas para la transmisión de uno o varios títulos concesionales en el ámbito minero de la Sección D) no se exigen requisitos de edad mínima del administrador de la empresa (más allá de los requisitos generales), ni tampoco de experiencia previa operando otras minas similares, ni un capital mínimo o activos concretos. Sin embargo, sí que se exige que se acrediten determinados requisitos de solvencia técnica y económica que, en el cambio de titularidad de la concesión de COMBAYL a Blue Solving aprobada mediante la Resolución de 27 de noviembre de 2023 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, no consta que Blue Solving acreditase, ni que desde la Consejería se le requiriese en este sentido.

3. La Resolución de 27 de noviembre de 2023 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico prohibía la extracción de carbón en los términos establecidos en el artículo 29 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética, así como en el artículo 12.2 del «Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia».

El primero de estos artículos indica que «el otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de los recursos de carbón de las unidades de producción inscritas en el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco de la Decisión 2010/787/UE, quedará supeditado a la devolución de las ayudas concedidas». El punto 2 de este artículo extiende esta obligación a «todas las solicitudes de autorizaciones de explotación, permisos o concesiones reguladas por la legislación minera, así como a prórrogas o cesiones que se encuentren en tramitación en el momento de entrada en vigor de la presente ley». Por tanto, cualquier tipo de título administrativo que permita la explotación de una mina en proceso de cierre, siguiendo este artículo, queda supeditado a que, o bien no se hayan recibido ayudas, o bien estas se devuelvan.

La norma hace referencia expresa a las unidades de producción y no a las empresas. Por tanto, las ayudas que se deberían devolver serían las de la unidad de producción Grupo Cerrredo y no las que eventualmente recibiese Blue Solving. En el expediente no consta que Blue Solving recibiese ayudas por su actividad minera, pero cuando se le autorizó el proyecto de investigación complementario tampoco consta que la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico que lo autorizó cotejase que la unidad de producción recibiese ayudas en el pasado.

Por otro lado, el artículo 12.2 del «Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia» es más tajante al señalar que «Desde la concesión de esta subvención quedará prohibida cualquier actividad de extracción de carbón en los terrenos rehabilitados». La Resolución de 27 de noviembre de 2023 expresa de forma clara que la unidad de producción Grupo Cerrredo está afectada por esta norma.

Asimismo, en el Anexo III de la Resolución de 4 de enero de 2022, de la Consejería de Administración Autonómica, Medio Ambiente y Cambio Climático, por la que se ordena la publicación del Convenio entre el instituto para la Transición Justa, OA y la Administración del Principado de Asturias, a través de la Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica, por el que se formalizan las ayudas del «Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, por el que se regula la concesión directa de ayudas para la restauración ambiental de zonas afectadas por la transición energética en el Marco del Plan de recuperación, transformación y resiliencia correspondiente a proyectos de zonas degradadas a causa de la minería del carbón» (BOPA número 18, de 27.01.2022) se indica que «el proyecto de restauración ambiental de los espacios mineros asociados a la unidad de producción grupo Cerrredo, que consta de una explotación de



carbón a cielo abierto, así como de las instalaciones exteriores de la minería de interior (en íntima conexión geominera), tiene como objetivos: Realizar las actuaciones conducentes a conseguir un cierre y abandono de las instalaciones seguras para las personas y el medio ambiente».

Por todo ello, cuando Blue Solving adquirió la concesión asociada a la unidad de producción Grupo Cerrredo a través de la Resolución de 27 de noviembre de 2023 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, se encontraba prohibida la extracción de carbón en ella. A idéntica conclusión llega el informe sobre accidente laboral (3/25) en el Grupo Minero Cerrredo Expediente: INSP/2025/2054, firmado por el Jefe del Servicio de Minas y el Jefe de la Sección de Seguridad Minera en fecha 11.07.2025, señalando que «la actividad extractiva que da lugar al accidente del día 31/03/2025 no sería en ningún caso autorizable, por lo que su ejecución deviene clandestina y, por tanto, se realiza bajo una estrategia de ocultación de la que participan, al menos, tanto la empresa titular, como la dirección facultativa del centro de trabajo, infringiendo lo establecido en la Resolución de 27 de noviembre de 2023». Por su parte, el informe de la Dirección General de Energía y Minas de 03.03.2026 también concluye que estamos ante una explotación clandestina que no está amparado en título alguno.

4. La Resolución de 27 de noviembre de 2023 establecía entre sus condiciones generales la obligación de constituir una garantía financiera antes del 31 de diciembre de 2024 de 3.112.879,11 euros, que Blue Solving no cumplió. Ello significa que, desde el órgano competente, la actual Consejería de Ciencia, Industria y Empleo (Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico en el momento del incumplimiento), se debía iniciar un procedimiento sancionador al amparo del artículo 121.2.f) de la Ley de Minas antes descrito y en ese momento advertir expresamente que, de continuarse con el incumplimiento de esta condición, se iniciaría el procedimiento para declarar caducadas las concesiones transmitidas por medio de la Resolución de 27 de noviembre de 2023.

5. Cuando se manifiesta que esta explotación no encuentra amparo en título alguno, se incluye también la Resolución de 8 de julio de 2024 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico por la que se aprueba el Proyecto de Investigación Complementario Grupo Cerrredo. Este título habilitaba para llevar «a cabo labores subterráneas de investigación con la recuperación y acondicionamiento parcial del transversal del Piso 1.º, desde donde se accederá mediante guías en capa en dirección Oeste (W), a una zona no investigada y ubicada en el exterior del actual límite de restauración del Grupo Cerrredo». Es decir, las actuaciones habilitadas eran en una zona distinta de donde se produjo el accidente, puesto que este fue en el piso tercero, en una zona conocida como El Mangueiro. Asimismo, como acreditan los distintos informes sobre el accidente, las actividades que se estaban llevando a cabo era la explotación de carbón, sin que constase la investigación que se había autorizado mediante la resolución citada.

6. Conforme a lo establecido por la legislación minera, un proyecto de investigación complementario tan solo tiene cobertura legal en el texto de la Ley de Minas y de su Reglamento cuando se produzca un descubrimiento de recursos de presumible interés distintos de los que motivaron el otorgamiento de la concesión originaria. Es decir, debe existir un descubrimiento nuevo y no que simplemente se le quiera dar un uso distinto a unos recursos que ya eran conocidos previamente. En este caso, no se cuenta con datos para afirmar con certeza que efectivamente en Zarréu/Cerrredo existió un nuevo descubrimiento mineral y que este fuese de un interés distinto a los que motivó el otorgamiento. Sin embargo, todos los datos existentes en los distintos expedientes aportados apuntan en la dirección contraria. Por ello, no cabía la aprobación del proyecto de investigación complementario. En estas circunstancias, la autorización del PIC fue el instrumento escogido para ejecutar una decisión política orientada a eludir los mandatos de la Decisión 2010/787/UE sobre el cierre de la minería del carbón no competitivo, del artículo 29 de la Ley 7/2021 de Cambio Climático y Transición Energética, y del



artículo 12.2 del Real Decreto 341/2021. El objetivo último de esta medida fue dar amparo a la extracción de carbón en una explotación que ya se encontraba en plena fase de cierre y restauración, esta última financiada además con fondos públicos.

Asimismo, aun en el supuesto de estar en tal caso, en ningún punto se justifica la necesidad de extraer una cantidad de mineral tan elevada (60.000 toneladas en 24 meses) para realizar la investigación. Ante la Comisión de Investigación sí se prestó alguna explicación de ello (por ejemplo, don Alberto Quirino Vázquez Martínez, jefe de la Sección de Seguridad Minera, en la sesión celebrada el 10 de octubre de 2025, indicaba que las pruebas industriales en hornos altos o para grafito requieren grandes volúmenes para ser efectivas), pero estas explicaciones no figuran ni en el expediente del proyecto ni en la resolución que lo autoriza. Esta explicación es especialmente relevante dado que se trata de la extracción de bienes de dominio público, el elevado valor de dichos bienes y el alto grado de discrecionalidad con el que cuenta la Administración en este ámbito en ausencia de un desarrollo normativo más extenso. Por tanto, la motivación resulta clave para que esa discrecionalidad no se transforme en arbitrariedad. Su ausencia, junto con el resto de los motivos expuestos, determina que la Resolución de 8 de julio de 2024 de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico por la que se aprueba el proyecto de investigación complementario Grupo Cerrredo resultaría presuntamente anulable.

7. En cuanto al accidente acaecido en 2022, al estar ante una explotación minera clandestina nos encontraríamos ante una infracción muy grave de las contenidas en el artículo 12.a) de la Ley 1/1997, de 4 de abril, de infracciones y sanciones en materia de seguridad minera. Estas, según el artículo 14 de esta norma, se sancionan con «a) Multa de 5.000.001 a 100.000.000 de pesetas. b) Suspensión de las actividades de la empresa con clausura de la explotación por plazo de dos a seis meses. c) Clausura definitiva de la explotación». Por tanto, resultaba procedente que desde la actual Consejería de Ciencia, Industria y Empleo (Consejería de Industria, Empleo y Promoción Económica en el momento del accidente de 2022; Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico en el momento en que se acuerda el inicio del procedimiento sancionador) se iniciase dicho procedimiento sancionador con carácter previo al accidente de 2025, lo que debería haber determinado la clausura definitiva de la explotación.

8. En relación con el accidente de 2022, la posterior degradación de la calificación sancionadora (de muy grave a grave) por una instancia superior al Servicio de Minas, sin una motivación suficientemente acreditada, proyectó una señal de impunidad que debilitó la capacidad preventiva de la Administración y favoreció la continuidad de prácticas irregulares por parte del operador.

9. Por otro lado, respecto a las labores de inspección, se debe hacer constar, en primer lugar, lo ya señalado: el accidente se ha producido mientras se realizaba una extracción clandestina de carbón. Esa clandestinidad dificultaba la labor de inspección para detectar la misma, pero no la imposibilitaba. Tal y como se detalló, existían indicios que, con una mayor diligencia, podrían hacer concluir la existencia de las actividades clandestinas de deshulle. Además, la clandestinidad en la actividad de Blue Solving se ha visto beneficiada por la forma en la que se realizaban las inspecciones hasta la fecha. La existencia de preaviso de las mismas permitía a los operadores una mayor flexibilidad para invisibilizar sus actividades ilegales. De hecho, a raíz de este accidente se ha tomado la decisión de comenzar a realizar visitas sorpresa. Estas es cierto que en ocasiones no podrán realizarse dentro de la mina, dado que para acceder a esta se necesita acompañamiento de la dirección facultativa y, en ocasiones, medidas de seguridad extra. Sin embargo, sí podrán observar la actividad exterior de la mina, que resulta indiciaria de lo que sucede en el interior de la misma. Muestra de ello es que la Guardería de Medio Natural, en su actividad de supervisión del MUP 144, detectó trabajos en la zona en muy diversas ocasiones a lo largo del periodo analizado por la Comisión de Investigación.



10. Igualmente, respecto a la inspección, también se concluye la existencia de una relevante orfandad normativa. Así, no existe una regulación clara y sistemática de su funcionamiento ni en la normativa estatal ni autonómica. De este modo, cuestiones tales como la planificación de la inspección no cuentan con regulación específica, sin que conste tampoco algún tipo de estrategia o plan que defina esta. De igual forma, en relación con la conclusión anterior, tampoco se regula la forma en la que se llevarán a cabo las inspecciones ni los criterios para ello. Esto le confiere una gran discrecionalidad a la actuación administrativa en este campo que, en el caso del accidente de Zarréu/Cerredo, ha resultado perjudicial.

La falta de normativa concreta que regule en detalle una cuestión tan delicada como la inspección minera es directamente imputable tanto al legislador estatal como al autonómico. En el ámbito estatal, debido a que la regulación minera básica (esencialmente, la Ley de Minas y su Reglamento) es una normativa de la década de los setenta, anticuada en muchos aspectos, y que no ofrece casi regulación alguna de la labor de inspección. Por su parte, el legislador asturiano podría haber suplido esta carencia con normativa autonómica de desarrollo de esta norma básica estatal, pero hasta la actualidad no ha procedido a ello.

11. Finalmente, con respecto a las subvenciones, en los expedientes no consta que Blue Solving o la unidad de producción de Cerredo recibiesen ayudas por su actividad minera. Las unidades de explotación del Grupo Cerredo Coto y Cantábrico en interior y Única en cielo abierto están afectadas por la Decisión 2010/787/UE del Consejo de la Unión Europea, del 10 de diciembre de 2010, relativa a las ayudas estatales destinadas a facilitar el cierre de minas de carbón no competitivas. Tanto Coto Minero Cantábrico como la Compañía Minera Astur Leonesa percibieron las ayudas al cierre contempladas en esa decisión de la UE y afectadas por el artículo 29 de la Ley 7/2021, de Cambio Climático y Transición Energética, que señala que «el otorgamiento de autorizaciones de explotación, permisos, concesiones, prórrogas o cesiones de los recursos de carbón de las unidades de producción inscritas en el Plan de Cierre del Reino de España para la Minería del Carbón no Competitiva en el marco de la Decisión 2010/787/UE, quedará supeditado a la devolución de las ayudas concedidas al amparo de la citada decisión comunitaria, y correspondientes a todo el período cubierto por el plan de cierre. Deberán reintegrarse la cuantía exigible y los intereses devengados con carácter previo a cualquier posible autorización por parte de la autoridad competente».

Por otro lado, el ITJ preconcedió a la empresa Blue Solving una ayuda de 927.668 euros, al amparo de la convocatoria 2023 de «Ayudas a proyectos empresariales creadores de empleo», que no llegó a recibir. Sin embargo, la finalidad de esta ayuda no estaba vinculada a la explotación o al cierre de la mina de carbón.

Por último, el ITJ concedió al Principado de Asturias una ayuda de 23,6 millones de euros para la restauración ambiental de la mina de carbón a cielo abierto de grupo minero Cerredo. Esta cantidad se incrementó con el importe de los avales depositados por las empresas titulares de la mina (3,7 millones de euros). Los 27,3 millones de euros resultantes financiaron el encargo realizado por el Principado de Asturias a la empresa pública TRAGSA. La ejecución de las obras, aún en curso, se inició el 14 de septiembre de 2022. En este caso, la norma reguladora de la subvención, el Real Decreto 341/2021, de 18 de mayo, prohíbe expresamente la extracción de carbón en los terrenos rehabilitados (artículo 12.2). El incumplimiento de este precepto, de acuerdo con el artículo 14 de la misma norma, podría suponer incluso el reintegro de la ayuda. Sin embargo, dado que la subvención no le ha sido concedida a Blue Solving (la autora del minado clandestino), consideramos que no existiría base legal suficiente para una eventual devolución de la ayuda.

### III.3. Responsabilidades

La causa inmediata y directa del siniestro fue la realización de labores extractivas que la propia





Administración asturiana ha calificado de clandestinas y en condiciones incompatibles con la seguridad minera, sin ventilación reglamentaria ni circuito de evacuación adecuado.

Sin embargo, en este dictamen se debe atender al objeto de la Comisión, a saber, «analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades por la gestión del Gobierno en los últimos años que han desembocado en el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña».

Además, antes de determinar las posibles responsabilidades, se debe recordar que este documento es el dictamen de una Comisión de Investigación; por ello, tal y como señala la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (Sentencias del TC 133/2018, de 13 de diciembre, 77/2023, de 20 de junio, 107/2025, de 12 de mayo o 108/2025, de 12 de mayo), cuando se habla de responsables se hace desde un punto de vista estrictamente político. No se imputa aquí ninguna responsabilidad penal o administrativa a las personas mencionadas, puesto que ello no es competencia de la Comisión y cualquier eventual responsabilidad de ese tipo debería ser determinada, si fuese el caso, en los correspondientes procedimientos penales o sancionadores.

En esta línea se observa que la Administración minera no causó directamente el accidente, pero los documentos aportados a esta Comisión, así como las declaraciones realizadas ante ella, apuntan a que sí ha podido incurrir en fallos de control, supervisión, inspección y coherencia autorizatoria, que favorecieron un contexto de riesgo no corregido.

Favoreció la existencia cierta de dicho contexto de riesgo, la autorización, suscripción o validación de resoluciones administrativas que permitieron la continuidad de actuaciones extractivas en un contexto de cierre, restauración o limitación de la actividad minera.

Contribuyó igualmente a la creación de un escenario de riesgo, el otorgamiento de transmisiones o concesiones sin que conste una comprobación suficientemente rigurosa de la adecuación material de tales actos al marco jurídico aplicable ni a la situación real de la explotación. Así como la ausencia de mecanismos extraordinarios de control, paralización, revisión o auditoría administrativa tras la aparición de antecedentes de riesgo, accidentes previos o señales de posible desviación respecto de la actividad autorizada.

Se creó, en definitiva, un modelo de actuación administrativa caracterizado por una interpretación extensiva o materialmente laxa de las figuras autorizatorias aplicadas al expediente como son los PIC. Y se acompañó además de una estructura organizativa y de inspección insuficiente para el adecuado control de actividades mineras, sin promover las reformas estructurales necesarias para reforzar la capacidad inspectora, técnica y preventiva de la Administración autonómica.

Dicho todo lo anterior, tras la presente Comisión debe asumirse, por tanto, que el sistema falló como tal, y la responsabilidad del fallo sistémico recae en quienes, en virtud de sus cargos, tenían competencias en lo referente al establecimiento, evaluación, control, comprobación y corrección de las debilidades de dicho sistema.

Por ello, y sin perjuicio de las responsabilidades de cualquier naturaleza que, en su caso, los órganos competentes puedan determinar mediante los procedimientos correspondientes, esta Comisión reprueba la actuación de las siguientes personas, que en el ejercicio de sus funciones han tenido relación con la explotación minera en la que se han producido dos trágicos accidentes —como se señalaba al inicio de este apartado, las observaciones constituyen una valoración estrictamente política sobre su desempeño funcional, sin que ello implique en modo alguno una declaración de responsabilidad penal, administrativa o disciplinaria de las personas mencionadas—:

- Don Isaac Pola Alonso (director del Área de Infraestructuras Industriales del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias —IDEPA— (2020-2023), viceconsejero de la



consejería competente en materia de minas entre agosto de 2023 y febrero de 2025).

- Don Enrique Fernández Rodríguez (consejero de la consejería competente en materia de minas entre julio de 2019 y agosto de 2023).

- Doña Nieves Roqueñí Gutiérrez (consejera de la consejería competente en materia de minas entre agosto de 2023 y febrero de 2025).

- Doña María Belarmina Díaz Aguado (directora general en materia de minas entre 2017 y 2019, consejera de la consejería competente en materia de minas en el momento del accidente —entre febrero y abril de 2025—).

- Don Gonzalo Martín Morales de Castilla (secretario general técnico, asesor jurídico, letrado).

- Don Santiago Berjano Serrano (jefe de servicio).

- Don Alberto Quirino Vázquez Martínez (jefe de sección).

## **Responsabilidades institucionales de la Administración del Principado de Asturias**

### **1. Incumplimiento de la obligación de verificar la solvencia del cesionario**

La Resolución de 27 de noviembre de 2023 autorizó el cambio de titularidad de las concesiones mineras a favor de Blue Solving, SL sin que en el expediente ni en la propia resolución conste que la Dirección General de Energía y Minas exigió o verificó la solvencia técnica y económica de la empresa cesionaria, tal como exige el art. 123.3.b) del Reglamento de Minas. Blue Solving tenía un capital social de 3.000 euros, carecía de trabajadores en alta, de activos tangibles, de maquinaria y de financiación acreditada en el momento de la transmisión. La Administración incumplió su función de control de acceso al dominio público minero.

La responsabilidad institucional se concreta también en el hecho de que el art. 95.3 de la Ley de Minas impone al órgano administrativo comprobar la solvencia antes de otorgar la autorización

### **2. Ausencia de procedimiento sancionador por incumplimiento de la garantía financiera**

El incumplimiento por Blue Solving de la obligación de constituir la garantía financiera de 3.112.879,11 euros antes del 31 de diciembre 2024 (condición CG4 de la Resolución de 27 de noviembre de 2023) debía haber activado de forma automática el procedimiento sancionador establecido en el art. 121.2.f) de la Ley de Minas. Este artículo tipifica dicha conducta como infracción grave, con posibilidad de sanción de hasta 300.000 euros y declaración de caducidad de la concesión. La Dirección General de Energía y Minas, conocedora del incumplimiento (el recurso de reposición fue desestimado mediante Resolución de 25 de enero de 2024), no incoó dicho procedimiento. De haberse iniciado y concluido antes del accidente, habría podido determinar la caducidad del título y el cese de la actividad.

### **3. Autorización de un PIC sin cobertura normativa y sin evaluación ambiental**

La Resolución de 8 de julio de 2024 aprobó un proyecto de investigación complementario, cuya figura no tiene definición ni regulación expresa en la normativa de minas. La Administración ha venido aplicando esta figura de forma consuetudinaria exclusivamente en el ámbito del Principado de Asturias, sin equivalente acreditado en otras comunidades autónomas. Adicionalmente, el PIC se autorizó sin exigir evaluación de impacto ambiental, que resultaba preceptiva bien al amparo del Anexo I Grupo 2 (evaluación ordinaria) bien del Anexo II Grupo 3 de la Ley 21/2013, de Evaluación Ambiental (evaluación simplificada). La autorización, que además se otorgó en abierta incompatibilidad con las resoluciones anteriores que decretaban el cierre de la mina, resulta nula.

### **4. Incoherencia sistémica en la gestión de autorizaciones concurrentes**

La Comisión ha constatado que sobre la mina de Zarréu/Cerredo coexistían cuatro autorizaciones materialmente incompatibles entre sí:

Proyecto de abandono de labores (2019);



- i. proyecto de rehabilitación ambiental (2021);
- ii. transmisión de derechos a Blue Solving con obligación de cierre (2023); y
- iii. PIC que habilita extracción de 60.000 tn (2024).

La coexistencia de estos títulos sin que ningún servicio administrativo alzase la voz sobre esta incoherencia revela una deficiencia sistémica de coordinación interna y gestión.

#### **5. Deficiencia estructural del sistema de inspección minera**

La ausencia de un plan de inspección periódico y documentado y la práctica sistemática de inspecciones con una metodología cuestionable (por ejemplo, indicando el inicio de un PIC que un año después se niega que se iniciase nunca) constituyen una negligencia en las actividades administrativas de inspección que favorece la creación de las condiciones propicias para que la actividad extractiva clandestina se desarrollara con escaso riesgo de detección.

#### **6. Incumplimiento de la obligación de ordenación documental de expedientes administrativos**

La Comisión ha recibido 1.339 ficheros que no responden a la definición de expediente administrativo del art. 70.1 de la Ley 39/2015. La falta de orden, numeración y coherencia documental de los expedientes mineros ha dificultado gravemente el escrutinio parlamentario. Esta situación no es circunstancial sino sistemática, y revela el incumplimiento del principio de buena administración en relación con el tratamiento documental, con consecuencias directas sobre la tutela judicial efectiva de las eventuales víctimas y sobre el control democrático de la actividad administrativa.

#### **7. Responsabilidad del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)**

Se aprecia que la participación del IDEPA en este contexto se produjo en el marco de sus funciones de promoción económica, evaluación de proyectos empresariales y gestión de instrumentos públicos de apoyo al desarrollo industrial. No obstante, el IDEPA mantuvo una intervención institucional relevante en el ecosistema administrativo vinculado a la explotación, mediante la tramitación, evaluación y seguimiento de proyectos empresariales e industriales promovidos por sociedades vinculadas al entorno societario de Zarréu/Cerredo. Así, ha actuado en la evaluación técnica, económica y procedimental de proyectos empresariales o industriales asociados a la explotación de Zarréu/Cerredo o a su entorno societario y ha tramitado y gestionado expedientes de ayudas vinculados directa o indirectamente a dichos proyectos.

La Comisión considera, en consecuencia, que, aun no ostentando el IDEPA competencias materiales sobre la autorización o control de la actividad minera, su actuación reviste relevancia institucional en tanto que contribuyó indirectamente a la conformación del contexto administrativo favorable en el que se desarrolló el proyecto empresarial asociado a Zarréu/Cerredo, pudiendo generar una apariencia de respaldo o validación pública de la viabilidad del modelo de negocio presentado.

### **III.4. Recomendaciones**

Las recomendaciones planteadas se articulan en tres niveles temporales de urgencia:

- A. Inmediatas, a ejecutar en un plazo máximo de tres meses.
- B. A corto plazo, a ejecutar en el plazo de un año.
- C. Estructurales, a medio y largo plazo, que exigen reformas de mayor calado.

#### **A. Recomendaciones inmediatas**

##### **1. Moratoria total sobre los PIC**



Mientras no exista una regulación legal expresa de los PIC en la Ley de Minas o en normativa autonómica de desarrollo, la consejería competente debe dictar instrucción interna que impida la tramitación, autorización o renovación de cualquier PIC. La figura carece de amparo normativo suficiente, genera inseguridad jurídica y ha sido utilizada de forma abusiva para eludir el régimen ordinario de concesiones de explotación.

## **2. Revisión de todos los PIC actualmente vigentes en Asturias**

La consejería competente deberá dar prioridad a los expedientes de autorización de proyectos y concesiones de explotación que se encuentren en trámite y procederá, con posterioridad a su conclusión, a la revisión de todos los PIC autorizados en los últimos años, asociados a la extracción de carbón, verificando si han sido utilizados para autorizar la investigación de recursos de interés distinto a los que motivaron el otorgamiento de la concesión. De igual modo, se debe cotejar que no hayan servido para sustituir los permisos de extracción con los que se contaba eludiendo los pertinentes trámites ambientales y las exigencias de la normativa de minas. Además, también se debe comprobar si son compatibles con otros títulos habilitantes concurrentes sobre la misma unidad productiva y si el plan de labores exigido fue aprobado antes de iniciarse los trabajos. En caso de detectarse irregularidades, deberán incoarse los procedimientos administrativos que correspondan.

## **3. Incoación inmediata de procedimientos sancionadores pendientes**

La Consejería competente deberá iniciar sin dilación los procedimientos sancionadores que no se incoaron oportunamente. Además de los correspondientes al accidente y la extracción clandestina de carbón que se encuentran ya iniciados, procede iniciar el procedimiento sancionador por el incumplimiento de la garantía financiera de 3.112.879,11 euros establecida en la Resolución de 27 de noviembre de 2023. Procede, asimismo, iniciar el procedimiento de declaración de caducidad de las concesiones transmitidas por Resolución de 27 de noviembre de 2023.

## **4. Reconocimiento de responsabilidad y reparación integral**

El Principado de Asturias debe asumir su responsabilidad por la serie de decisiones políticas que coadyuvaban al resultado lesivo en este siniestro.

A tal efecto, se impulsará un procedimiento que articule las ayudas económicas para las víctimas y sus familias, sin perjuicio de los expedientes de responsabilidad patrimonial, que se instruirán con carácter preferente, buscando activamente terminaciones convencionales (art. 86 Ley 39/2015) para evitar a las familias un calvario judicial. La deuda con ellas no es caridad, es justicia. Por eso, estas ayudas deben incluir también a los afectados por el accidente de 2022.

## **5. Traslado al Ministerio Fiscal**

El Dictamen de la Comisión, junto con toda la documentación obrante en poder de la misma, deberá ser remitido al Ministerio Fiscal para que este valore la existencia de indicios de responsabilidad penal al amparo de lo dispuesto en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

## **B. Recomendaciones a corto plazo**

### **1. Ordenación de los expedientes administrativos mineros**

La Consejería competente deberá acometer de forma inmediata la reorganización y digitalización ordenada de todos los expedientes administrativos relacionados con la mina de Zarréu/Cerredo y, con carácter general, de todos los expedientes mineros abiertos, en cumplimiento del artículo 70.1 de la Ley 39/2015. Esta labor debe incluir la identificación de documentos faltantes y su inclusión, de forma ordenada, tal y como dispone el precepto citado.



## **2. Implantación de un sistema de inspecciones sorpresa y planificadas**

Deberá aprobarse un protocolo interno de inspección minera que establezca: (a) un porcentaje mínimo de inspecciones sin preaviso y (b) una frecuencia mínima de inspección según tipología y situación de la concesión (activa, en cierre, paralizada, etc.). El preaviso de inspección debe quedar reservado exclusivamente para actos reglados que requieren necesariamente la presencia del director facultativo y la habilitación previa de medidas de seguridad.

## **3. Plan de inspección anual con objetivos medibles y publicación de resultados**

La Consejería competente deberá elaborar y publicar con carácter anual o bianual un plan de inspección minera que incluya: número de inspecciones previstas por tipo de concesión; distribución territorial; recursos asignados y resultados.

## **4. Cruce de datos operativos con registros portuarios y de lavaderos**

La Consejería competente deberá establecer un mecanismo de cruce sistemático de datos entre la actividad declarada en los planes de labores y los datos de entrada de carbón en instalaciones de beneficio, puertos y otros puntos de salida del mineral. Este cruce de información, que puede apoyarse en herramientas digitales e inteligencia artificial, permitiría detectar actividades extractivas no declaradas sin necesidad de visita física a la mina.

## **5. Revisión de la RPT en ámbitos afectados, en especial los de inspección sectorial**

En las declaraciones ante la Comisión, se señaló que la degradación del Servicio de Seguridad Minera a mera sección dentro de otro servicio ha debilitado su capacidad operativa y de iniciativa. Por ello, debe revisarse la RPT de los ámbitos afectados en este accidente y, en especial, de los de inspección sectorial. Asimismo, se debe estudiar la conveniencia de recuperar este Servicio de Seguridad Minera, con dotación presupuestaria y de personal suficiente, y con autonomía funcional respecto al Servicio de Concesiones Administrativas, evitando que el mismo organismo que tramita autorizaciones sea el que inspeccione su cumplimiento.

## **6. Coordinación efectiva entre los agentes de Medio Natural y la Inspección minera**

Las declaraciones ante la Comisión han puesto de manifiesto el papel de los agentes de Medio Natural como potencial fuente de alerta temprana sobre actividades irregulares en el entorno minero y, al mismo tiempo, su desamparo institucional y falta de recursos. Deberá crearse un protocolo formal de traslado de información entre los agentes de Medio Natural y la Inspección minera, con garantías de anonimización cuando proceda, y se revisará la RPT del Cuerpo de Agentes de Medio Natural para adecuarla a sus responsabilidades reales.

## **7. Incorporación de acuse de recibo en las comunicaciones del SAC a los órganos gestores**

Que la herramienta utilizada por el SAC para la remisión de denuncias a los centros gestores incorpore acuse de recibo de lectura, de forma que quede garantizada la trazabilidad de la comunicación y pueda verificarse que el órgano destinatario ha tenido efectivo conocimiento de la denuncia trasladada.

## **C. Recomendaciones estructurales**

### **1. Desarrollar normativa minera propia del Principado de Asturias**

En ejercicio de las competencias autonómicas en materia de minería (art. 11.6 del Estatuto de Autonomía) y al amparo de los precedentes de otras comunidades autónomas (por ejemplo, la Ley 3/2008, de 23 de mayo, de Ordenación de la Minería, de Galicia, o la Ley 10/2014, de 1 de octubre, de Ordenación Minera, de las Illes Balears), el Principado de Asturias debería aprobar una Ley de Ordenación de la Minería Asturiana que, respetando la legislación básica estatal, la desarrolle con mayor concreción. Particularmente, resulta especialmente relevante el régimen



de inspección y sus garantías procedimentales; las condiciones de transmisión de concesiones; el procedimiento específico de gestión del cierre minero; y las figuras de autorización que la práctica administrativa ha generado sin cobertura normativa expresa. Asturias, como principal región minera histórica de España, necesita un marco normativo autonómico propio y actualizado.

## **2. Instar la renovación y actualización de la normativa minera española**

La Ley de Minas de 1973 y su Reglamento de 1978 tienen medio siglo de antigüedad y presentan lagunas e inadaptaciones manifiestas a la realidad del sector, a los estándares europeos de seguridad y a la normativa ambiental vigente. El Parlamento de Asturias debería aprobar una resolución que inste al Gobierno de España a promover con carácter urgente una nueva Ley de Recursos Minerales que incorpore: la nueva taxonomía de recursos minerales estratégicos; los requisitos de ESG (ambiental, social y de gobernanza); el régimen de transición energética y cierre minero; y la actualización del sistema de inspección y sanción, entre otros elementos.

## **3. Medidas de mejora de la transparencia y rendición de cuentas en el sector minero**

La opacidad en la gestión administrativa del sector minero favorece el riesgo de irregularidades. En este ámbito, además de lo señalado para los expedientes administrativos, se recomienda la publicación en el Portal de Transparencia del Principado de Asturias de un registro actualizado de todos los títulos habilitantes vigentes en materia minera (concesiones, autorizaciones, PIC, planes de labores aprobados) a través del cual se pueda saber el estado y titular de cada concesión minera con una rápida consulta.

## **4. Depuración de responsabilidades políticas**

La Junta General del Principado de Asturias insta al Consejo de Gobierno y a las formaciones políticas a proceder a la depuración inmediata de las responsabilidades políticas derivadas de los hechos analizados en este dictamen.

En particular, se considera necesario el cese o asunción de responsabilidades por parte de aquellas personas que actualmente ocupen un puesto en la vida pública y que hayan tenido funciones relevantes en la gestión del Servicio de Minas entre los años 2022 y 2025, debido a su acción, omisión o tolerancia pasiva frente a un sistema que causó la muerte de trabajadores.

## **III.5. Consideraciones finales**

Las Comisiones de Investigación Parlamentarias gozan de pleno amparo normativo y legitimidad, y su objeto no es solo el control de la acción del Gobierno, sino también la acción de la Administración situada bajo su dirección, actividad de naturaleza estrictamente política y desarrollada con arreglo a parámetros políticos, buscando el conocimiento más exacto posible de los hechos objeto de investigación y, de ahí, la determinación de responsabilidades políticas de los sujetos intervinientes en los mismos y, en su caso, la formulación de recomendaciones. Este ha sido el ámbito en que se han desarrollado los trabajos de la Comisión y el respeto al mismo ha quedado evidenciado, por ejemplo, en el hecho de que ningún compareciente precisó solicitar el amparo de la Mesa de la Comisión. Este mecanismo de control, no puede olvidarse, es una atribución de la que gozan los diputados como representantes de los ciudadanos y es imprescindible en una democracia.

El accidente de Zarréu/Cerrodo no fue un accidente en el sentido estricto del término, esto es, un suceso imprevisible e inevitable. Fue la culminación de una cadena de decisiones administrativas deficientes, omisiones de control y una extracción clandestina deliberada y duradera que se pudo y se debió detectar y prevenir.

Incluyendo el primer accidente de 2022, seis trabajadores perdieron la vida extrayendo carbón en el seno de una mina en la cual no se podía extraer carbón al no disponer de plan de labores



## Junta General del Principado de Asturias

---

aprobado, sometida a un proceso de cierre y restauración financiado con 27 millones de euros de fondos públicos y cuyos indicios de actividad ilegal eran perceptibles para cualquier observador diligente.

La responsabilidad primaria y directa corresponde a quienes ordenaron y ejecutaron la extracción clandestina. Pero las responsabilidades administrativas son también inequívocas: una Administración que autoriza transmisiones sin verificar solvencias, que aprueba figuras jurídicas sin cobertura normativa, que no abre expedientes sancionadores cuando se incumplen garantías esenciales, que avisa a las empresas antes de inspeccionarlas y que reduce progresivamente el número y calidad de las visitas de control no puede alegar que actuó diligentemente.

Las recomendaciones de esta Comisión no son solo correctoras del pasado. Son una hoja de ruta para construir en Asturias un modelo de administración minera moderno, transparente, dotado de recursos suficientes y sometido al escrutinio democrático que la explotación del dominio público y la vida de los trabajadores merecen. Su implementación es una deuda que el Principado tiene contraída con las familias de las seis víctimas y con la sociedad asturiana en su conjunto.

La deuda del Principado con las familias de las víctimas no se salda únicamente con la aprobación de este dictamen.

Solo podrá considerarse saldada cuando se asuma con claridad que la gestión política de la Administración generó las condiciones que hicieron posible esta tragedia, cuando se depuren las responsabilidades políticas correspondientes y cuando se adopten medidas efectivas que faciliten que hechos como estos no vuelvan a repetirse. Y por supuesto, es esencial que exista una voluntad de reparación a las familias.

Palacio de la Junta General, 27 de mayo de 2026. Covadonga Tomé Nestal, presidenta; Luis Miguel Venta Cueli, secretario.



## Junta General del Principado de Asturias

---

*Voto particular del Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU-Más País-IAS al dictamen aprobado por la Comisión de Investigación al objeto de analizar, investigar y depurar las posibles responsabilidades sobre la gestión del Gobierno en los últimos años que ha desembocado en el accidente acaecido el pasado 31 de marzo de 2025 en la mina de Cerredo, en Degaña (12/0176/0001/14584)*

**(Admitido a trámite por la Mesa de la Comisión de Investigación de 17 de junio de 2026 y publicado en el Boletín Oficial de la Junta General del Principado de Asturias, serie B, número 688, de 17 de junio de 2026).**

El Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias IU-Más País-IAS, a través de su portavoz, Javier González Vegas, al amparo de lo dispuesto en los artículos 71 y concordantes del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar el siguiente voto particular parcial y concurrente al apartado III.3, Responsabilidades, del dictamen aprobado por la Comisión.

### VOTO PARTICULAR

El Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias formula voto particular parcial y concurrente al dictamen aprobado por la Comisión, con el fin de dejar constancia expresa de determinadas precisiones que este grupo considera relevantes para la más completa delimitación de las responsabilidades políticas e institucionales derivadas de los hechos investigados.

Este voto particular tiene carácter concurrente porque este grupo parlamentario comparte en lo sustancial el contenido del dictamen aprobado por la Comisión, tanto en lo relativo a la reconstrucción de los hechos como en lo referente a la identificación de las principales disfunciones administrativas y políticas que contribuyeron a hacer posible el resultado trágico acaecido en la explotación de Cerredo. Esa coincidencia sustancial alcanza, en particular, a la apreciación de que no nos hallamos ante un fallo aislado, puntual o puramente técnico, sino ante una sucesión de deficiencias acumuladas en la instrucción administrativa, en el control, en la inspección, en la reacción sancionadora y en la delimitación misma de los instrumentos jurídicos empleados para dar cobertura formal a actuaciones materialmente incompatibles con la situación de cierre, restauración y prohibición extractiva existente en la explotación.

Convocatoria por Asturias considera, además, que una de las fortalezas del dictamen radica en que sus conclusiones nucleares presentan coincidencias esenciales con el contenido del informe elaborado por la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias sobre el funcionamiento del Servicio de Minas.

En ambos textos aparecen, con una notable convergencia de diagnóstico, cuestiones tales como la insuficiente acreditación de la capacidad y solvencia de las empresas en las transmisiones de derechos mineros, la ausencia de criterios objetivos y previamente definidos para valorar aquella solvencia, la utilización de los denominados proyectos de investigación complementaria sin una cobertura normativa y procedimental suficiente, las carencias en la planificación y práctica de la actividad inspectora, las dilaciones en la incoación de expedientes sancionadores y los déficits de coordinación administrativa en un ámbito particularmente sensible por afectar de manera directa a la seguridad de los trabajadores y al interés público. A juicio de este grupo, esa convergencia refuerza la solidez del dictamen y otorga mayor consistencia a sus conclusiones políticas.

Precisamente por esa misma razón, y sin poner en cuestión ni la regularidad procedimental de la Comisión ni la validez del dictamen aprobado, este grupo parlamentario quiere lamentar que la Comisión no hubiera recabado, con carácter previo a la aprobación del texto definitivo, un informe jurídico de los letrados de la Cámara. Dicho informe no constituía un requisito reglamentariamente impuesto para la aprobación del dictamen; pero sí habría supuesto una garantía adicional particularmente útil para depurar, en su caso, eventuales incorrecciones





técnico-jurídicas, afinar determinadas formulaciones y reforzar la seguridad jurídica del texto finalmente sometido a aprobación.

La conveniencia de ese informe resultaba todavía más evidente si se tiene en cuenta que las comisiones parlamentarias de investigación actúan en un terreno constitucionalmente delicado, en el que debe preservarse con todo rigor la distinción entre la depuración de responsabilidades políticas, que sí forma parte de la función parlamentaria de control, y la atribución de responsabilidades penales o administrativas personales, que en ningún caso corresponde a esta Cámara. No es casual que el propio dictamen recuerde expresamente la doctrina constitucional aplicable en esta materia. Un pronunciamiento previo de los letrados de la Junta General habría contribuido, por tanto, a dotar de una mayor fortaleza técnico-jurídica al texto y a prevenir controversias innecesarias sobre su formulación, sin alterar por ello el núcleo político de las conclusiones alcanzadas por la Comisión.

Junto a esa consideración, Convocatoria por Asturias entiende que el dictamen debería haber incorporado de modo expreso, entre las Administraciones cuya actuación u omisión presentan relevancia en la cadena de hechos que desembocó en el accidente investigado, al Ayuntamiento de Degaña. Este grupo no sostiene, ni puede sostener en sede parlamentaria, que la responsabilidad municipal sea equivalente a la que corresponde a quienes autorizaron, controlaron o dejaron de controlar desde la esfera autonómica las actuaciones administrativas más directamente conectadas con la explotación minera. Pero sí considera que el cuadro institucional de responsabilidades queda incompleto si se omite toda referencia al ámbito municipal, pese a que en él concurrían competencias propias de control de actividades, de disciplina y verificación en su respectivo ámbito, así como la obligación política elemental de reaccionar con diligencia ante una actividad que, por sus manifestaciones externas, por su incidencia territorial y por la notoriedad que alcanzó en el entorno local, no podía reputarse ajena al conocimiento o a la esfera de actuación del Ayuntamiento.

Por ello, el dictamen debió extender la apreciación de responsabilidad política e institucional también al Ayuntamiento de Degaña, no como Administración sustantivamente competente en materia minera, pero sí como Administración territorial directamente concernida por el ejercicio de potestades locales de control, vigilancia, verificación y reacción política e institucional frente a una actividad de extraordinaria sensibilidad, y respecto de la cual la pasividad municipal no puede tener un tratamiento exoneratorio o irrelevante en el relato parlamentario de responsabilidades. El Ayuntamiento tenía y tiene competencias en materia de licencias y de tributos que debía pagar la empresa que explotaba la mina de Cerredo, algo que por cierto no hizo. Además, y como se puso de manifiesto en sede parlamentaria, no era ningún secreto para nadie del concejo que había actividad minera en la mina de Zarréu. Otra cosa distinta es que la gente de Degaña pudiera conocer si esa actividad estaba amparada o no por alguna autorización administrativa. En cambio, el equipo de gobierno municipal, y particularmente su alcalde, sí tenían que saberlo porque para tener licencia municipal previamente es imprescindible haber obtenido el permiso correspondiente de la autoridad minera, permiso del que las empresas responsables carecían.

En coherencia con esa apreciación, este grupo entiende igualmente que entre las personas a las que cabe atribuir responsabilidad política debería incluirse al titular de la Alcaldía del Ayuntamiento de Degaña, en cuanto órgano superior de dirección política, representación institucional y coordinación del Gobierno municipal.

Resulta, a juicio de este grupo, particularmente grave la connivencia acreditada entre el alcalde y el principal empresario minero puesta de manifiesto en su comparecencia parlamentaria. Es compadreo, unido a la desidia del Ayuntamiento en relación con la actividad minera desarrollada, crea la apariencia de una inaceptable complicidad entre el alcalde de Degaña y el responsable directo de un accidente en el que murieron cinco mineros. Esa circunstancia



## Junta General del Principado de Asturias

---

debería llevar al alcalde a su inmediata dimisión. No obstante, hemos de señalar que la referencia al titular de la alcaldía debe entenderse, en todo caso, en el estricto plano de la responsabilidad política derivada del insuficiente ejercicio de las funciones de vigilancia, control y reacción propias del ámbito municipal, sin que ello suponga afirmación alguna sobre responsabilidades de otra naturaleza, cuya eventual apreciación corresponde exclusivamente a los órganos administrativos o jurisdiccionales competentes.

Por todo lo expuesto, el Grupo Parlamentario Convocatoria por Asturias interesa que, manteniéndose íntegramente el resto del dictamen aprobado por la Comisión, quede incorporada al debate plenario la siguiente posición política:

— Primero, la expresa constatación de que las conclusiones del dictamen presentan coincidencias esenciales con el informe de la Inspección General de Servicios del Principado de Asturias, circunstancia que refuerza su fundamento y credibilidad.

— Segundo, la manifestación de que habría resultado institucionalmente conveniente la solicitud previa de informe jurídico a los letrados de la Cámara, a fin de reforzar la seguridad jurídica del dictamen.

— Tercero, la inclusión del Ayuntamiento de Degaña entre las Administraciones con responsabilidad política e institucional en los hechos investigados, así como de la alcaldía de dicho ayuntamiento, entre los cargos públicos a los que alcanza esa responsabilidad política, en los términos de omisión institucional y de insuficiente ejercicio de las competencias municipales ya expuestos.

Palacio de la Junta General, 15 de junio de 2026. Javier González Vegas, portavoz.